



BOLETIN OFICIAL

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

BOLETIN OFICIAL

República Argentina

PODER EJECUTIVO

María Fabiana RIOS
Gobernadora

Dn. Roberto Luis CROCIANELLI
Vicegobernador

Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU
Ministro Jefe de Gabinete

Dr. Gustavo Alejandro ZANONE
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

C.P. Hiram Chistian Javier RUIZ
Ministro de Economía

Prof. Sandra Isabel MOLINA
Ministro de Educación

Dra. María Haydee GRIECO
Ministro de Salud

M.M.O. Manuel Fernando BENEGAS
Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

Sra. Inés Carolina YUTROVIC
Ministro de Trabajo

Dra. Marisa Emilce MONTERO
Ministro de Desarrollo Social

C.P. Fabio Alejandro DELAMATA
Ministro de Industria e Innovación Productiva

Lic. Ariel Ernesto MARTINEZ
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Sr. Omar Daniel NOGAR
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Sra. Nélida BELOUS
Secretario de Derechos Humanos

St. Gustavo Sergio LONGHI
Secretario de Representación Oficial del Gobierno
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lic. Osvaldo Julio MONTI
Secretario General de Gobierno

Dra. Leila Eleonora GIADAS
Secretario Legal y Técnico

Ushuaia, Miércoles 11 de Abril de 2012

LEY PROVINCIAL Nº 865

Sancionada el día 15 de Marzo de 2012.-

Promulgada el día 09 de Abril de 2012.-

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

ARTICULO 1º- Créase, en los términos del artículo 64 del Reglamento interno de Cámara legislativa, la Comisión Especial de Evaluación y Reforma del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), con la finalidad de elaborar un diagnóstico de situación y propuesta de reforma del mismo, y contará con amplias facultades para solicitar información de instituciones públicas o privadas vinculadas directa o indirectamente al Instituto.

ARTICULO 2º- Establécese que la Comisión creada por el artículo precedente estará conformada de la siguiente manera: un (1) legislador titular y un (1) suplente por cada bloque político.

ARTICULO 3º- Establécese que la Comisión deberá analizar los siguientes temas:

- a) situación presupuestaria;
- b) situación financiera;
- c) gestión y control administrativo;
- d) evaluación de créditos y acreencias;
- e) flujo de fondos y obligaciones financieras emergentes en el largo, mediano y corto plazo;
- f) análisis actuarial y perspectivas previsionales;
- g) estructura de inversiones y activos fijos;
- h) pautas de calidad, eficiencia y eficacia de las prestaciones y funcionamiento del mismo.

Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, la Comisión dará tratamiento a otros asuntos conexos que surjan del análisis de los mencionados.

ARTICULO 4º- Instrúyese al Directorio del IPAUSS que en un plazo no mayor a los diez (10) días de promulgada la presente, inicie un proceso de verificación, conciliación y consolidación de deudas, con intervención del Tribunal de Cuentas provincial, notificando a todas las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de presentarse para determinar los saldos pendientes de pagos hasta el 31 de diciembre de 2011, cálculo de intereses de acuerdo a normativa vigente, plazos de cancelación de pagos, determinación de la deuda consolidada en la Ley provincial 676, sentencias judiciales, otras condiciones, convenios o especificaciones propias de cada deuda. Dicho proceso deberá concluir con informe general y específico por cada jurisdicción firmado por el Directorio del IPAUSS, en un plazo no mayor a treinta (30) días de iniciado el proceso de verificación. El IPAUSS deberá notificar a cada

jurisdicción en situación deudora los informes de deudas que le corresponde elevados a la Comisión, en un plazo no mayor a los diez (10) días de remitidos.

ARTICULO 5º- Establécese que la Comisión se constituirá dentro de los cinco (5) días hábiles de promulgada la presente y por el término de ciento ochenta (180) días corridos, pudiendo prorrogarse su funcionamiento por igual período.

ARTICULO 6º- Facúltase a la Comisión para adoptar las siguientes medidas conducentes a la labor y análisis a los fines planteados:

- a) solicitar información a las autoridades del IPAUSS acorde a los temas establecidos en el artículo 3º;
- b) citar a directores y funcionarios del IPAUSS, autoridades y funcionarios provinciales y municipales;
- c) requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales;
- d) cualquier otra medida que resulte idónea para el desarrollo de la actividad de la Comisión.

ARTICULO 7º- Los directores y

funcionarios del IPAUSS tienen la obligación de:

- a) asistir a las citaciones realizadas por la Comisión;
 - b) elevar toda información solicitada en el marco de las funciones establecidas en el artículo 3°;
 - c) contestar toda notificación que le sea remitida en el marco de la Comisión;
 - d) cumplir con las instrucciones o acciones que la Comisión encomiende en el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 3°.
- La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas ut supra será considerada falta grave.

ARTICULO 8°.- Al finalizar su función, la Comisión elevará a la Cámara un informe completo de lo actuado y las conclusiones a las que arribe, pudiendo asimismo elaborar informes periódicos o parciales.

ARTICULO 9°.- Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión serán solventados por el presupuesto de la Cámara.

ARTICULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2012.

RODRIGUEZ

--- 0 ---

DECRETO N° 773 09-04-12

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 865, Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 723 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Cambiar de agrupamiento en el ámbito de la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, de la categoría diez (10) P.O.M. y S. a la categoría diez (10) P.A. y T., a la agente Nadia Soledad TESURI, legajo N° 29298006/00, a partir del día siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Hiram C.J. RUIZ

DECRETO N° 724 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Cambiar de agrupamiento en el ámbito de la Dirección General de Rentas Ushuaia, dependiente del Ministerio de Economía de la categoría diez (10) P.O.M. y S. a la categoría diez (10) P.A. y T., a la agente, Silvia Patricia CEBALLOS, legajo N° 16744097/00 a partir del día siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Hiram C.J. RUIZ

DECRETO N° 725 30-03-12

VISTO el expediente N° 19553-SD/11 del registro de esta Gobernación y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del Contrato de Servicio de Consultor Individual, suscripto el día 15 de diciembre de 2011, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Lic. Ariel Ernesto MARTINEZ y el Sr. Pablo Santiago COSTAMAGNA D.N.I. N° 17.714.173.

Que el presente contrato se celebra en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME- 11740-AR «Competitividad y Gestión Sustentable de Cadenas Productivas de Tierra del Fuego» registrado bajo el N° 14419 y ratificado mediante Decreto Provincial N° 1131/10 y aprobado por Resolución N° 164/11 de la Legislatura Provincial (fs. 18/23).

Que el Contrato de Consultor Individual ha sido registrado con el N° 15537, siendo procedente su ratificación.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto (fs. 48).

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todas sus Cláusulas el Contrato de Consultor Individual, suscripto a los dos (02) días del mes de marzo de 2012, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Lic. Ariel Ernesto MARTINEZ, y el Sr. Pablo Santiago COSTAMAGNA D.N.I. N° 17.714.173, registrado bajo el N° 15537 cuya copia autenticada forma parte del presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con los fondos de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 1710757/8 del Banco de Tierra del Fuego e imputados a la partida presupuestaria UGG 8992 Inciso 003 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 726 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Provincial n° 1276/04, la adscripción del docente Carlos Alberto FERRER, Legajo N° 16384604/01.

ARTÍCULO 2°.- Adscribir al Bloque Partido Justicialista de la Legislatura Provincial, al docente Carlos Alberto FERRER, legajo N° 16384604/01, a partir del día siguiente de su notificación y por el término de trescientos sesenta y cinco (365), en virtud de lo establecido en el Decreto Nacional N° 2058/85, anexo I, punto 2.3 y 4 - Reglamentario de la Ley Nacional 22.251.

ARTÍCULO 3°.- La institución que solicitó la adscripción del docente de referencia deberá enviar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a la Dirección General de Personal dependiente del Minis-

terio de Educación, un informe sobre la real prestación de servicios del mes anterior; teniendo en cuenta que la no presentación en tiempo y forma de la información requerida, dará lugar a la suspensión del pago de los haberes.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 727 30-03-12

VISTO el expediente N° 12465/ED-2011 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita un subsidio de PESOS UN MIL (\$1.000) a favor del señor TRONCOSO PLANES Victor Emanuel, D.N.I. N° 32.130.822.

Que el mencionado solicita dicho aporte económico con el objeto de participar del Festival Nacional de Cortometrajes «Corto Rodado», que se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Que es intención de éste Poder Ejecutivo apoyar este tipo de emprendimientos que contribuyen al perfeccionamiento y capacitación de jóvenes locales, en encuentros a nivel nacional.

Que la ayuda solicitada ha sido destinada a cubrir los gastos que generó el traslado del interesado a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Que el aporte monetario deberá ser rendido de acuerdo a la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que obra a fojas dos (2) la intervención de la entonces Subsecretaría de Cultura autorizando el aporte de PESOS UN MIL (\$1.000.-). Que el gasto se encuentra imputado preventivamente en la partida presupuestaria del ejercicio económico financiero en vigencia.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor del Señor TRONCOSO PLANES Victor Emanuel, D.N.I. Nº 32.130.822, por la SUMA DE PESOS UN MIL (\$1.000.-), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser rendido ante la Secretaría de Cultura del Ministerio de Jefatura de Gabinete, dentro de los sesenta (60) días, en los términos expuestos por la Resolución Plenaria Nº 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado a la U.G.G. 8500, Inciso 5, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 728 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Declarar que el presente acto importa el deber de pronunciarse fijado por el artículo 14º inciso 9) de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, frente a la petición del interesado.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial deducida por la Sra. Martha Mabel GUTIERREZ, D.N.I. Nº 11.388.344, toda vez que la misma no encuadra dentro de las excepciones regladas por el artículo 2º del Decreto Provincial Nº 24/08. Ello conforme los considerandos precedente y el Dictamen S.L. y T. Nº 80/11.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. Nº 80/11.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al Ministerio de Trabajo con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. Nº 80/11.

ARTÍCULO 5°.- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 729 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 1871/94, la promoción de categoría 10 P.A. y T. a categoría 15 P.A. y T., en el ámbito de la Dirección General de Administración Financiera, del agente Martín Julián SANCHEZ, legajo Nº 27580467/01. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Promover a categoría 15 P.A. y T., en el Ministerio de Salud - Dirección General de Administración Financiera, al agente Martín Julián SANCHEZ, legajo Nº 27580467/01, a partir del día siguiente a su notificación.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto Nº 8005, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes correspondan, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

María H. GRIECO

DECRETO Nº 730 30-03-12

VISTO el Expediente Nº 1610-GM/10 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición víveres destinados a la Escuela Superior de Policía, «Comisario Inspector @ Héctor Aníbal Allen».

Que mediante Resolución M.G.C.G. y J. Nº 340/10, obrante de fs. 112 a fs. 122, se autorizó el llamado a Licitación Pública, se aprobó el pliego de bases y condiciones y se designó la Comisión de preadjudicación para el estudio de las ofertas.

Que se realizó la Apertura de Sobres de la Licitación Pública Nº 19/10, recibiendo ofertas de las firmas Panificadora La Nueva S.R.L. y Gualdesi Hermanos S.R.L., según consta en Acta obrante a fs. 145.

Que ha tomado la debida intervención el área solicitante y la entonces Sra. Secretaria de Seguridad a fs. 326 requiriendo que se deje sin efecto la Licitación Pública Nº 19/10. Que por lo expuesto sería proce-

dente dejar sin efecto dicha licitación.

Que en virtud de lo establecido en el punto 22.2 de la Cláusula particular 22 del Pliego Licitado obrante a fs. 120/121, corresponden la devolución de las garantías pertinentes.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135º de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 19/10, por la cual tramitó la adquisición de víveres destinados a la Escuela Superior de Policía, «Comisario Inspector @ Héctor Aníbal Allen», procediéndose a la devolución de las garantías pertinentes, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a los interesados, comunicar. Dar al Boletín de la Provincia y archivar.

RIOS

Hiram C.J. RUIZ

DECRETO Nº 731 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicio del señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente Lic. Ariel Ernesto MARTÍNEZ, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día veinte (20) al veintitrés (23) de marzo de 2012, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El citado funcionario reasumió sus funciones el día veintitrés (23) de marzo de 2012.

ARTÍCULO 3°.- Reconocer la liquidación de dos (02) días de viáticos a favor del funcionario mencionado en el artículo 1º.

ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 3º será atendido con fondos de afectación específica a través de la cuenta corriente Nº 1710670/4 del Banco de Tierra del Fuego e imputado a la partida presupuestaria UGG 8978 Inciso 003 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- De forma.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO Nº 732 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Rectificar la fecha de usufructo enunciadas en el primer considerando y en el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 0369/12, donde dice: durante los días trece (13) de febrero y hasta el veinticuatro (24) de marzo de 2012, debe decir: durante los días trece (13) de febrero y hasta el veinticuatro (24) de febrero de 2012".

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO Nº 733 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Artículo 1º del Decreto Provincial Nº 3038/11, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 1º.- Designese Ministro de Industria e Innovación Productiva, al C. P. Fabio Alejandro DELAMATA, D.N.I. Nº 20.682.694, a partir del día diecisiete (17) de Diciembre de 2011».

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO Nº 734 30-03-12

ARTÍCULO 1°.- A partir del día cinco (05) de marzo de 2012, reasumió sus funciones el señor Subsecretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental, Téc. Sup. Turismo Pablo Osvaldo PFURR.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO Nº 735 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- A partir del día veintisiete (27) de enero de 2012, reasumió sus funciones el señor Secretario de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Don Gustavo Sergio LONGHI.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 736 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Comisionar al señor Secretario de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Gustavo Sergio LONGHI, a las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a partir del día veintinueve (29) de marzo de 2012, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por los tramos: BUENOS AIRES - RÍO GRANDE y USHUAIA - BUENOS AIRES, y la liquidación de viáticos correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 737 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Comisionar al señor Subsecretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Téc. Sup. Turismo Pablo Osvaldo PFURR, a la ciudad de Ushuaia, a partir del día treinta (30) de marzo de 2012, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por los tramos: BUENOS AIRES USHUAIA - BUENOS AIRES y la liquidación de viáticos correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 738 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- DISPONER el pase a Situación de Retiro Voluntario del Suboficial Mayor Walter Rubén Eduardo RUIZ, clase 1966, Legajo Personal N° 80.765, D.N.I. N° 17.723.067, a partir de la notificación del Cómputo Final de Servicios prestados. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER que el Suboficial Mayor Walter Rubén Eduardo RUIZ, continuará percibiendo sus haberes en la Policía de la Provincia, hasta la obtención del Beneficio de Retiro.

ARTÍCULO 3°.- ELEVAR lo actuado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina para la emisión del acto administrativo por el cual le acuerde el Beneficio de Retiro Voluntario, en función al Acta Acuerdo del 16/01/01 suscripta entre el Ministerio del Interior y la citada Caja, ratificado mediante Decreto Nacional N° 407/05.

ARTÍCULO 4°.- ENVIAR a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial, y Compensadora para el Personal Policía del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la documentación necesaria para la emisión del acto administrativo por el cual se otorgue el Beneficio de Haber Compensatorio.

ARTÍCULO 5°.- Notificar al causante con copia autenticada del presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 739 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Reubicar escalafonariamente al Sr. Néstor David ACOSTA, legajo N° 22213030/00, asignando al mismo el grado de Oficial Subadjutor, Escalafón Profesional del Servicio Penitenciario Provincial, a partir del día siguiente a su notificación, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Instruir a la Secretaría General de Gobierno y al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, a los efectos que arbitren los medios necesarios para dar de baja el legajo del interesado, en esta Administración Pública.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado, con copia autenticada del presente Decreto.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 740 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Rescindir a partir del día primero (01) de febrero del año 2012 el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el entonces Ministro de Trabajo Dr. Marcelo O. ECHAZÚ y el Sr. Norberto Javier APARICIO, D.N.I. N° 22.281.175, registrado bajo el N° 15109, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Derogar el Decreto Provincial N° 1256/11, mediante el cual se ratificó el Contrato de Locación de Servicios, suscripto el día diez (10) de mayo de 2011, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el entonces Ministro de Trabajo Dr. Marcelo O. ECHAZÚ y el Sr. Norberto Javier APARICIO, D.N.I. N° 22.281.175, registrado bajo el N° 15109. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Inés C. YUTROVIC

DECRETO N° 741 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Cambiar de agrupamiento en el ámbito de la Dirección de Programas Productivos de la ciudad de Río Grande, dependiente del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, de la categoría diez (10) P.O.M. y S. a la categoría diez (10) P.A. y T., al agente Jonathan Gonzalo CHAMORRO, legajo N° 28905341/00, a partir del día siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Fabio A. DELAMATA

DECRETO N° 742 03-04-12

VISTO el expediente N° 000781-ED-2011, del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita un aporte económico a favor del señor PESSOA, Ricardo Walter, D.N.I. N° 12.781.926, en representación de la Asociación Civil Teatro del HAIN de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS DOCE MIL (\$12.000,00.-), destinados a contribuir en los gastos de organización del Selectivo Provincial de Teatro 2011.

Que este selectivo se llevó a cabo en la ciudad de Ushuaia entre los días 17 al 20 de marzo del año 2011, con la participación de grupos teatrales de toda la Provincia.

Que del mencionado festival se seleccionó al Grupo de Teatro ganador que participará en el «Festival Regional del Teatro».

Que es intención de este Poder Ejecutivo contribuir a fomentar el valor a la Cultura, haciendo saber que aún en este apartado sector de nuestra patria, también existen valores culturales que engrandecen a nuestro País.

Que el gasto se encuentra imputado preventivamente en la partida presupuestaria del ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que el aporte monetario requerido deberá ser rendido de acuerdo a la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que obra a fojas diez (10) la intervención de la entonces Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología autorizando el aporte de PESOS DOCE MIL (\$12.000,00). Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Porello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor del Señor Ricardo Walter PESSOA D.N.I. N° 12.781.926, en representación de la Asociación Civil Teatro del

HAIN de la ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00.-); por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser rendido ante la Subsecretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología, dentro de los sesenta (60) días, en los términos expuestos por la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado a la partida presupuestaria U.G.G 8500 Inciso 517, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 743 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Desestimar in limine, los reclamos formulados por los agentes detallados en el Anexo I del presente, con el objetivo que se les liquide y pague el adicional «Recuperación de Poder Adquisitivo Salarial» - REPAS- reestablecido por la Ley Provincial N° 621, desde el mes de enero del año 2004 hasta el mes de noviembre del año 2010, ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. N° 82/12.

ARTÍCULO 2°.- Dejar a salvo los derechos que pudieran corresponder a los peticionantes en los exactos términos de la sentencia recaída en los autos caratulados «Asociación Trabajadores del Estado c/ Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.c.I.A.S. s/Contencioso Administrativo» (Expte N° 3475), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Distrito Judicial Sur.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a cada agente en el domicilio constituido en su presentación, con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 82/12.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 744 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- Reubicar a la agente Zarina Eladia ROSS, legajo N° 28509523/00, categoría «D», del Escalafón Profesional Universitario (E.P.U.), en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente del Ministerio de Educación, a partir del día hábil siguiente de su notificación. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 4000, inciso 1 - Gastos en Personal.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 745 03-04-12

VISTO el expediente N° 11065-ED/2011 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. DE FILIPPI, Eliana Margarita, D.N.I. N° 13.109.707, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700.-)

Que la mencionada participó del «Festival Internacional de Ushuaia», que se llevó a cabo del 2 al 16 de abril de 2011 en la ciudad de Ushuaia.

Que es intención de este Poder Ejecutivo apoyar este tipo de actividades, de las que participan artistas locales en eventos internacionales de esta magnitud.

Que la ayuda solicitada ha sido destinada a cubrir los gastos que generó el traslado de la ciudad de Río Grande a Ushuaia, para participar en los ensayos de dicho festival.

Que el aporte monetario requerido deberá ser rendido de acuerdo a la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que obra a fojas dos (2) la intervención de la entonces Sra. Subsecretaria de Cultura autorizando el aporte de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700,00.-).

Que el gasto se encuentra imputado preventivamente en la partida presupuestaria del ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor de la Sra. DE FILIPPI, Eliana Margarita D.N.I. N° 13.109.707, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700,00.-). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado en el artículo precedente deberá ser rendido ante la Secretaría de Cultura dependiente de la Jefatura de Gabinete, dentro de los sesenta (60) días, en los términos expuestos por la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, deberá ser imputado a la U.G.G 8500, Inciso 5, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS

Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO N° 746 03-04-12

VISTO el expediente N° 009011-ED/2011 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el otorgamiento de un subsidio a favor del Grupo Musical «3 Orillas», siendo el responsable de cobrar el mismo, uno de sus integrantes del grupo Señor PROBOSTE Cesar Mauricio, D.N.I. N° 26.645.926, obrando la autorización por parte del grupo a fojas veintisiete (27).

Que el mencionado grupo se trasladó a distintas provincias de nuestro país como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Buenos

Aires para realizar la presentación de su primer trabajo discográfico «Historias Nuevas», durante el año 2011.

Que es intención de este Poder Ejecutivo apoyar este tipo de emprendimientos que contribuyen a la promoción de artistas y bandas locales.

Que la ayuda solicitada será destinada a cubrir parte de los gastos generados en los traslados aéreos/terrestres, necesarios para la presentación de su disco.

Que el aporte monetario deberá ser rendido de acuerdo a la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que obra a fojas dos (2) la intervención de la entonces Sra. Subsecretaria de Cultura autorizando el aporte de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-).

Que el gasto se encuentra imputado preventivamente en la partida presupuestaria del ejercicio económico financiero en vigencia obrante a fs. treinta y dos (32).

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un subsidio a favor del Grupo Musical «3 Orillas», por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000.-), siendo responsable de cobrar el mismo, el integrante del grupo Señor PROBOSTE, César Mauricio, D.N.I. N° 26.645.926. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser rendido ante la Secretaría de Cultura del Ministerio de Jefatura de Gabinete, dentro de los sesenta (60) días en los términos expuestos por la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la U.G.G 8500 Inciso 5, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar al inte-

resado con copia autenticada del presente. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 747 03-04-12

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la adscripción al ámbito del Departamento Ejecutivo de la Comuna de Tolhuin, a la agente Graciela Elizabeth OJEDA, categoría 10 P.A. y T., legajo Nº 16083171/00, a partir del día siguiente de su notificación y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, en virtud a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 2058/85, anexo I, punto 2.3 - Reglamentario de la Ley Nacional Nº 22.251.

ARTÍCULO 2º.- La institución que solicitó la adscripción de la agente de referencia deberá enviar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a la Dirección General de Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, un informe sobre la real prestación de servicios del mes anterior; teniendo en cuenta que la no presentación en tiempo y forma de la información requerida, dará lugar a la suspensión del pago de los haberes.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 748 03-04-12

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la petición de ingreso a planta permanente del Estado Provincial, deducida por la Señora Patricia Elisabet GALLO, D.N.I. Nº 16.271.474, toda vez que la misma no encuadra dentro de las excepciones regladas por el artículo 2º del Decreto Provincial Nº 24/08. Ello, conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L. y T. Nº 64/12.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. Nº 64/12.

ARTÍCULO 3º.- De forma.

RIOS
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 749 03-04-12

VISTO el expediente Nº 10859-ED/2011 del Registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita un subsidio por la suma PESOS SIETE MIL (\$7.000.-) a favor del señor DE ANTUENO Pablo Tomás, D.N.I. Nº 30.128.708 quien tuvo a su cargo la organización del «Festival Internacional de Cine de Montaña: USHUAIA SHH...», siendo responsable de cobrar el mismo el Señor URÍA Nahuel Fernando, D.N.I. 26.974.978.

Que el Sr. DE ANTUENO solicitó dicho aporte económico a fin de solventar algunos de los gastos que demandó la organización del evento, como ser la impresión del material gráfico, el costo del servicio de traducción y subtítulos y el traslado y alojamiento de los invitados y jurados que participaron de la V edición de dicho festival, que se llevó a cabo entre los días dieciocho (18) y veintinueve (21) de agosto de 2011, en la ciudad de Ushuaia.

Que es intención de éste Poder Ejecutivo apoyar este tipo de emprendimientos precursores, realizados y producidos por jóvenes que viven y desarrollan sus actividades en la Provincia de Tierra del Fuego.

Que la ayuda solicitada tuvo por objeto cubrir los gastos demandados por la organización del evento.

Que el aporte monetario requerido deberá ser rendido de acuerdo a la Resolución Plenaria Nº 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Que a fojas tres (3) obra la intervención de la entonces Subsecretaría de Cultura, autorizando el aporte de PESOS SIETE MIL (\$7.000.-) y a fojas diecisiete (17) obra la autorización de la suscripta.

Que el gasto se encuentra imputado preventivamente a la Partida Presupuestaria del ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135º de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otorgar un subsidio a favor del Señor DE ANTUENO Pablo Tomás Nº 30.128.708, destinado a solventar ciertos gastos que demandó la organización del «V Festival Internacional de Cine de Montaña: USHUAIA SHH...», por la suma de PESOS SIETE MIL (\$7.000,00), siendo responsable de cobrar el mismo el Señor URÍA Nahuel Fernando, D.N.I. Nº 26.974.978; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que el subsidio dispuesto en el artículo precedente deberá ser rendido ante la Secretaría de Cultura del Ministerio de Jefatura de Gabinete, dentro de los sesenta (60) días, en los términos expuestos por la Resolución Plenaria Nº 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente, a la partida presupuestaria U.G.G.8500, Inciso 5, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Guillermo H. ARAMBURU

DECRETO Nº 750 03-04-12

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el pase a Situación de Retiro Voluntario del Suboficial Escribiente Walter Ernesto RATKEVICH, clase 1962, Legajo Personal Nº 80.814, D.N.I. Nº 16.196.138, a partir de la notificación del Cómputo Final de Servicios prestados. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- ELEVAR lo actuado a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para la emisión del acto administrativo por el cual se le acuerde el Beneficio de Retiro Voluntario, de conformidad con las disposiciones de la Ley Provincial Nº 834.

ARTÍCULO 3º.- INDICAR al Suboficial Escribiente Walter Ernesto RATKEVICH que a los efectos de la Obra Social rige lo establecido en los Artículos 45º y 46º de la Ley Provincial Nº 834.

ARTÍCULO 4º.- Notificar al causante con copia autenticada del presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO Nº 751 03-04-12

VISTO el Expediente Nº 19718-GM/11 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la denominación «Sala Antártida Argentina» a un espacio del edificio de la Casa de Gobierno Provincial, ubicada en la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Que dicha iniciativa se fundamenta en el interés de este Gobierno por dedicar a la Antártida Argentina, emblema de la historia e identidad provincial, un espacio representativo de carácter institucional en el cual se exhiban imágenes y material alusivo.

Que los documentos históricos y actuales así como la cartografía y la fotografía permiten la transmisión de experiencias y valores a la sociedad a través de una comunicación que alcanza a todas las generaciones, y posibilita apreciar sucesos trascendentes de la historia y su evolución.

Que en virtud de la condición de jurisdicción provincial de la Antártida Argentina a partir de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.552, es pertinente promover e impulsar todas aquellas acciones que permitan difundir su valor histórico, geopolítico, ambiental y científico, afirmando al mismo tiempo su carácter regional y enalteciendo su sentido patriótico.

Que ante lo expuesto, resulta pertinente mediante el presente acto administrativo denominar «Sala Antártida Argentina» al espacio ubicado en el 2º Piso de la Casa de Gobierno Provincial y conocido como «Salón Azul».

Que la suscripta se encuentra fa-

cultada para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Denominar «Sala Antártida Argentina» al espacio ubicado en el 2° Piso de la Casa de Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en ciudad de Ushuaia, conocido como «Salón Azul». Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a las Direcciones de Administración de los Ministerios y Secretarías. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 752 03-04-12

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la petición de pago del REPAS planteada por el Sr. Jorge GUTIERREZ MILLAN, en los términos de la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2009 dictada en los autos «Asociación Trabajadores del Estado c/ Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S s/ contencioso administrativo» (Expte N° 3475), confirmada por la Cámara de Apelaciones en la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2010. Ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen S.L y T. N° 037/12.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al causante, con copia autenticada del presente y del Dictamen S.L. y T. N° 037/12, haciéndole saber que en el plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente, podrá interponer Recurso de Reconsideración conforme los artículos 127° y sgtes. de la Ley Provincial N° 141 de Procedimientos Administrativos

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 753 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Acéptese la re-

nuncia presentada por el señor Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Dr. Rubén Darío MORENO, D.N.I. N° 17.784.435, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS
Hiram C.J. RUIZ

DECRETO N° 754 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Comisionar a la señora Ministra de Educación, Lic. Sandra Isabel MOLINA, a la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), por los motivos expuestos en el exordio, a partir del día nueve (09) de Abril de 2012.

ARTÍCULO 2°.- El presente no generará gastos al erario provincial.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 755 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios efectuada por la señora Ministro de Salud, Dra. María Haydée GRIECO, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el periodo comprendido entre los días primero (1°) y hasta el seis (06) de marzo de 2012. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- La citada funcionaria reasumió sus funciones el día seis (06) de marzo de 2012.

ARTÍCULO 3°.- La presente comisión de servicio no generó gastos de pasajes y viáticos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 756 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el inciso d) del Artículo 3° del Decreto Provincial N° 0227/12, que quedará redactado de la siguiente manera: «Mes de Octubre en adelante: PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 1.943.-) mensuales.»

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, archivar.

RIOS
Hiram C.J. RUIZ

DECRETO N° 757 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Designese Subsecretario de Control y Gestión, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, al C.P. Federico Rubén BEURET, D.N.I. N° 22.559.220, a partir del día veintiuno (21) de marzo de 2012.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

RIOS
Marisa E. MONTERO

DECRETO N° 758 04-04-12

VISTO el expediente N° 16492-SD/11 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el Contrato, suscripto el día quince (15) de marzo de 2012, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Lic. Ariel MARTÍNEZ y el Sr. Miguel Ángel CASALINUOVO, D.N.I. N° 17.930.588.

Que el mismo ha sido registrado bajo el N° 15756, siendo procedente su ratificación.

Que a Fs. 50 consta respaldo presupuestario.

Que los gastos que ocasione el Contrato serán afrontados con fondos provenientes de la Ley Provincial N° 211, de afectación específica.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente en virtud de lo establecido en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Contrato, suscripto el día quince (15) de marzo de 2012, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el señor Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Lic. Ariel MARTÍNEZ y el Sr. Miguel Ángel CASALINUOVO, D.N.I. N° 17.930.588, registrado bajo el N° 15756, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias UGG 8968, Inc. 349 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia, con fondos provenientes de la cuenta corriente N° 1710602/5 del Banco Provincia de Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Gustavo A. ZANONE

DECRETO N° 759 04-04-12

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a la petición formulada por el docente Julio IFRAN, D.N.I. N° 20.657.226, y en consecuencia, justificar con goce de haberes las inasistencias incurridas por el mismo desde el día (19) de mayo de 2011 y hasta el día cuatro (4) de septiembre de 2011, respecto de las dieciséis (16) horas cátedra de Nivel Inicial, ostentadas por el interesado en carácter de suplente, en el Jardín de Infantes N° 5 «Tol Olejce» de la ciudad de Río Grande. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en virtud del Dictamen S.L. y T. N° 51/12.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Haberes que deberán proceder al reintegro de las sumas descontadas en el periodo antes referenciado a favor del docente Julio IFRAN. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en virtud del Dictamen S.L. y T. N° 51/12.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

RIOS
Sandra I. MOLINA

RESOLUCIONES PLENARIAS TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOL. Nº 445

13-12-11

VISTO: el Expediente del Registro de la Gobernación Letra GM Nº 11044 del año 2010, catatulado: "S/ CONTRATACIONES DE PERSONAL P/ LOS REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA" y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de autorización para la contratación de personal para cubrir tareas en las distintas dependencias de los Registros Civiles de la Provincia.

Que en este sentido, a fs. 02 se agrega la Nota elevada por el Director Provincial del Registro Civil Rodrigo GUIDI al Secretario de Asuntos Electorales y Registrales, Don Daniel LEON, señalando que dentro del plan de mejoramiento impulsado desde dicha Secretaría y orientado a brindar un mejor servicio a la comunidad, se procedió a realizar un llamado interno en la Administración Pública para dotar de más personal a las tres Oficinas de los Registros Civiles.

Que en ese orden con fecha 09 de marzo de 2011 se remitió la Circular Nº 21/11, sin embargo informa que la convocatoria tuvo un mínimo resultado en la ciudad de Ushuaia, en virtud de la negativa de los directivos de las áreas a las que pertenecía el agente que había mostrado interés de prestar servicios en el Registro Civil. Por otro lado no hubo candidatos para el Registro en la ciudad de Río Grande, ni para el de la Comuna de Tolhuin.

Que el Director del Registro Civil mencionó a su vez que, dado que a las tareas habituales se agregaron la tramitación de los pasaportes y siendo que por la inclusión de nuevas tecnologías en la toma de trámites se generó una mayor concurrencia del público en general por la celeridad de los mismos, así como por el crecimiento poblacional, el personal de los tres Registros Civiles extrema esfuerzos para llegar a la eficiencia requerida.

Que asimismo indicó que ante la imposibilidad de contar con agentes propios de la Administración Pública que se sumen a la planta de personal del Registro Civil, resultaba conveniente, con carácter de excepcional, proceder a contratar personal y de esa manera cubrir un mínimo indispensable para un mejor servicio.

Que a fs. 03/05 se agregan las Circularizaciones internas en la Administración recludando personal Nº 02/10, 16/11 y 21/11, a fs. 06 se agrega el Informe Nº 3240/2011 S.R.F.I. de fecha 14/06/2011 por el que la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, señaló que debido a estrictas razones de servicio, no se autorizaba la reubicación de la agente Alejandra RIZZI, sin un reemplazo previo.

Que a fs. 12 se agrega el Informe D.G.A.J.-M.G.C.G. Y J. Nº 134/11 de la Dra. Gabriela ALCARAZ, por el que la misma indica que previo a emitir opinión, debía adjuntarse un informe pormenorizado en relación a la estructura y funciones vigentes asignadas al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cantidad de agentes que actualmente prestan servicios en las diferentes delegaciones, tareas que desarrollaría el personal a contratar y todo otro dato de interés.

Que a fs. 13/23 se agrega el Informe Nº 254/2011 Letra D.G.R.E.C.C.P., por el que el Jefe del Departamento de Administración y Despacho General de la Dirección General del Registro Civil de Tierra del Fuego, Germán Abel SUAREZ, indica las estadísticas de trámites realizados por los Registros Civiles de la Provincia durante los años 2009, 2010 y primer semestre de 2011.

Que a fin de poder diferenciar los trámites manuales y la implementación de la digitalización de los mismos que se dio en el mes de julio de 2010, elevó un cuadro comparativo entre el segundo semestre de 2009 – primer semestre 2010 y segundo semestre 2010 – primer semestre 2011. Además se anexó la planilla del personal que efectivamente presta servicios en las distintas oficinas seccionales.

Que a fs. 24/25 se agrega Informe Nº 49/11 letra: SAEYR, emitido por el Secretario de Asuntos Electorales y Registrales MGCG y J. Sr. Daniel Alejandro LEON, quien manifiesta que la cantidad de trámites se ha incrementado, que ello no se ha visto acompañado por un incremento en el número de personal y que para mantener un trabajo mínimamente ordenado y eficiente se requiere la contratación de

seis (6) agentes para el registro Civil de Río Grande, dos (2) en Tolhuin y dos (2) en Ushuaia, para realizar tareas que son propias y específicas del Registro Civil.

Que a fs. 26/27 se agrega el Informe D.G.A.J.-M.G.C.G. y J. Nº 155/11 emitido por la Dra. Gabriela Elián ALCARAZ, quien luego de analizar los antecedentes del caso, tomando en consideración que las diferentes convocatorias para la reubicación de personal administrativo de la Administración Pública dio resultado negativo y teniendo presente la urgencia y necesidades reales de servicio de contar con mayor personal debido a que el plantel actual no logra cubrir las tareas encomendadas al registro Civil, se podría encuadrar y justificar la contratación del personal en razón de la "necesidad funcional", conforme lo expuesto en el art. 73, inc. 2º de la Constitución Provincial.

Que a su vez señala que la contratación de personal se debería realizar por un período acotado en el tiempo, es decir seis (6) meses; tiempo razonable a fin de proceder a realizar la reestructuración de personal y solicitar a la autoridad competente la autorización para realizar a través de mecanismos objetivos de selección, el ingreso a Personal Administrativo a la Planta Permanente de la Administración Pública (Ley 22140, Decreto Provincial Nº 3683/07 y Nº 24/08). No obstante lo cual, indicó que debía darse intervención a este Organismo para que se expidiera en el marco de estos actuados.

Que así las cosas, el Secretario de Asuntos Electorales y Registrales MGCG y J. Sr. Daniel Alejandro LEON elevó las actuaciones a este Tribunal de Cuentas mediante el Informe SAEYR Nº 53 (fs. 28) indicando al respecto que se dio trámite a un pedido de contratación de personal dado que se realizaron diferentes llamados internos en la Administración Pública tendientes a reubicar personal, pero que los mismos no dieron resultado positivo, por lo que requiere la intervención de este Organismo, en función de lo indicado en el Informe DGAJ-MGCG y J. Nº 155/11.

Que así las cosas, a fs. 29/32 se agrega el Informe Legal Nº 373/11 Letra TCP-CA emitido por la Dra. Maribel PASTOR, quien encuadra la intervención de este Tribunal en el marco de un pedido de asesoramiento, conforme lo dispuesto en el art. 2º inc. f) de la Ley Provincial Nº 50.

Que sobre el particular la asesora entiende que no se encuentran acreditados los extremos requeridos en el art. 73 inc. 2º de la Constitución Provincial que justifiquen las contrataciones bajo análisis, ello en función de que el personal contratado estaría destinado a cumplir funciones propias y habituales de la Administración y a que tampoco revisten el carácter de temporales.

Que asimismo manifiesta la letrada interviniente que no se ha acreditado la inexistencia de vacantes en la planta permanente de la Administración Central como así tampoco el inicio de los trámites pertinentes destinados a la selección de personal para el ingreso de personal (conf. Normativa provincial – Decretos Provincial es Nº 3683/07 y ctes.) pese al tiempo transcurrido desde la asignación de las nuevas funciones al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Que el Prosecretario Legal DR. Oscar SUAREZ comparte el análisis realizado por la letrada, conforme surge de fs. 32 via.

Que a fs. 33/34 se anuda el Informe Legal Nº 428/2011 Letra TCP-SL emitido por el Secretario Legal de este Tribunal de Cuentas, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, quien se expidió en los siguientes términos:

"Sobre el particular cabe señalar que si bien se comparten los términos expuestos en el Informe Legal Nº 373/11 Letra TCP-CA emitido por la Dra. Maribel PASTOR, cabe efectuar una aclaración en lo atinente a la posibilidad de dar curso por parte de la Dirección Provincial del Registro Civil a las contrataciones cuyo pedido tramita por los presentes actuados.

Así las cosas, si bien las tareas por las que se pretende llevar a cabo las contrataciones, en principio hacen al normal funcionamiento de los Registros Civiles de la Provincia, lo cierto es que momentáneamente puede entenderse configurado el extremo de "necesidad funcional" requerido en el art. 73 de la Carta Magna Provincial. Ello en función de que desde el área requirente se han efectuado tres circularizaciones internas en la Administración (conf. fs. 03/05) solicitando la reubicación de personal, todas ellas con resultado negativo.

Asimismo, cabe tomar en especial consideración el Informe Nº 254/2011 Letra D.G.R.E.C.C.P. que se anuda a fs. 13/23, emitido por el Jefe del Dpto. Adm. y Desp. Gral. Dir. Gral. Registro Civil CCF, Germán Abel SUAREZ, quien adjunta las Estadísticas de Trámites realizados por los Registros Civiles de la Provincia durante los años 2009, 2010 y primer semestre del 2011, así como un cuadro comparativo entre el segundo semestre 2009 – primer semestre 2010 y segundo semestre 2010 – primer semestre 2011.

Se anexa además planilla del personal que actualmente presta servicios en las distintas oficinas seccionales de los Registros Civiles Provinciales. De todo lo cual se desprende que efectivamente ha habido un incremento en las tareas como consecuencia de la tramitación de los Pasaportes que pasaron de la esfera de la Policía Federal a los Registros Civiles, así como por los trámites generados a raíz del nuevo formato del Documento Nacional de Identidad. Incremento que no ha sido acompañado por un aumento en la cantidad de personal abocado a cubrir esas nuevas labores.

Consecuentemente, analizadas las constancias agregadas a las situaciones, entiendo que se encuentra acreditada la "necesidad funcional" que justifica la contratación temporal de personal a fin de no resentir el servicio. Na obstante ello, tratándose de tareas que hacen al normal funcionamiento de los Registros Civiles y que no se encuentran acotados en el tiempo, paralelamente deberán arbitrarse las medidas tendientes a cubrir tales tareas con personal de planta permanente, tal como lo señalara la Dra. PASTOR en su informe prechado.

Por último, la cuestión relativa a la especialidad, deberá ser analizada una vez que se incorporen elementos a las actuaciones que así lo permitan.

En virtud de todo lo expuesto, gira las actuaciones para continuidad del trámite".

Que este Plenario comparte y hace propias los términos vertidos en el Informe Legal emitida por el Secretario Legal de este Tribunal de Cuentas.

Que los suscriptos emiten el presente acto administrativo en el marco de lo previsto en los artículos 2° inc. j), 27 cc y ss de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Hacer saber al Secretario de Asuntos Electorales y Registrales del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, Sr. Daniel Alejandro LEON, que a partir de los antecedentes anudados a las presentes actuaciones, este Tribunal de Cuentas entiende que se encuentra acreditada la "necesidad funcional" exigida por el artículo 73, inc. 2° de la Constitución Provincial, toda vez que ha quedado demostrado el aumento de tareas a cargo de los Registros Civiles Provinciales, sin un correlativo aumento de personal que cubra las mismas. Por lo que en principio se justificaria la contratación temporal de personal a fin de no resentir el servicio. En cuanto a la especialidad, se difiere su tratamiento para el momento en que se analice cada contratación en particular, en el marco del control preventivo en cabeza de este Organismo.

ARTICULO 2°.- Recomendar al Director Provincial del Registro Civil, Sr. Rodrigo GUIDI, que paralelamente a la tramitación de la contratación temporal de personal, arbitre las medidas tendientes a cubrir las nuevas tareas a cargo del Registro Civil con personal de planta permanente, dado que aquéllas hacen al normal funcionamiento del área a su cargo.

ARTICULO 3°.- Notificar con copia certificada de la presente al Director Provincial del Registro Civil, Sr. Rodrigo GUIDI y al Secretario de Asuntos Electorales y Registrales del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, Sr. Daniel Alejandro LEON con remisión de las actuaciones citadas en el visto. Dentro de este Tribunal de Cuentas, notificar a la letrada dictaminante, Dra. Maribel PASTOR, al Prosecretario Legal, Dr. Oscar SUAREZ y al Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL.

ARTICULO 4°.- Por Secretaría privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 446

13-12-11

VISTO: El expediente N° 295/2011, Letra TCP - PR, caratulado: "S/ FERIA ANUAL 2011", la Resolución Plenaria N° 310/2011, y la Nota Interna N° 2076/2011; y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la mencionada Resolución Plenaria, se establece el periodo en el cual el personal del Tribunal de Cuentas podrá hacer uso de la licencia

anual 2011, entre los días 01 de Octubre de 2011 y 30 de Abril de 2012.

Que mediante la Nota N° 2076/2011, la agente María Julia de la FUENTE, legajo N° 115, solicita se autorice, el usufructo de la licencia anual, entre los días 21/12/2011 y el 29/01/2012, ambas fechas inclusive.

Que corresponde autorizar lo solicitado en atención a que no existen razones de servicio que lo impidan.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar el usufructo de la Licencia Anual 2011 a la agente María Julia de la FUENTE, Legajo N° 115, entre los días 21/12/2011 y 29/01/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 447

14-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia Letra TCP SP N° 396/2011, caratulado: "S/MULTA SR. VICENTE SINCHICAY POR INCUMPLIMIENTO RESOLUCION PLENARIA N° 183/2011", y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Resolución Plenaria N° 397/2011 se resolvió, eo el marco del Expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra T.C.P. - S.L. N° 262/2002 caratulado: "S/DICTAMEN FISCAL ESTADO N° 22/02 S/ANTICIPO LECOP 20.000 AL BENEFICIARIO JORGE BARRAL", lo que a continuación se transcribe: "ARTICULO 1°.- Aplicar una sanción de multa por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la remuneración bruta mensual, descontadas las asignaciones familiares, al Presidente del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Sr. Vicente del Valle SINCHICAY, atenta el incumplimiento al requerimiento formulado mediante Resolución Plenaria N° 183/11 de fecha 13 de junio de 2011, conforme lo expuesto en los considerandos".

Que en consecuencia, en el marco de la citada Resolución, se ordenó la apertura del expediente mencionado en el Visto y se requirió copia del recibo de haber respectivo.

Que de las constancias incorporadas en el expediente surge el cargo del funcionario multado, como así también el emolumento percibido en dicho carácter.

Que por lo expuesto, habiendo recibido la información precedentemente citada, procede exteriorizar el quantum de la sanción impuesta, conforme lo establece el Artículo 3° de la Resolución Plenaria N° 33/06.

Que procede hacer saber al sancionado que el importe correspondiente a la multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto quede firme, en la Cuenta Corriente N° 1.71.0300/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego-Sucursal Ushuaia, debiendo acreditar el pago ante el Tribunal de Cuentas, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado, con copia certificada de la boleta de depósito respectiva de la que surja la individualización del depositante.

Que asimismo, procede hacer saber que el incumplimiento en tiempo y forma de la sanción dará lugar a la aplicación de intereses por mora, los que se calculan desde el vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la

fecha en que el acto de sanción quede firme y hasta su efectivo pago, y teniendo en cuenta la tasa de interés que aplica el Banco de Tierra del Fuego, para operaciones de descuento de documentos de terceros en operaciones a treinta (30) días -tasa activa o de préstamos- con descuento del veinte por ciento (20%), de conformidad a lo establecido en la Resolución Plenaria N° 24/08, que sustituye a su similar N° 88/04.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto, de conformidad a lo establecido por los artículos 4 inc. h) y 27 de la Ley Provincial 50, su Decreto Reglamentario N° 1917/99 y la Resolución Plenaria N° 33/06 -Procedimiento para la aplicación, seguimiento y ejecución de las sanciones de multa impuestas por este Tribunal.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Cuantificar la multa impuesta por Resolución Plenaria N° 397/2011 al Presidente del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social Sr. Vicente del Valle SINCHICAY D.N.I. N° 16.670.761, en la suma de PESOS UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 68/100 (\$ 1.086,68), conforme surge de la certificación de haberes obrante en autos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber al sancionado que el importe correspondiente a la multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto quede firme, en la Cuenta Corriente N° 1.71.0300/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego-Sucursal Ushuaia, debiendo acreditar el pago ante el Tribunal de Cuentas, dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado, con copia certificada de la boleta de depósito respectiva de la que surja la individualización del depositante.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al nombrado que contra la presente y contra el acto de aplicación de la sanción podrá interponer Recurso de Reconsideración previsto en los artículos 127° y sgtes. de la Ley Provincial N° 141, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de notificado y con los requisitos que establece dicha norma.

ARTÍCULO 4°.- Hacer saber que el incumplimiento en tiempo y forma de la sanción dará lugar a la aplicación de intereses por mora, los que se calculan desde el vencimiento del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que el acto de sanción quede firme y hasta su efectivo pago, y teniendo en cuenta la tasa de interés que aplica el Banco de Tierra del Fuego, para operaciones de descuento de documentos de terceros en operaciones a treinta (30) días -tasa activa o de préstamos- con descuento del veinte por ciento (20%), de conformidad a lo establecido en la Resolución Plenaria N° 24/08, que sustituye a su similar N° 88/04.

ARTÍCULO 5°.- Oportunamente, dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de librar testimonio de la presente, con carácter de título ejecutivo de conformidad a las previsiones del artículo 459.1 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia; por aplicación de lo dispuesto por el artículo 3° del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 33/06.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, notificar al nombrado con copia certificada de la presente y de la Resolución Plenaria N° 397/2011.

ARTÍCULO 7°.- Notificar al Registro de Sanciones y Multas y a la Dirección de Administración, con copia certificada de la presente. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 448

14-12-11

VISTO: La Nota Externa N° 1709/11 Letra TCP IPRA, reiterada por sus similares Letra N° T.C.P. - I.P.R.A. N° 1795/11, N° 1943/11 y Letra TCP SC N° 1974/11, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Externa Letra TCP IPRA N° 1709/11, de fecha 06 de octubre de 2011, el Auditor Fiscal de la Delegación I.P.R.A., requirió al Secretario Administrativo del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, en el marco de las tareas de Control que realiza esa Delegación en relación a la Cuenta General del Ejercicio 2011, que en un plazo de 10 días requiera a las áreas correspondientes del Instituto la siguiente información: 1.-) Informe indicando estado de implementación actual del Sistema SIGA proveído por la firma Nómade Soft S.R.L., con el detalle de: -Módulos que se encuentran funcionando, -Módulos que aún están pendientes, -Estado en que se encuentra la carga de datos presupuestarios y contables del presente ejercicio de los saldos patrimoniales iniciales, gastos, recursos

(de captura automática y manual, como los que provienen de la sala de bingo, canon, eventos y otros), liquidación de juegos, conciliaciones bancarias, 2.-) Informes sobre el plan de trabajo adoptado para registrar los saldos iniciales de los cuentas patrimoniales para el presente ejercicio, teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema y los inconvenientes en la presentación de la cuenta del ejercicio anterior en la que no se presentaron los saldos finales, 3.-) Informe sobre el estado y los controles que se realizan de la registraciones automáticas en el SIGA, de la información generada por el sistema que posee el Instituto para la captura de datos sobre la liquidación de los recursos provenientes de los juegos, 4.-) Informar los motivos por los cuales no se encuentran impresos los libros diarios y mayores del Organismo, requiriéndose que a la brevedad se procure la impresión de los mismos, como asimismo la confección de los balances trimestrales establecidos en la Res. IPRA N° 576/11".

Que conforme constancias obrantes en la nota precitada, ese organismo fue notificado del requerimiento en fecha 06/10/2011.

Que ante la falta de respuesta, por Notas Externas N° 1795/11 - Letra TCP IPRA de fecha 26/10/2011 y N° 1974/11 - Letra TCP SC de fecha 23/11/2011, se reiteró el requerimiento a la Presidencia del organismo, obrando en las misivas las constancias de notificación en fecha 07 y 24 de noviembre respectivamente.

Que mediante Nota Interna N° 2112/11 Letra: T.C.P. - S.C. de fecha 02 de diciembre de 2011, el C.P.N. Daniel MALDONES a/c de la Prosecretaría Contable, informó al Vocal de Auditoría que se han vencido los plazos para dar respuesta a los requerimientos efectuados mediante las notas precitadas y no se ha recibido respuesta alguna.

Que ante la falta de cumplimiento por parte del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, procede a intimar a su Presidente, a efectos que dé respuesta a los requerimientos oportunamente formulados mediante las notas del visto, elin bajo apercibimiento de aplicar, en caso de incumplimiento, las sanciones que correspondieren, conforme facultades previstas en el artículo 4 inc. h) de la Ley Provincial 50, reglamentado por Decreto Provincial N° 1917/99.

Que la presente se suscribe con el quórum del artículo 27 de la Ley Provincial 50, en razón de los motivos invocados en la Resolución Plenaria N° 373/10.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en el artículo 4 inc. c) de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Intimar al Sr. Presidente del I.P.R.A. Sr. Ricardo URIBE, a efectos que en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente, dé respuesta a los requerimientos formulados mediante Nota Externa N° 1709/11 Letra TCP IPRA, reiterada por sus similares Letra N° T.C.P. - I.P.R.A. N° 1795/11, N° 1943/11 y Letra TCP SC N° 1974/11, ello bajo apercibimiento de aplicar, en caso de incumplimiento, las sanciones que correspondieren, conforme facultades previstas en el artículo 4 inc. h) de la Ley Provincial 50, reglamentado por Decreto Provincial N° 1917/99.

ARTÍCULO 2°: Notificar al funcionario nombrado en el artículo 1°, con copia certificada de la presente y de la Nota Externa N° 1709/11 Letra TCP IPRA. Notificar a la Secretaría Contable y a la Auditoría Fiscal a cargo, a efectos de verificar el cumplimiento de lo solicitado en el artículo 1° y dar continuidad al trámite que correspondiere, ello con remisión de las notas citadas en el visto.

ARTÍCULO 3°: Registrar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 449

15-12-11

VISTO: Las tratativas mantenidas con los representantes de la A.P.O.C.- Asociación Personal de Organismos de Control-, y

CONSIDERANDO:

Que en las mismas se recibió la propuesta de fijar en el ámbito de este organismo y en relación al salario de sus agentes, un incremento general del diez por ciento (10%) sobre el sueldo básico, retroactivo al mes de Noviembre de 2011, en razón de la necesidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Que acorde a lo solicitado, resulta necesario adoptar medidas tendientes a la protección de las remuneraciones del personal, respecto de los efectos negativos de la depreciación monetaria, todo ello, en el marco de las atribuciones y deberes que la Constitución asigna al Tribunal de Cuentas de la Provincia, procurando preservar su regular funcionamiento.

Que en efecto, tal petición de incremento ha sido debidamente valorada por el Plenario de Miembros, considerándose factible acceder a un incremento general en el sueldo básico de todo el personal del Tribunal de Cuentas, consistente en un diez por ciento (10%) sobre el sueldo básico, retroactivo al 1º de Noviembre de 2011, con excepción de los Miembros del Cuerpo Plenario.

Que en consecuencia, procede establecer las nuevas grillas salariales y las fechas en que las mismas entrarán en vigencia, ello respetando el tope estatuido en la Ley Provincial Nº 855, como así también lo dispuesto en forma particular para los Miembros del Tribunal mediante Resolución Plenaria Nº 273/2010.

Que la Dirección de Administración ha efectuado el análisis correspondiente a la incidencia presupuestaria del gasto, resultando posible acordar el aumento salarial citado, con la limitación establecida en el párrafo precedente.

Que, a tal efecto, resulta procedente modificar el escalafón vigente para el personal del Tribunal de Cuentas, aprobado por Resolución Plenaria Nº 121/11, ella a través de la sustitución de su Anexo I.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 inc b, 2º ccs. y ss. de la Ley Provincial Nº 50, por mayoría absoluta de sus Miembros en razón de los motivos expuestos en la Resolución Plenaria Nº 373/10.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTÍCULO 1º.- Sustituir el Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 121/11 de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I de la presente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Establecer un aumento salarial del diez por ciento (10%) sobre el sueldo básico para todos los niveles de la escala salarial, a partir del mes de diciembre del corriente año, retroactivo al 1º de noviembre de 2011, con excepción de los Miembros del Cuerpo Plenario, respetando el tope estatuido en la Ley Provincial Nº 855, como así también lo dispuesto para los suscriptos mediante Resolución Plenaria Nº 273/2010.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la Dirección de Administración, con copia certificada de la presente, a efectos que realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes y arbitre las medidas de liquidación y ajustes que correspondan.

ARTÍCULO 4º.- Disponer que el gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a las partidas presupuestarias correspondientes en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 450

15-12-11

VISTO: la Nota Letra T.C.P.-Pres. Nº 1790/2011, por la cual se solicitó al señor Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, autorice la adscripción del agente Javier BARRIA VELASQUEZ, D.N.I. Nº 29.903.444, Legajo Nº 1112, para desempeñar tareas inherentes a este Organismo, y:

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia mediante la Resolución D.P.E. Nº 421/11, se adscribió al agente Javier Osvaldo Abraham BARRIA VELASQUEZ, a este Tribunal de Cuentas, a partir del día 02/12/2011 y por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, en virtud de lo establecido en el Decreto Nacional Nº 2058/85, -Reglamentario de la Ley Nacional Nº 22.251-. Indicando que este Tribunal deberá enviar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a ese Organismo un certificado de asistencia o documentación fehaciente que acredite la real prestación de servicio del mes anterior, detallando el cumplimiento de la carga horaria diaria, debiendo ser extendida por el titular donde cumple la adscripción; teniendo en cuenta que la no presentación en tiempo y forma de la información requerida dará lugar a la suspensión del pago de los haberes.

Que el agente adscripto, atento lo dispuesto en el Anexo I, punto 2.2 del Decreto Nacional Nº 2058/85 y la necesidad de incrementar temporalmente el personal en servicio, será afectado a cumplir tareas administrativas en el ámbito de la Secretaría Legal de este Tribunal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 152/09.

Que en consecuencia, corresponde hacer saber a la Presidencia de la Dirección Provincial de Energía, que las tareas a desempeñar por el agente adscripto no confrontan con lo establecido por el Punto 6.3 del Anexo I del Decreto Nacional Nº 2058/85.

Que atento lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución DPE Nº 421/11, corresponde indicar a la Dirección de Administración que deberá enviar a la Dirección Provincial de Energía, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, un informe sobre la efectiva prestación de servicios por parte del agente durante el mes anterior.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto, de conformidad a lo establecido por los artículos 26 inc. c) y 27 de la Ley Provincial 50, la Ley Nacional Nº 22251 y el Decreto Nacional Nº 2058/85-Normas para el trámite de adscripciones de personal.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTÍCULO 1º.- Establecer que el agente Javier Osvaldo Abraham BARRIA VELASQUEZ, DNI Nº 29.903.444, categoría 03 C.C.T. 36/75 Auxiliar Administrativo, Legajo D.P.E. Nº 1112, adscripto a este Tribunal por Resolución D.P.E. Nº 421/11, será afectado a cumplir tareas administrativas en el ámbito de la Secretaría Legal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 152/09.

ARTÍCULO 2º.- Hacer saber a la Dirección Provincial de Energía que las tareas a desempeñar por el agente adscripto no confrontan con lo establecido en el Punto 6.3. del Decreto Nacional Nº 2058/85.

ARTÍCULO 3º.- Indicar a la Dirección de Administración que, conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución DPE Nº 421/11, deberá enviar a la Dirección Provincial de Energía, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, un informe sobre la efectiva prestación de servicios por parte del agente durante el mes anterior.

ARTÍCULO 4º.- Notificar, con copia certificada de la presente, al agente Javier BARRIA VELASQUEZ, a la Presidencia de la Dirección Provincial de Energía, a la Secretaría Legal y a la Dirección de Administración, con remisión a ésta última de las notas de requerimiento y de la Resolución Nº 421 Letra DPE para su archivo.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar. Publicar. Cumplido, archivar

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 451

19-12-11

VISTO:

El expediente del registro del Instituto Fueguino de Turismo N° 205/2010, caratulado "S/ PROYECTO DE INVERSIÓN HOTELERA, CURSO MARCELA BOLINO - SPE"; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acta de Constatación N° 116/2010 se labraron las siguientes observaciones:

"1. No abran en el expediente documentación emitida por organismo competente que acredite la situación fiscal provincial de las firmas comerciales con las que se contrata. Dta. N° 1505/02 Art. 34° inc. 3 apartado i), Reglamentario de la Ley Territorial N° 6, Resolución DGR 53/10.

2. No se corresponde el fundamento legal expuesto en la Resolución INFUETUR 1254/10 con la erogación de la presente actuación.

3. Atento lo expresado en el punto anterior se solicita un Dictamen del área legal del organismo.

Que a fs. 38 luce el Informe Contable N° 351/11 por el cual se comparte las técnicas del Acta de Constatación N° 116/2010.

Que a fs. 41 luce el Informe Legal N° 347/11, suscripto por el Dr. Gustavo MOLNAR, y a fs. 47 obra el Informe Legal N° 353/11 producido por el Secretario Legal de este Tribunal, el que se encuentra redactado en los siguientes términos:

"Cabe precisar inicialmente, que las actuaciones fueron promovidas por la licenciada Marcela BOLINO, poniendo en conocimiento del señor Secretario de Política Externa del Instituto, los contenidos y eventual interés que tendría su participación en el programa "Proyectos de Inversión Hotelera" organizado por el Centro de Educación Empresarial de la Universidad de San Andrés y desarrollado entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires, en tanto brindaría una visión integral del proceso para decidir una inversión de un proyecto de hotelería y organizar el correspondiente proceso de ejecución.

Funda además la solicitud en que se identificarían temas de relevancia para el proceso de toma de decisiones de un inversor hotelero y se evaluaría la verosimilitud de la información en relación con el mercado (análisis de oferta y de la demanda) y, se brindaría además, información sobre factores determinantes que condicionan a los inversores.

El costo del programa en cuestión, por ser alumno de la referida Casa de Estudios, tendría una rebaja y sería de pesos cinco mil doscientos (\$ 5.200).

El pedido fue oportunamente autorizada por el señor Presidente del In.Fue.Tur., Tec. Pablo Osvaldo PFURR (fs. 8).

Mediante Resolución del Instituto Fueguino de Turismo N° 1254/10 (fs. 11), la señora Secretaria de Política Interna, Laura Matilde GONZÁLEZ, autorizó el gasto que demandara la participación de la licenciada BOLINO en el programa descripto.

A fojas 13, obra el Acta de Constatación T.C.P. Control Previo N° 116/2010 - INFUETUR, confeccionada por el C.P.N. Jorge Fernando ESPECHÉ, mediante la cual formuló las siguientes observaciones:

"1. No obra en el expediente documentación emitida por organismo competente que acredite la situación fiscal provincial de las firmas comerciales con las que se contrata. Dta. N° 1505/02 Art. 34° inc. 3 apartado i), Reglamentario de la Ley Territorial N° 6, Resolución DGR 53/10.

2. No se corresponde el fundamento legal expuesto en la Resolución INFUETUR 1254/10 con la erogación de la presente actuación.

3. Atento lo expresado en el punto anterior se solicita un Dictamen del área legal del organismo".

A fojas 22, se incorporó el Dictamen D.L. y T. N° 042/10, emitido por la Dra. María Gabriela SAN MARTÍN, en que señala que el considerando cuarto de la Resolución Instituto Fueguino de Turismo N° 1254/2010, refiere a la Ley territorial N° 6 y al Decreto provincial N° 1505/02, artículo 26 inciso 3 h) y, en relación al monto, expone que no se supera el límite del pertinente Juicio de compra y contrataciones.

Considera que, teniendo en cuenta que la erogación materializada se fundaría en un servicio de capacitación que brinda la Universidad de San Andrés y que sería interés del Organismo adquirir conocimientos sobre la temática abordada por tal Institución, es de entender -según opina- que no se materializa una compra o contratación alineada a la Ley territorial N° 6, sino una erogación basada en las facultades propias de la autoridad de aplicación en relación a la capacitación de los

recursos humanos que administra en pos del buen servicio y cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Por lo tanto, estima pertinente emitir un nuevo acto administrativo modificando el anterior, que se encuadre en las competencias de la Ley provincial N° 65, respecto de la capacitación del personal del Instituto, autorizando la concurrencia en virtud del interés y su relación con las funciones de la agente BOJINCO.

Por último, recomienda tener presente que, no obstante encontrarse la debida autorización de Presidencia a fojas 8, resultaría agregar a las actuaciones el cumplimiento de la circular N° 20/09, que establece los requisitos para la aprobación de capacitación por parte de esa autoridad.

Posteriormente, mediante Nota N° 336/10, Letra INFUETUR (ADM), se incorporaron una serie de instrumentos tendientes a efectuar una rendición por el pago presentado por la Fundación Universidad de San Andrés (v. fs. 23/30).

A fojas 31, se incorporó una copia certificada de la Resolución del Instituto fueguino de Turismo N° 1405/10, que rectifica el encuadre legal de la Resolución N° 1254/10, quedando redactado de la siguiente manera "Que el gasto de la presente encuadra en la Ley Provincial N° 65, artículo 26 i) y en la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad, Decreto Reglamentario 1505/02, ARTÍCULO 26 INC. 2 A), y en virtud de no exceder los límites fijados por Resolución N° 436/10, INFUETUR".

A continuación también se incorporó una copia simple de la Nota N° 390/10, Letra INFUETUR (fs. 32/34), remitida por la licenciada Marcela BOLINO al señor Secretario de Política Externa del Finre, D. José Rubén TORRES, efectuando una evaluación del curso y su contenido.

ANÁLISIS

En primer término, habré de precisar que las actuaciones fueron remitidas a este área legal en el marco de una consulta relativa a:

"1.- Si la evaluación de proyectos de Inversión Hotelera se encuentran dentro de los objetivos a funciones establecidas por la Ley Provincial N° 65 al Instituto Fueguino de Turismo, razón por la cual sería necesaria la capacitación del personal.

2.- Y en caso, de corresponder el punto 1, si el encuadre efectuado por el artículo 26 i) de la Ley provincial N° 65 se corresponde con el presente gasto".

En orden al primero de los puntos, entiendo que el espectro de competencias legales del In.Fue.Tur. y las herramientas provistas para desarrollar sus objetivos, en cuanto se relacionan con el objeto de esta intervención, se encuentran principalmente contempladas en los artículos 1° y 3° inciso f) de la Ley provincial N° 65.

En ese sentido, el artículo 1° del texto legal citado, prevé que: "La presente Ley tiene por objeto el desarrollo integral del turismo y su ejecución política; la protección del patrimonio turístico, cultural y ecológico; como así también propiciar la capacitación técnica y operativa en todos los niveles del sector turístico, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".

Y por su parte, el artículo 3°, establece que: "Los objetivos se desarrollarán mediante:

f) La adecuada capacitación turística en el orden público y privado".

En función de tales previsiones, entiendo que las autoridades del Instituto podrían encontrar en la capacitación sobre lo que versa el mentado curso, una temática de interés respecto del desarrollo integral del Turismo y una adecuada capacitación de los sectores públicos y privados en la materia.

Considero que una intromisión mayor en ese aspecto, podría resultar excesiva y avanzar en cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenas a la esfera de Competencia Legal de este Tribunal de Cuentas.

Al respecto y sin ánimo de menospreciar la duda planteada por el área Contable del Tribunal con los ejemplos elegidos por el autor que citaré a continuación, cabe apuntar que es criterio de calificada Doctrina en materia de control público que: "Es sabido que en el mundo contemporáneo se habla de control global o integral, que comprende tanto la legalidad, la regularidad canónica, como el control de gestión. Es decir, concierne a la verificación y constatación de todas aquellas acciones estatales relacionadas con los aspectos patrimoniales, financieros, normativos, de eficacia, eficiencia, economía, y transparencia, entre otros.

Si bien es un control que en los últimos años tiene una mayor dimensión e importancia, sin embargo, su terminología podría inducirnos al error de hacer conculcable en forma absoluta la actividad estatal. Ella implicaría lesionar el principio de división de poderes y la zona de reserva de la Administración. En efecto,

como dijimos anteriormente, el controlador no debe valorar ni sustituir el núcleo íntimo de la discrecionalidad. No es su cometido pronunciarse sobre el mérito, la oportunidad o conveniencia de las políticas adoptadas; sí, en cambio, sobre el procedimiento utilizado para ejecutarlas y los demás aspectos que hacen a la juridicidad de su ejercicio.

El órgano de control externo no puede decirle a un presidente o a un gobernador porqué pretende hacer un hospital en lugar de una autopista, o porque puso de blanco y no de rosa la casa de gobierno. Todo ello entra dentro de la zona de reserva constitucional que corresponde a la autoridad administrativa, su valoración subjetiva y resolución. El control sólo lo ejerce el Parlamento y, en definitiva, el pueblo a través del sufragio" (SESIN, Domingo J., "Cuestiones de Control de la Administración Pública. Administrativo, Legislativo y Judicial", Ediciones Rap, pág. 696).

En ese mismo orden de ideas, el Superior Tribunal de Justicia provincial, tiene dicho que: "El ejercicio del control no es discrecional, es conforme al 'bloque de legalidad', apreciada conforme a pautas lógicas, razonables; en última instancia, de sentido común" (Sentencia del 04/02/99 en autos "GALEGO, HORACIO JORGE c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE APELACIÓN, Exped. Nº 446/97").

En función de esos mismos preceptos y el control para el que sí considera facultado al Tribunal, coincide con el señor Auditor Fiscal actuante, en que el enunciado normativo basado en el artículo 26 inciso i) de la Ley Orgánica del Instituto, ha sido errado en la especie y son los transcritos precedentemente en sus párrafos pertinentes con los que correspondería efectuar una rectificación.

En un aspecto también relacionado con el alcance del control antes desarrollado y, en torno a la Circular Nº 20/09 emitida por el señor Presidente del Instituto, que establece en sus tres (3) primeros párrafos una serie de recaudos para que el mismo decida la pertinente autorización, estima que no debe perderse de vista que ha sido ese funcionario quien ha estampado de su puño y letra el autorizado obrante a fojas 8, en función de lo cual, no podría entenderse otra cosa que los ha tenido por cumplidos a ese momento.

Es que por otra parte, de acuerdo con el Decreto territorial Nº 4144/86, vigente en el ámbito de la Administración Pública provincial, lo "Circular" constituye una subespecie de la "Nota", que tiene por objeto una comunicación interna de la repartición, con la cual, las cuestiones que en ella se incluyen revisten un carácter ordenatario, para que en la misma presentación por la que se solicita la autorización a participar en cursos de capacitación, se aporten al señor Presidente elementos suficientes para decidir al respecto y no como una cuestión reglamentaria, pues el instrumento referida carecería de tal entidad.

Por lo demás, coincide con el Dr. Gustavo MOLNAR, en cuanto a que sería recomendable la incorporación de elementos propios a los efectos de acreditar la efectiva realización y culminación del curso, como podría ser el pertinente certificado expedido por la Universidad de San Andrés".

Que las suscriptos comparten los términos del Informe Legal Nº 353/11 del Secretario Legal de este Tribunal, por lo que corresponde que las autoridades del Instituto Fueguino de Turismo cumpla con lo allí aconsejado, esto es, rectificar el encuadre legal basado en el artículo 26 inciso i) de la Ley Orgánica del Instituto, por las previsiones de los artículos 1º y 9º de la Ley Provincial Nº 65. Por lo demás, corresponde que se agregue a las actuaciones las constancias que acrediten la efectiva realización del curso.

Que este Cuerpo Plenario resulta competente para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley Provincial Nº 50; y con las previsiones del artículo 27º de dicho cuerpo normativo.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Indicar al Presidente del Instituto Fueguino de Turismo que deberá rectificar el encuadre legal del presente gasto, encuadrándolo en los artículos 1º y 9º de la Ley Provincial Nº 65. Ello por lo expuesto precedentemente y en el Informe Legal Nº 353/11.

ARTÍCULO 2º.- Indicar al Presidente del Instituto Fueguino de Turismo que deberá agregar a las actuaciones las constancias que acrediten que la Lic. Marcela BOLINO ha participado efectivamente en el programa "Proyectos de Inversión Hotelera" organizado por el Centro de educación Empresarial de la Universidad de San Andrés, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Por Secretaría Contable de este Tribunal, se deberá efectuar el seguimiento de lo establecido en el artículo 2º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar con copia certificada de la presente y del Informe Legal Nº 353/11, al Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, con remisión del expediente del registro del INPUETUR Nº 205/2010; y en el Tribunal, a la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable, al Secretario Legal y al Auditor Fiscal Interviniente.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar y publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 452

19-12-11

VISTO: la Nota Interna Nº 2156/2011, de fecha 07 de Diciembre de 2011, que da inicio a las actuaciones caratuladas: "S/ RENUNCIA AGENTE DIEGO RAMOS - LEGAJO Nº 82"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada nota, el agente Diego Agustín RAMOS, Legajo Nº 82, ha presentado su renuncia a partir del día 31 de diciembre de 2011.

Que se ha acreditado la inexistencia de sumarios o situaciones pendientes que pudieran motivar la aplicación de sanciones disciplinarias.

Que en orden a lo expuesto, procede aceptar la renuncia del agente a partir del día 31 de diciembre del presente año.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 22.140, Decreto Reglamentario 1797/80 y los artículos 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el Agente Diego Agustín RAMOS - Legajo Nº 82, a partir del día 31 de diciembre de 2011, ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado con copia certificada de la presente, agradeciendo los servicios prestados en este Tribunal.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 453

19-12-11

VISTO: el Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra: T.C.P. SP Nº 270 del año 2011, caratulado: "S/MULTA APLICADA A LOS SRES. CARLOS MUÑOZ, ADRIAN DRATLER, CARINA VILLARREAL, BLANCA V. ROMERO, VIRGINIA MARISCAL, ANDREA ROSALES Y M. DEL CARMEN LONGUEIRA - ACUERDO PLENARIO Nº 2204", y

CONSIDERANDO:

Que se ha advertido un error material en la Resolución Plenaria Nº 400/2011 respecto del porcentaje de multa aplicado al entonces agente Carlos Roberto MUÑOZ, siendo que en los considerandos de la mentada Resolución se indicó que al mismo correspondía reducirle la multa originalmente aplicada por medio del Acuerdo Plenario Nº 2204 de un 20% (veinte por ciento) a un 10% (diez por ciento) de su sueldo bruto mensual descontadas las asignaciones familiares.

Que sin embargo, en la parte resolutoria de la citada Resolución Plenaria Nº 400/2011 se consiguió que la sanción respecto del nombrado ascendía al 12% (doce por ciento) de su sueldo bruto mensual, descontadas las asignaciones familiares y, consecuentemente, se cuantificó la misma en la suma de PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 12/100 (\$ 1.142,12).

Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Provincial Nº 141, la Administración en cualquier momento puede rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la

sustancial del acto o decisión.

Que al respecto cabe señalar que no se modifican por este acto los considerandos de la Resolución Plenaria N° 400/2011, teniéndose a los mismos por reproducidos en la presente en su totalidad.

Que así las cosas, cabe rectificar el porcentaje de multa aplicado al entonces Director General de Mantenimiento, Sr. Carlos MUÑOZ, debiéndose reducir del 12% al 10% de su sueldo bruto mensual descontadas las asignaciones familiares, ya que ello guarda relación con el análisis oportunamente efectuado por medio de la Resolución Plenaria N° 400/2011, al momento de resolverse el Recurso de Reconsideración interpuesto por el mismo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por los Artículos 4 inc. h) y 27 de la Ley Provincial 50 y su Decreto Reglamentario N° 1917/99, Artículos 123, 127, 129, 146 y cots. de la Ley Provincial 141 y la Resolución Plenaria N° 33/06 -Procedimiento para la aplicación, seguimiento y ejecución de las sanciones de multa impuestas por este Tribunal-.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber al entonces Director General de Mantenimiento, Sr. Carlos MUÑOZ que la multa dispuesta por medio del artículo 1° de la Resolución Plenaria N° 400/2011, debe considerarse aplicada por el **10% (diez por ciento)** de su sueldo bruto mensual descontadas las asignaciones familiares y no por el 12%. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber al entonces Director General de Mantenimiento, Sr. Carlos MUÑOZ, que en función de lo dispuesto en el artículo anterior, la cuantificación de la sanción impuesta asciende a la suma de **PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 (\$ 951,77)**.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al nombrado que deberá acreditar el pago de la multa con más los intereses moratorios de conformidad a la tasa de interés que aplica el Banco Provincia de Tierra del Fuego para operaciones de descuento de documentos de terceros en operaciones a treinta (30) días -tasa activa o de préstamo- con un descuento del veinte por ciento (20%), en razón de las pautas previstas en la Resolución Plenaria N° 24/08, ello en un plazo de diez (10) días hábiles computado desde su notificación, mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 1710300/2 del Banco Provincia de Tierra del Fuego – Sucursal Ushuaia, haciendo saber que los intereses moratorios se calcularán desde el vencimiento del plazo de diez (10) días mencionado precedentemente y hasta su efectiva paga, como también que deberá acreditar el pago ante este Tribunal de Cuentas dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuado, con copia certificada de la boleta de depósito respectiva de la que surja la individualización del depositante, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de iniciar las acciones legales correspondientes para perseguir su cobro.

ARTÍCULO 4°.- Notificar, con copia certificada de la presente al entonces Director General de Mantenimiento, Sr. Carlos MUÑOZ, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, quedando expedita la vía judicial, pudiendo interponer demanda contencioso administrativa en el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales computados desde su notificación, de conformidad a lo prescripto por los Artículos 7° inc. a), 15° y 24° de la Ley Provincial 133, y a la Secretaría Legal, a los efectos de su anotación en el Registro de Sanciones y Multas de este Tribunal.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, Comunicar, Publicar, Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 454

19-12-11

VISTO: El Expediente Letra T.C.P.-S.C. N° 191/2010 del registro de este Tribunal de Cuentas caratulado "SPEDIDO COMISIÓN N° 1 S/PROGRAMA DE DESENDERUDAMIENTO"; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del visto se inician en razón de la presentación efectuada por el Señor Legislador Roberto FRATE, en su carácter de Presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales, a través de Nota N° 052/2010 Letra: S.C. (con L), mediante la cual solicita, que este Tribunal de Cuentas, en el marco de su función de asesoramiento a poderes del Estado, emita un informe técnico en relación al Convenio Bilateral celebrado en fecha 18/08/2010, en el marco del Programa

Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas creado por Decreto Nacional N° 660/2010, el cual fuera suscripto entre la Sra. Gobernadora de la Provincia y el Estado Nacional y obra registrado bajo el Número N° 14539

Que la Secretaría Contable de este Órgano de Control ha tomado intervención emitiendo las consideraciones inherentes a su esfera de incumbencia a través del Informe Contable N° 347/2011.

Que por su parte, la Secretaría Legal ha emitido, en orden a su competencia, el Informe Legal N° 398/11 Letra T.C.P.- C.A..

Que los suscriptos comparten y hacen propios los términos de los Informes precitados, los cuales integrarán la presente en copia certificada.

Que este Cuerpo Plenario resulta competente para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto por los artículos 1°; 2° inciso j); 4° inciso g); 26° y 27° de la Ley Provincial 50 y sus modificatorias.-

POR ELLO,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Hacer saber al Presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales, Legislador Roberto FRATE, que en orden a la opinión requerida mediante nota N° 052/10 Letra SG (con L), se ha emitido el Informe Contable N° 347/11 y el Informe Legal N° 398/11 Letra TCP-CA, los cuales se comparten e integran la presente en copia certificada. Ellos por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°: Notificar al Sr. Presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Legislatura de la Provincia con copia certificada de la presente y de los informes que la integran.

ARTÍCULO 3°: Comunicar a la Sra. Gobernadora de la Provincia, Doña Macía Fabiana RIOS, con copia certificada de la presente y de los informes que la integran.

ARTÍCULO 4°: Notificar a la Secretaría Contable y a los Auditores Fiscales C.P. Lic. Adm. Lorena RETAMAR, C.P. Lisandro CAPANNA y C.P. María José FURTADO.

ARTÍCULO 5°: Registrar, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 455

19-12-11

VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal Letra T.C.P. V.A. N° 402/11, caratulado "S/CERTIFICACION DE INGRESOS DE FONDOS POR APORTES F.E.D.E.I. SOLICITADA POR LA D.P.E."; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Letra D.P.E. N° 3015/2011 de fecha 27/10/2011, el Director a/c de la Dirección Provincial de Energía, Ing. Néstor BARRIA, solicita la Certificación de Ingresos de Fondos, en concepto de Aportes del FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO ELECTRICIDAD INTERIOR -F.E.D.E.I.-, correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2011, ello a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos del Consejo Federal de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía de Nación.

Que ha tomado intervención el Auditor Fiscal C.P. David BEHRENS, emitiendo el Informe de Certificación de Ingresos obrante a fs. 20/21.

Que en virtud del mismo, se ha verificado el ingreso de los fondos en la Tesorería General de la Dirección de Energía de la Provincia, provenientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación -Secretaría de Energía-, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 13/100 (\$ 6.031.803,13), conforme detalle obrante en Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.

Que la rendición de cuentas respectiva, quedará sometida a la fiscalización y pronunciamiento exclusivo de este Organismo de Control, en las instancias y etapas que oportunamente correspondan.

Que la presente se dispone por resolución plenaria y con el quórum provisto en el artículo 27 de la Ley Provincial 50, en razón de los motivos expuestos en la Resolución Plenaria N° 373.

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia es el organismo

competente para pronunciarse sobre la inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financieras - patrimoniales del Estado provincial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2° inc. b) de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:**

ARTICULO 1°: Certificar el ingreso de Fondos a la Tesorería General de la Dirección Provincial de Energía, por la suma PESOS SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 13/100 (\$ 6.031.803,13), conforme detalle obrante en Anexo I de la presente.

ARTICULO 2°: Dejar constancia que la rendición de cuentas respectiva, quedará sujeta a la fiscalización y pronunciamiento de este Organismo de Control, en las instancias y etapas que oportunamente correspondan.

ARTICULO 3°: Notificar al Presidente de la Dirección Provincial de Energía, con copia certificada de la presente y del Informe de Certificación de Ingresos obrante a fs. 20/21. Comunicar a la Secretaría Contable y al Auditor Fiscal interviniente.

ARTICULO 4°: Registrar, publicar, Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 456

19-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra VA N° 65/09 caratulado "S/ INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE ALQUILERES QUE AFECTUA GOBIERNO", y el Informe N° 1326/11 Letra: CONTADURÍA GENERAL, emitido en razón del trámite obrante en Expediente del registro de la Gobernación N° 7204 - E.C. 2011 caratulado "S/ CAUSA JUDICIAL WEIS, ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES", y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en primer término tramitó la investigación suscitada en razón del Informe Contable N° 116/09 -fs. 01-, referida a la suscripción por parte del Poder Ejecutivo Provincial en su carácter de "locatario", de Contratos de Locación de inmuebles, en los que se incluyen cláusulas abusivas de interés por mora derivadas del pago fuera de término.

Que suscitada la investigación por la Auditora Fiscal correspondiente a Delegación Central, y producido los Informes Contables N° 814/09 -fs. 427/447- y N° 15/10 -fs. 448/449-, e Informes Legales N° 19/10 - Letra TCP CA -fs. 451/454- y N° 26/10 Letra TCP SL, se emitió el Acuerdo Plenario N° 2044 de fecha 30/06/2010 - fs. 504/534-, por el cual se dispuso "Artículo 1°: RECOMENDAR al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que para futuros casos, al celebrar contratos de locación de inmuebles, convenga cláusulas penales que resulten menos onerosas para la Administración Provincial, considerando las pautas que fijan los magistrados provinciales a través de sus pronunciamientos". "Artículo 2°: RECOMENDAR al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que tome los recaudos pertinentes a fin de que, en los contratos en curso de ejecución, se procure evitar incurrir en atrasos en el pago de las sumas debidas en concepto de alquileres, o efectos que no se generen intereses punitivos".

Que mediante los Artículos 3° y 4° del citado acto se dispuso lo que a continuación se transcribe: "INDICARLE al Sr. Tesorero General y al Sr. Contador General que en oportunidad de cancelar multas generadas por el pago fuera de términos de los cánones locativos de los inmuebles citados en el Informe Contable N° 814/09 informen a éste Tribunal dentro de los diez (10) días de efectuados", e "INDICARLE al Auditor Fiscal interviniente que controle el cumplimiento de lo solicitado en el artículo anterior".

Que en tal marco y atento las tareas de monitoreo dispuestas en cabeza de la Auditora G.P. María José FURTADO-, la citada profesional informó mediante Nota Interna N° 1663/11 - Letra TCP PE de fecha 08/09/2011 (fs. 570/571), que luego del requerimiento ordenado en fecha 26/09/2011, ha sido recepcionado el Informe N° 1326/11 Letra: CONTADURÍA GENERAL -citado en el visto- (fs. 572), a través del cual, la Jefa de Departamento Contables de la Contaduría General informa, que mediante Expediente del registro de la Gobernación N° 7204 - E.C. 2011 caratulado "S/ CAUSA JUDICIAL WEIS, ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES", fue emitida la Orden de Pago O.P. N° 28741 de fecha 05/09/2011 por \$ 121.321,66 a favor del proveedor Enrique Hector WEIS, así como también el libramiento N° 22893, de fecha 12/09/11 por \$ 6.000,00.

Que requeridas las actuaciones precisadas por parte de la Auditora Fiscal

mencionada, se emitió el Informe Contable N° 451/11 (fs. 580/586), en el cual, luego de efectuarse un pormenorizado detalle de los antecedentes del expediente N° 7204 E.C. /2011, se concluyó indicando: "El expte. N° 7204/11, tiene por objeto, la tramitación del pago a favor del Sr. Enrique WEISS, en concepto de intereses por atraso en la cancelación de alquileres y tasas judiciales, cuyo monto, conforme la liquidación practicada a fojas 30/31 del Expte. 7204-EC-11, asciende a pesos ciento veintín mil doscientos treinta y uno con 66/100 (\$ 121.231,66), y fue aprobada el 18-10-10 en sede judicial (fs. 32 Expte 7204-EC-11), conforme sentencia dictada el 27/03/09 (fs. 28/29 Expte. 7204 EC-11). A la fecha del presente Informe, del monto indicado en el párrafo anterior, ha sido abonada la suma parcial de pesos ochenta mil (\$ 80.000,00), subsistiendo un remanente de pesos cuarenta y un mil doscientos treinta y uno con 66/100 (\$ 41.231,66), el cual conforme convenio de pago suscripto por las partes y ratificado por Decreto Provincial N° 1899/11 (fs. 23/25 Expte. 7204-EC-11), resulta exigible entre el 1° al 10° del mes de Octubre del corriente año. El reclamo judicial efectuado por parte del Sr. Enrique WEISS, tuvo origen en la falta de pago del canon de alquiler mensual, así como en intereses por mora reclamados por atraso en su pago, originados en el contrato de locación de inmueble registrado bajo el N° 11624, suscripto por la Provincia con el locador, por el inmueble ubicado en calle San Martín N° 110 de la ciudad de Ushuaia, ocupado por la Dirección General de Rentas de la Provincia, Distrito Ushuaia. Este contrato que fue objeto de relevamiento y análisis en el Informe Contable N° 814/09, destacando que el mismo no poseía cláusula de aplicación de intereses (ver fojas 433). Cabe destacar que el monto del presente gasto, ha sido aprobado en sede judicial, verificando en las presentes actuaciones, la ausencia de los elementos de cálculo considerados, tales como las tasas informadas por el banco, fecha de pago de alquileres, conceptos de tasa judiciales. En razón de ello, se deja constancia que no ha sido verificado dicho cálculo por parte de la suscripta. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, del análisis del expte, se desprenden las siguientes observaciones: 1. Las actuaciones no fueron intervenidas por el órgano de control interno, incumpliendo lo normado en Artículos 97, 98 y 99 de la Ley provincial N° 495. 2. Las actuaciones no fueron remitidas al Tribunal de Cuentas de la Provincia, previo a la ejecución del gasto, incumpliendo el punto I, Anexo I de la Resolución Plenarios N° 01/01. 3. La sentencia de fojas 28/29 ordena llevar adelante la ejecución hasta tanto la demandada haga efectivo el pago al acreedor de la suma de \$ 294.232,58, respecto de esa suma nada se indica. 4. No obra futura respaldatoria del monto erogado en concepto de intereses, incumpliendo lo establecido en la Resolución AFIP N° 1415/03".

Que en el penúltimo párrafo del Apartado III del Informe Contable N° 451/11, la Auditora Fiscal expresó: "Por otra parte, y atención a la opinión vertida en Informes Legales N° 19/10 y 26/10, así como en los antecedentes del caso detallados en el apartado II, se sugiere, de considerarlo pertinente, la intervención de la Secretaría Legal, a fin de dictaminar respecto a la configuración de un posible perjuicio fiscal en el Expte. 7204-EC-11".

Que atento las conclusiones del precitado Informe, el Vocal de Auditoría dio intervención a la Secretaría Legal del Tribunal, área que se expidió mediante Informe Legal N° 410/11 - Letra TCP CA (fs. 588/592), en orden al presunto perjuicio fiscal.

Que la letrada interviniente concluyó señalando la procedencia de dar inicio a una investigación, ello habida cuenta que indicó: "...Conforme las antecedentes analizados, entiendo que correspondería que las presentes actuaciones sean remitidas al Sr. Vocal de Auditoría, a fin de iniciar una investigación para dilucidar los siguientes aspectos, en forma previa a determinar si específicamente el pago de intereses aquí acreditados han configurado un perjuicio fiscal", señalando en el precitado Informe, algunas de las medidas que entendiéndose necesario adoptar en el marco de la investigación.

Que a la vez que la investigación debería ordenarse específicamente en relación al expediente del registro de la Gobernación N° 7204 caratulado "CONTADURÍA GENERAL S/ CAUSA JUDICIAL WEIS ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES".

Que los suscriptos comparten las consideraciones efectuadas en el Informe Contable N° 451/11 (fs. 580/586) y en Informe Legal N° 410/11 - Letra TCP CA (fs. 588/592).

Que por ello, resulta procedente disponer, en relación al expediente del registro de la Gobernación N° 7204 caratulado "CONTADURÍA GENERAL S/ CAUSA JUDICIAL WEIS ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES", la apertura de una investigación especial en orden al presunto perjuicio fiscal indicado en el Apartado III del Informe Contable N° 451/11 (fs. 580/586) y Apartado III del Informe Legal N° 410/11 - Letra TCP CA (fs. 588/592), conforme las pautas establecidas en el Anexo I de la Resolución Plenarios T.C.P. N° 71/02 -Normas de Procedimiento para el Desarrollo de las Investigaciones-.

Que en consecuencia, corresponde designar un Auditor Fiscal, responsable de llevar a cabo la investigación, quien contará con la asistencia y colaboración de un letrado del Cuerpo de Abogados.

Que atento lo dispuesto por Anexo I de la Resolución Plenarios N° 150/11, el Grupo de Investigaciones Especiales se encuentra a cargo de la Auditora Fiscal G.P.N.

María Fernanda COELHO, correspondiendo su designación como Auditora Fiscal responsable para llevar adelante la presente investigación.

Que se deja constancia que la presente investigación se dispone por resolución plenaria y con el quorum previsto en el artículo 27 de la Ley Provincial 50, en razón de los motivos expuestos en la Resolución Plenaria Nº 373.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por los artículos 20, 49 y ccs. de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias, y Resolución Plenaria Nº 71/02 -Normas de Procedimiento para el Desarrollo de las Investigaciones-.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Disponer, en relación al expediente del registro de la Gobernación Nº 7204 caratulado "CONTADURÍA GENERAL S/ CAUSA JUDICIAL WEIS ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES", la apertura de una investigación especial en orden al presunto perjuicio fiscal indicado en el Apartado III del Informe Contable Nº 451/11 (fs. 580/586) y Apartado III del Informe Legal Nº 410/11 – Letra TCP CA (fs. 580/592), los cuales fueron emitidos en el marco del Expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra VA Nº 65/09 caratulado "S/ INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE ALQUILERES QUE EFECTUA GOBIERNO", conforme las pautas establecidas en Anexo I de la Resolución Plenaria T.C.P. Nº 71/02, designando a tal fin, a la Auditora Fiscal C.P.N. María Fernanda COELHO, junto al letrado del Cuerpo de Abogados, Dr. Gustavo MARCHESI. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Caratular actuaciones por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario, a efectos de tramitar la investigación ordenada en el artículo 1º, debiendo extraerse del Expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra VA Nº 65/09 caratulado "S/ INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE ALQUILERES QUE EFECTUA GOBIERNO", copia certificada de toda la documentación obrante a partir de fs. 570. Cumplido ello, remitir las actuaciones a Secretaría Contable y por su intermedio a la Auditora Fiscal designada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Otorgar a los profesionales nombrados un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, para preparar el pre-informe previsto en el Punto 6º de la Resolución Plenaria Nº 71/02.

ARTICULO 4º.- Notificar a la Secretaría Contable y por su intermedio a la Auditora Fiscal designada en el artículo 1º, el fin con copia certificada de la presente y con remisión de las actuaciones aperturadas y del expediente del registro del Tribunal de Cuentas Letra VA Nº 65/09 caratulado "S/ INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE ALQUILERES QUE EFECTUA GOBIERNO", haciéndole saber, que el expediente del registro de la Gobernación Nº 7204 caratulado "CONTADURÍA GENERAL S/ CAUSA JUDICIAL WEIS ENRIQUE C/ PROVINCIA S/ RECONOCIMIENTO DE INTERESES", luego de remitido a la Tesorería General de la Provincia, mediante Nota Externa Nº 1980/11 – Letra TCP SC (fs. 394), ha reintegrado a la Secretaría Legal de este Tribunal, conforme Informe Tesorería General Nº 1948/11 de fecha 30/11/11.

ARTICULO 5º.- Notificar a la Secretaría Legal, y por su intermedio al letrado designado en el artículo 1º.

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar al Registro de investigaciones Especiales y Juicio de Residencia creado por la Resolución Plenaria Nº 103/07. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 457

22-12-11

VISTO: La proximidad de las festividades de Navidad y Año Nuevo y el Decreto Provincial Nº 2904/11, y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia emitió el Decreto Provincial Nº 2904/11 mediante el cual se declara asueto administrativo, para los días 23 y 30 de diciembre de 2011, a partir de las 12:00 horas, para el personal dependiente de la Administración Pública Provincial.

Que asimismo, por el mismo acto, se declara asueto administrativo los días 26 de diciembre de 2011 y 02 de enero de 2012.

Que en los considerandos se expresa que "las citadas fiestas constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para todas las familias que habitan el Territorio Nacional".

Que los Sres. Miembros del Cuerpo Plenario, correspondiendo sus considerandos, reuelven adherir a los términos del mismo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por el artículo 1º, 20º y 27º de la Ley Provincial Nº 50;

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1º: Declarar asueto administrativo en el ámbito del Tribunal de Cuentas, los días 23 y 30 de diciembre de 2011, a partir de las 12:00 horas, y los días 26 de diciembre de 2011 y 02 de enero de 2012, en razón de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 458

22-12-11

VISTO: el expediente del Registro del Tribunal de Cuentas Letra: T.C.P. PR Nº 269, año 2011 caratulado: "S/RENDICIÓN GASTOS RESERVADOS AGOSTO/2010-POLICIA PROVINCIAL", y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita la rendición del Libramiento Nº 17344, correspondiente al mes de agosto de 2010, realizada por el Comisario Mayor @ Oscar Nelson MOREIRA, mediante Nota Nº 129/2010 J.P. de fecha 10 de septiembre de 2010.

Que la referida presentación fue realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 1 de la Resolución Plenaria Nº 29/2000, que aprueba la "reglamentación dispuesta para la rendición de gastos confidenciales a realizar por la Policía Provincial, derivados de investigaciones especiales".

Que los gastos rendidos fueron vinculados a causas judiciales, según detalle de la "Planilla de Rendición de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad - Ushuaia" y la "Planilla de Rendición de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad Río Grande".

Que este Organismo de Control ha procedido a la verificación de la información recibida, con la remisión de Oficios a los Juzgados intervinientes, habiéndose corroborado la existencia y trámite de las Causas referidas.

Que corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones informando a la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial lo verificado por este Tribunal de cuentas, haciendo constar que de acuerdo a lo establecido en el Pto. 8 del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 29/2000 "El mérito, la oportunidad, conveniencia y consecuencias de la inversión de dichos fondos será exclusiva responsabilidad de la institución policial".

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto, de conformidad a lo establecido por el artículo 27 de la Ley Provincial 50 y la Resolución Plenaria Nº 29/2000.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar por verificados los gastos reservados de la Policía Provincial, correspondientes al Libramiento Nº 17344, del mes de agosto de 2010.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al Jefe de Policía, a la señora Secretaria de Seguridad Provincial y a la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial, con copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar. Publicar. Cumplido, archivar

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 459

22-12-11

VISTO: La Nota Nº 005/2011, letra RR.III. del registro del Banco de Tierra del Fuego y la Nota S/N suscripta por el Sr. Daniel ROGGERO, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Nota Nº 005/2011, letra RR.III. se informa que mediante Resolución de Directorio del Banco de Tierra del Fuego, se ratificó la autorización a adscribir al agente Daniel Ricardo ROGGERO al Tribunal de Cuentas.

Que por Resolución Plenaria Nº 375/2011, se autorizó el goce de la primera fracción, siendo esta de SIETE (7) días.

Que el citado agente, solicita se autorice el usufructo de la 2ª fracción de la licencia anual ordinaria del 03 al 15 de Enero de 2012, quedando un remanente de OCHO (8) días pendientes.

Que de acuerdo a lo establecido por medio del Artículo 4º del Decreto Nacional Nº 3413/79, las licencias y franquicias deberán ser acordadas por las autoridades competentes del organismo en el cual se desempeña.

Que han tomado intervención el Auditor Fiscal C.P. Diego VERNET sin formular objeciones, la Sra. Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, indicando que no existen razones de servicio que impidan autorizar lo solicitado y el Sr. Vocal Contador, autorizando el pedido.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias y el Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º.- Autorizar el usufructo del período correspondiente a la 2ª fracción de la licencia anual ordinaria al agente adscripto Daniel ROGGERO, entre los días 03/01/2012 y 15/01/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar al agente y al Banco de Tierra del Fuego, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 460

22-12-11

VISTO: El expediente Nº 295/2011, Letra TCP - PR, caratulado: "S/ FERIA ANUAL 2011", la Resolución Plenaria Nº 310/2011, y la Nota Nº 2190/2011, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota Nº 2190/2011, el agente Pedro Nimsi GONZALEZ, legajo Nº 23, solicita autorización para usufructuar la primera fracción de la licencia anual, entre los días 27/02/2012 y el 23/03/2012, ambas fechas inclusive.

Que no existen razones de servicio que impidan autorizar lo solicitado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias, artículo 39º del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria Nº 310/2011.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º.- Autorizar el usufructo de la primera fracción de la Licencia Anual 2011 al agente Pedro Nimsi GONZALEZ, Legajo Nº 23, entre los días 28/02/2012 y 23/03/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar al agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 461

22-12-11

VISTO: Los expedientes Nº 131/2011, Letra TCP - PR, caratulado: "S/ RECESO INVERNAL PERÍODO 2011" y Nº 295/2011, Letra TCP - PR, caratulado: "S/ FERIA ANUAL 2011", y la Nota Interna Nº 2191/2011; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada Nota Interna, la agente Elizabeth HERNANDEZ SOTO, legajo Nº 24, solicita autorización para hacer uso de la licencia de invierno a partir del día 22/12/2011 y, al finalizar la misma, usufructuar la licencia anual 2011.

Que la agente no ha usufructuado la licencia invernal en el período establecido debido a que se encontraba haciendo uso de licencia por maternidad.

Que han tomado intervención la Sra. Prosecretaría Contable, sin formular objeciones y el Sr. Vocal Contador, autorizando lo solicitado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias, artículo 39º del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º.- Autorizar el usufructo a la agente Elizabeth HERNANDEZ SOTO a hacer uso de la Licencia de Invierno 2011 entre los días 22/12/2011 y 02/01/2012, ambas fechas inclusive, y de la Licencia Anual 2011 entre los días 03/01/2012 11/02/2012, ambas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 462

22-12-11

VISTO: El expediente Letra TCP - PR, Nro. 295/2011, caratulado: "S/ FERIA ANUAL 2011" y la Nota Interna Nº 2050/11, Letra TCP - SC - GEOP - AT, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Nota Interna, el agente Luis DONNARUMMA, Legajo Nº 89, solicita autorización para modificar las fechas de usufructo de la Licencia Anual 2011, para hacer uso entre los días 09/04/2012 y 18/05/2012, ambas fechas inclusive.

Que han tomado intervención, la Sra. Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, indicando que no existen razones de servicio que impidan la autorización de la mencionada modificación y el Sr. Vocal Contador, autorizando lo solicitado.

Que el citado período excede al establecido por Resolución Plenaria Nº 310/2011, por tanto la presente tiene carácter de excepción.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias, artículo 39º del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º.- Autorizar la modificación del período de Licencia Anual 2011 al agente Luis DONNARUMMA, a ser usufructuada entre el 09/04/2012 y 18/05/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 463

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley N° 478 N° H-1436/11, caratulado: "HENRIQUES SANCHES MARIA LORENA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante las citadas actuaciones tramita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES en el marco de la Ley Provincial N° 783 respecto a las Líneas 7772-7775 Operaciones N° 0038523434-2680019178899, cuyos valores contables al momento de acogerse al régimen establecido por dicha ley, ascendían a las sumas de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 35/100 (\$ 8.310,35) y PESOS SIETE MIL SESENTA Y TRES CON 79/100 (\$ 7.063,79) respectivamente.

Que la Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES adhirió a los términos de la Ley Provincial 783, con fecha 12 de abril de 2011 (fs. 43).

Que a fojas 48, se incorporó la constancia de recepción de depósito Fondo Residual Ley 478, por la suma de PESOS SIETE MIL SESENTA Y TRES CON 79/100 (\$ 7.063,79).

Que mediante Informe Legal N° 148/2011 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 16 de mayo de 2011, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando el Dr. Gustavo MARCHESI que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenaria N° 72/02, salvo lo dispuesto en el Punto I incisos a y b no obstante lo cual, tratándose de un pago total, ello no obstaba la continuidad del trámite.

Que mediante Informe Contable N° 263/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 13 de junio de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA, quien concluyó que "1. Al momento de la refinanciación de la deuda no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario N° 1244 (Actualización de deudas según Ley 25713), por tratarse de una deuda en pesos.

2. De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encontraría dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial N° 783, debiendo abonar al 12/04/2011, con el beneficio 15% del art.- 6 de la Ley antes mencionada, la suma de \$ 7.063,79, habiendo cancelado el total de dicha suma, según consta en el comprobante de fs. 48, no surgiendo diferencia alguna respecto del cálculo efectuado por el Fondo Residual Ley 478...".

Que mediante Nota Int. N° 2025/11 Letra T.C.P.- S.C. (Fondo Residual), el 10 de noviembre de 2011, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, CPN María Laura PEREZ TORRE, elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1° de la Ley provincial N° 486, modificada por su similar N° 551 y la Ley provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y a Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES, en relación a las Líneas 7772-7775 Operaciones N° 0038523434-2680019178899, dando por concluida la intervención de éste Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley N° 478 N° H-1436/11, caratulado: "HENRIQUES SANCHES MARIA LORENA S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

ARTICULO 3°.- Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal interviniente y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 464

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley N° 478 N° Z-1439/10, caratulado: "ZAPATA ADRIANA DEL VALLE S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante las citadas actuaciones tramita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. Adriana del Valle ZAPATA en el marco de la Ley Provincial N° 783 respecto de la Línea 7775 Operación N° 2680029044333, cuyo valor contable al momento de acogerse al régimen establecido por dicha ley, ascendía a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 57/100 (\$ 4.336,57).

Que la Sra. Adriana del Valle ZAPATA adhirió a los términos de la Ley Provincial 783, con fecha 27 de septiembre de 2010 (fs. 40).

Que a fojas 44, se incorporó la constancia de recepción de depósito Fondo Residual Ley 478, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 58/100 (\$ 3.728,58).

Que mediante Informe Legal N° 397/10 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 20 de octubre de 2010, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando la Dra. Sandra FAVALLI que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenaria N° 72/02.

Que mediante Informe Contable N° 268/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 14 de junio de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA, quien concluyó que: "1. Al momento de la regularización de la deuda no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario N° 1244 (Actualización de deudas según Ley 25713), por tratarse de una deuda en pesos.

2. De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encontraría dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial N° 783, debiendo abonar al 27/09/2010, con el beneficio 15% del art. 6 de la Ley antes mencionada, la suma de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 58/100 (\$ 3.728,58) habiendo cancelado el total de dicha suma, según consta en el comprobante de fs. 44, no surgiendo diferencia alguna respecto del cálculo efectuado por el Fondo Residual Ley 478..."

Que mediante Nota Int. N° 2025/11 Letra T.C.P.- S.C. (Fondo Residual), el 10 de noviembre de 2011, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, CPN María Laura PEREZ TORRE, elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1° de la Ley provincial N° 486, modificada por su similar N° 551 y la Ley provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y Sra. Adriana del Valle ZAPATA en relación a la Línea 7775 Operación N° 2680029044333, dando por concluida la intervención de éste Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley N° 478 N° Z-1439/10, caratulado: "ZAPATA ADRIANA DEL VALLE S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

ARTICULO 3°.- Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal interviniente y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 465

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "I" Nº 1140 del año 2006, caratulado: "IMBERT ADOLFO MARIO AGUSTIN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de las citadas actuaciones tramitó el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Refinanciación Ley provincial Nº 692, suscripto entre el Sr. IMBERT Adolfo Mario Agustín en su carácter de deudor, y el Fondo Residual Ley provincial Nº 478, con fecha 30 de noviembre de 2006.

Que el deudor manifestó su adhesión al Régimen de Liquidación y Regulación de Deudas estipulado en la Ley Provincial Nº 692, respecto del crédito originado en la Línea 1913 Operación Nº 600, Línea 1913 Operación Nº 13300 y Línea 9413 Operación Nº 3400 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

Que en el marco de dicho acuerdo el deudor reconoció mantener con el Fondo Residual, una deuda actualizada, con la aplicación del art. 1.1 de la Ley Provincial Nº 692, que asciende a la suma total de Pesos cien mil ciento noventa con 00/100 (\$ 100.190,88).

Que en garantía de cumplimiento de la obligación pactada, el deudor libró pagaré a la vista sin protesto a favor del Fondo Residual por la suma de \$ 100.190,88.

Que oportunamente este Organismo tomó intervención en el marco de las presentes actuaciones emitiendo el Acuerdo Plenario Nº 1622, por el cual resolviera Recomendar al Administrador del Fondo Residual evaluar la sustitución de la garantía actual por una real, en razón a la mayor seguridad para afianzar el crédito en cuestión.

Que así las cosas, a fs. 88 se agrega copia fiel de la Carta Documento remitida por el Fondo Residual al deudor, intimándolo a que lo hiciera presente en la sede del ente a fin de constituir la citada garantía hipotecaria, ya que de la documentación referente a los antecedentes de la deuda en cuestión, surgía que con fecha 26/04/1995 ya se había acordado la constitución de una hipoteca en garantía de la asistencia crediticia otorgada.

Que a fs. 89 se agrega Nota F.R. Nº 25/08 por la que el entonces Administrador del Fondo Residual, indicó a este Tribunal de Cuentas que no obstante la misiva remitida, el deudor a la fecha (17/06/2008) aun no se había hecho presente ante dicho ente a fin de suscribir la pretendida garantía hipotecaria.

Que a fs. 90 se agrega Informe Legal Nº 325/08 Letra TCP-CA de fecha 19/07/2008, por el que el Dr. Gustavo MARCHESI, manifestó que resultaban creíbles los argumentos esgrimidos por el entonces Administrador del Fondo Residual en cuanto a la imposibilidad de sustitución de la garantía constituida por una real, por lo que tendiendo en cuenta que la intervención de este Organismo lo es en el marco del control posterior (art. 1º Ley 406 modificada por su similar Nº 551), en su caso cobrará dar intervención al Plenario de Miembros a fin de que, si así lo considera pertinente, las consideraciones vertidas se plasmaran en la pertinente observación.

Que a fs. 92 se agrega Nota Interna Nº 604/2010 Letra TCP-SP de fecha 25/10/2010 por la que el Secretario Privado del Cuerpo Plenario de Miembros, indicara que en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Plenaria Nº 310/2009 y a fin de solicitar temperamento a seguir en relación al expediente de marras, el cual fuera hallado en el área con un pase a la Secretaría de Tesorería para incorporar a la agenda de Plenarios en fecha 14/07/08 y con planilla de asignación de votos de fecha 15/07/08.

Que con fecha 12/12/2010 el Vocal Contador en ejercicio de la Presidencia previo a emitir su voto, solicitó a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable que el Auditor Fiscal emitiera el correspondiente informe. Por lo que las actuaciones fueron giradas al CP Leandro CAMPANNA, quien la recibió el 16/11/2010.

Que a fs. 93/96 se agrega Informe Contable Nº 179/2011 Letra TCP-FDO. RESIDUAL de fecha 04/05/2011 por el que el Auditor Fiscal CP Marco FUENTES IBARRA analizó los cálculos efectuados respecto de la actualización de las deudas según el art. 1 de la Ley Nº 692, en relación con las Operaciones Nº 1913-0600, Nº 1913-13300 y Nº 9410-3400, arribando así a las siguientes conclusiones:

"1) Por las operaciones Nº 1913-6000, 1913-13300 y 9410-3400, al momento de la refinanciación de la deuda, no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244, cuyo Artículo 1º decía: "...Aplicar el

régimen de pesificación establecido por las leyes Nacionales...". Lo anterior, por tratarse de deudas originalmente pactadas en pesos.

2) De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encontraría dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 692, debiendo refinanciar al 30-11-2006, suma de \$ 100.190,88. Del análisis no surge diferencia significativa respecto del cálculo realizado por el Fondo Residual Ley Nº 478.

3) El plazo de refinanciación dispuesto por el art. 2 de la Ley 692, serie de treinta (30) años...".

Que a fs. 101 se agrega la Nota Interna Nº 1962/11 por la que la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PERZ TORRE, indica al Vocal de Auditoría que acompaña el análisis efectuado por el Auditor Interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 783 y en el artículo 27 y concordantes de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el Convenio de "Reconocimiento de deuda y refinanciación Ley Provincial Nº 692" celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y Sr. IMBERT Adolfo Mario Agustín respecto de los créditos originados en la Línea 1913 Operación Nº 600, Línea 1913 Operación Nº 13300 y Línea 9413 Operación Nº 3400 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, dando por concluida la intervención de éste Tribunal.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "I" Nº 1140 del año 2006, caratulado: "IMBERT ADOLFO MARIO AGUSTIN S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", así como al Auditor Interviniente y a la Secretaría Legal de este Organismo.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, NOTIFICAR Y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

**LONGHITANO
CABALLERO**

RESOL. Nº 466

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "C" Nº 1416 del año 2010, caratulado: "CABRERA ANA MARIA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN"

CONSIDERANDO:

Que en el marco de las citadas actuaciones tramitó el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Refinanciación Ley provincial Nº 783, suscripto entre la Sra. Ana María CABRERA en su carácter de deudora, y el Fondo Residual Ley Provincial Nº 478, con fecha 28 de abril de 2010.

Que la deudora manifestó su adhesión al Régimen de Liquidación y Regulación de Deudas estipulado en la Ley Provincial Nº 783, respecto del crédito originado en la Línea 3210 Operación Nº 002386300 y Línea 4810 Operación Nº 002317900 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, los cuales al momento de ser transferido al Fondo Residual ascendían a la suma de Dólares Estadounidenses doscientos setenta y seis con 93/100 (US\$ 275,93) y Pesos un mil cuarenta y tres con 86/100 (\$ 1.043,86) respectivamente.

Que en el marco de dicho acuerdo la deudora reconoció mantener con el Fondo Residual, una deuda actualizada, con la aplicación del 1% mensual directo desde la fecha de entrada en mora en la entidad bancaria y hasta el acogimiento a este régimen, que ascendía a un monto total a refinanciar de Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y siete con 04/100 (\$ 3.457,04).

Que a fs. 69/70 se agrega Informe Legal Nº 162/10 Letra TCP-CA emitido por la Dra. Romina PEREYRA, quien luego de analizar los actuados concluyó que, se había dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 72/02, sin perjuicio de las consideraciones que pudiera efectuar la Vocalía de Auditoría respecto a la liquidación practicada y a la tasa de interés aplicada.

Que a fs. 75/80 se anexa el Informe Contable Nº 182/2011 Letra TCP-FDO. RESIDUAL del CP Marco FUENTES IBARRA, quien luego de analizar los cálculos realizados por el Fondo Residual, arribó a las siguientes conclusiones:

"1) Por la operación Nº 4810-2317900, al momento de la refinanciación de la deuda NO correspondía la aplicación de lo prescripto en el

Acuerdo Plenario Nº 1244, el cual menciona en su Artículo 1º: "...Aplicar el régimen de pesificación establecido por las leyes Nacionales...". Lo anterior por tratarse de operaciones originalmente pactadas en Pesos.

2) Por la operación Nº 3210-2386300, al momento de la refinanciación de la deuda SI correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244, el cual menciona en su Artículo 1º: "...Aplicar el régimen de pesificación establecido por las leyes Nacionales...". Lo anterior por tratarse de una deuda originalmente pactada en Dólares.

3) De la revisión de la documentación efectuado por esta instancia surge que, el deudor se encontraba dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 783, tomando como constancia de acogimiento a los beneficios de la ley, la nota presentada por el mismo obrante a fs. 51, de fecha 28/04/2010.

4) Del análisis de los actuaciones surge que obra a fojas 49/50 sentencia judicial del mes de abril de 2009, por la cual correspondería la aplicación de lo prescripto en el artículo Nº 7 de la Ley Provincial Nº 783, el cual menciona: "...Podrán acogerse a los beneficios de la presente ley los deudores del Fondo Residual, Ley 478, que se encuentren en mora, con juicios iniciados o no, tanto por el Banco de Tierra del Fuego como por el Fondo Residual, Ley 478, incluidos aquellos en que hoy recaído sentencia. En estos últimos se tomará como base para la refinanciación la liquidación de la deuda conforme las pautas dadas por la sentencia dictada en cada caso. En el supuesto de superar la liquidación un porcentaje mayor al treinta por ciento (30 %) de la que corresponde de aplicar los lineamientos del artículo 2º, se dará dicho incremento como tope". No surgen diferencias entre los cálculos realizados por el Fondo Residual Ley Provincial Nº 478 y esta instancia.

5) En virtud de lo dispuesto precedentemente, el deudor ha refinanciado su deuda en el marco de la Ley Provincial Nº 783, no surgiendo diferencias respecto del cálculo realizado por el Fondo Residual Ley Nº 478...".

Que a fs. 81 se agrega la Nota Interna Nº 1961/11 por la que la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PERZ TORRE, indica al Vocal de Auditoría que comparte el análisis efectuado por el Auditor interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 783 y en el artículo 27 y concordantes de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el Convenio de "Reconocimiento de deuda y refinanciación Ley Provincial Nº 783" celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y Sra. Ana María CABRERA respecto del crédito originado en la Línea 3210 Operación Nº 002386300 y el generado en la Línea 4810 Operación Nº 002379900, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, dando por concluida la intervención de éste Tribunal.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "C" Nº 1416 del año 2010, caratulado: "CABRERA ANA MARIA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN", así como al Auditor interviniente y a la Secretaría Legal de este Organismo.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 467

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº M-1441/10, caratulado: " MELIPICHUN LEPIO MIRIAM DEL CARMEN S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante las citadas actuaciones transita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. MELIPICHUN LEPIO Miriam

del Carmen en el marco de la Ley Provincial Nº 783 respecto de la Línea 7775 Operación Nº 26800291684/71, cuyo valor contable al momento de acogerse al régimen establecido por dicha ley, ascendía a la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 23/100 (\$ 1.270,23).

Que a dicho monto se le efectuó el descuento del 15% conforme lo establecido en el art. 6 de la Ley Nº 783, en virtud de que el deudor ofreció realizar la cancelación total en efectivo, ascendiendo en consecuencia el saldo restante a abonar a la suma de \$ 1.037,20.

Que la Sra. MELIPICHUN LEPIO Miriam del Carmen adhirió a los términos de la Ley Provincial 783, con fecha 13 de octubre de 2010 (fs. 38).

Que a fojas 42, se incorporó la constancia de recepción de depósito Fondo Residual Ley 478, por la suma de PESOS MIL TREINTA Y SIETE CON 20/100 (\$ 1.037,20).

Que mediante Informe Legal Nº 466/10 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 02 de diciembre de 2010, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando la Dra. Sandra FAVALLI que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenaria Nº 72/02.

Que mediante Informe Contable Nº 302/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 11 de julio de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA, quien concluyó que: "... Al momento de la regularización de la deuda no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244 (Actualización de deudas según Ley 25713), por tratarse de una deuda en pesos.

2. De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encontraba dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 783, debiendo abonar al 13/10/2010, con el beneficio 15% del art. 6 de la Ley antes mencionada, la suma de UN MIL TREINTA Y SIETE CON 20/100 (\$ 1.037,20) habiendo cancelado el total de dicha suma, según consta en el comprobante de fs. 42, no surgiendo diferencia alguna respecto del cálculo efectuado por el Fondo Residual Ley 478...".

Que mediante Nota Int. Nº 2059/11 Letra T.C.P.- S.C. (Fondo Residual), el 24 de noviembre de 2011, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, CPN María Laura PEREZ TORRE, elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal interviniente.

Que al Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1º de la Ley provincial Nº 486, modificado por su similar Nº 551 y la Ley provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y Sra. MELIPICHUN LEPIO Miriam del Carmen respecto de la Línea 7775 Operación Nº 26800291684/71, dando por concluida la intervención de éste Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº M-1441/10, caratulado: "MELIPICHUN LEPIO MIRIAM DEL CARMEN S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

ARTICULO 3º.- Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal interviniente y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 4º.- REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 468

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº R-1451/11, caratulado: "ROJAS ELISA EDITH S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante las citadas actuaciones tramita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y la Sra. Elisa Edith ROJAS en el marco de la Ley Provincial Nº 783 respecto de la Línea 7775 Operación Nº 2680019167673, cuyo valor contable al momento de acogerse al régimen establecido por dicha ley, ascendía a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 05/100 (\$ 2.453,05).

Que la deudora se adhirió a los términos de la Ley Provincial 783, con fecha 29 de diciembre de 2011 (fs. 45).

Que a fojas 49, se incorporó la constancia de recepción de depósito Fondo Residual Ley 478, por la suma de PESOS DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 09/100 (\$ 2.085,09).

Que mediante Informe Legal Nº 82/11 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 16 de marzo de 2011, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando la Dra. Rumina PEREYRA que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenarios Nº 72/02.

Que mediante Informe Contable Nº 301/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 11 de julio de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA, quien concluyó que: "1. Al momento de la regularización de la deuda no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244 (Actualización de deudas según Ley 25713), por tratarse de una deuda en pesos.

2. De los cálculos efectuados por esta instancia surge que, el deudor se encontraría dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 783, debiendo abonar al 29/12/2010, con el beneficio 15% del art. 6 de la Ley antes mencionada, la suma de DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 09/100 (\$ 2.085,09) habiendo cancelado el total de dicha suma, según consta en el comprobante de fs. 49, no surgiendo diferencia alguna respecto del cálculo efectuado por el Fondo Residual Ley 478...".

Que mediante Nota Int. Nº 2059/11 Letra T.C.P.- S.C. (Fondo Residual), el 24 de noviembre de 2011, la Prosecretaría Contable n/c de la Secretaría Contable, CPN María Laura PEREZ TORRE, elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1º de la Ley provincial Nº 486, modificada por su similar Nº 551 y la Ley provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y Sra. Elisa Edith ROJAS respecto de la Línea 7775 Operación Nº 2680019167673, dando por concluida la intervención de éste Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº R-1451/11, caratulado: "ROJAS ELISA EDITH S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

ARTICULO 3º.- Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal interviniente y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 4º.- REGISTRAR, NOTIFICAR Y PUBLICAR la presente Resolución Plenarios en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

VISTO: el Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra SC Nº 355 del año 2011, caratulado: "5/ SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ART. 5º ACUERDO PLENARIO 2215" y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 5º del Acuerdo Plenario Nº 2215 se resolvió: "Requerir a la Ministro de Salud, Dra. María Haydeé GRIECO, que en el plazo de cinco (5) días de notificada, informe a este Tribunal de Cuentas, si se ha suscripto el respectivo convenio con alguna Organización que se encargue de prestar los servicios de alojamiento y racionamiento de los pacientes derivados por el Ministerio de Salud Provincial o, en su caso, las tramitaciones que se están llevando a cabo y el grado de avance en las mismas, bajo apercibimiento de aplicar sanciones".

Que al respecto, por medio de la Nta Interna Nº 1667/2011 Letra TCP- Deleg. P.E., el Auditor Fiscal CP Lisandro CAPANNA informó que el Ministerio de Salud en respuesta al requerimiento efectuado mediante el artículo 5º del Acuerdo Plenario Nº 2215, presentó la Nota Nº 307/11 letra M.S. - S.S.P.S., de fecha 21/09/2011, suscripta por el Dr. Juan COMEZ CARRILLO, en su carácter de Subsecretario de Políticas de Salud, en la cual el funcionario expresó: "este Ministerio de encuentra trabajando bajo un proyecto de convenio de adhesión de diversos pacientes derivadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", como así también que "Mediante Expte. 54774-MS-11 se está tramitando la normativa que permite lo antes expuesto".

Que así las cosas, el Auditor interviniente solicitó la remisión del expediente Nº 5474-MS-2011 caratulado: "S/ LICITACION PÚBLICA ALOJAMIENTO PACIENTES DERIVADOS", de donde extrajo el siguiente detalle:

"- A fs. 4/5 obra Nta Nº 535/11 de fecha 30/05/2011 suscripta por el Dr. Martín URTASUN en su carácter de Director Provincial de Salud y Des. Social, mediante la cual el funcionario expone información estadística de las derivaciones que se realizaron en el año 2010, que actualmente el presente servicio se presta con la empresa Organización JCV S.R.L., y expone la nueva metodología propuesta o implementar para prestar el presente servicio a las personas derivadas.

- A fs. 6/7 obra Nota Nº 2133/11 de fecha 04/08/2011, suscripta por la Lic. Rita RIVERA en su carácter de Subsecretaría de Control y Gestión, por la cual se eleva a la Sra. Ministro de Salud, la propuesta mencionada en el punto precedente, surgiendo en su 4ta. Párrafo "Se cuenta con la positiva experiencia en el Sistema de Farmacias adheridas al Convenio Marco para la Provisión de Medicamentos en cuanto a la optimización de la prestación y la disminución del gasto. Eso fue posible por la combinación de dos factores, el dictado de normativa procedimental especial y la apertura de una Cuenta Corriente Específica como es el Fondo de Atención de Personas".

- A fs. 7 obra la intervención de la Sra. Ministro de Salud autorizado la continuación del presente trámite.

- A fs. 8 obra la Nota Nº 751/11 de fecha 27/07/2011 suscripta por el Dr. Martín URTASUN en su carácter de Director Provincial de Salud y Des. Social, mediante la cual el funcionario informa los establecimientos que presupuestaron el servicio y su ubicación geográfica según la distribución establecida por el organismo C.A.B.A. Asimismo se adjunta un proyecto de convenio de prestación de servicio presentado por potencial oferente.

- A fs. 29 obra Nota Nº 2402/11 de fecha 09/09/2011 suscripta por la Lic. Rita RIVERA, por la cual solicita la "evaluación y análisis de lo propuesto en fajas 6 y 7 respecto a replicar el sistema de "Convenio de adhesión de prestadores" por los servicios de alojamiento racionamiento y traslados en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires toda vez implicaría una excepción el procedimiento de Licitación Pública...".

Que en relación con la documentación detallada precedentemente el Auditor interviniente realizó las siguientes consideraciones, tendientes a que este Plenario de Miembros pueda analizar el cumplimiento o no, del artículo 5º del Acuerdo Plenario Nº 2215:

"1. En las presentes actuaciones no obra documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del Acuerdo Plenario, destacando que el seguimiento del cumplimiento de los mismos no ha sido asignado a este Auditor Fiscal y que el expediente 5474-MS-2011 no tiene relación directa con los mismos.

2. Que a la fecha, la presente tramitación lleva 4 meses y a criterio del suscripto se encuentra en una etapa preliminar, toda vez que si bien obra

Intervención del área legal del Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, a fin de garantizar la viabilidad legal del presente proyecto.

4. Que el contrato suscripto con la Organización JCV S.R.L., vence el 01/01/2010, y que a la fecha, la prestación de servicio de alojamiento y racionamiento de los pacientes derivados continúa prestandose en las mismas condiciones que los relevados en el Acuerdo Plenario 2215 con el funcionario prestador. Por la expuesta y defendida constancia que el Dr. Juan GÓMEZ CARRILLO emitió dar respuesta sobre el presente, se indica que se ha tomado intervención en el Expte. 21351 RO/2010 encausado "SOLICITACIÓN DE GASTOS ORGANIZACIÓN JCV S.R.L. DE PACIENTES DERIVADOS POR EL Mº DE SALUD A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DURANTE LA 2 QUINCENA DEL MES DE MAYO 2011", en el marco del control preventivo uniéndose el Acta de constitución Nº 565/11, constataándose el presente incumplimiento.

4. Se adjunta informe B3BBA emitido del sistema informático SIGA, en el cual se detalla los expedientes por los cuales se han tramitado durante el ejercicio 2010 y el presente 2011, la contratación del servicio de alojamiento y racionamiento con el proveedor Organización JCV S.R.L.

5. Que la intervención solicitada a la Contaduría General de la Provincia se realizó el 12/09/2011 sin verificarse en las presentes actuaciones la opinión del Contador General sobre el pedido efectuado.

6. Que debe advertirse que la propuesta elevada a la Contaduría, que prevé un Fondo Pagador, en idéntica similitud al utilizado para el pago de la provisión de medicamentos reglamentado por la Resolución de Contaduría General Nº 05/10, colisiona con las pautas establecidas para la intervención preventiva por este Tribunal de Cuentas mediante la Resolución Plenaria Nº 01/01 modificada por su similar Nº 89/02".

Que conforme surge de los antecedentes anudados a estas actuaciones, puede vislumbrarse que desde el Ministerio de Salud se están arbitrando los medios a fin de aplicar un sistema de "Convenio de adhesión de prestadores" por los servicios de alojamiento, racionamiento y traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implicaría un procedimiento de excepción al de Licitación Pública tal como se encuentra reglamentado en la Ley Territorial Nº 6.

Que sobre el particular, cabe señalar que al respecto aun no se ha expedido la Contaduría General así como tampoco la Secretaría Legal y Técnica. No obstante ello, cabe señalar que tratándose de una contratación estatal la intervención de este Organismo únicamente puede darse una vez que se haya aprobado la contratación por el funcionario competente, previo a la suscripción del convenio en sí mismo o en el caso de que se aprobara un procedimiento de excepción, a fin de verificar su legalidad. Otra posibilidad es intervenir en el marco de un pedido de asesoramiento, circunstancias estas que no se dan en el marco de estas actuaciones.

Que, circunscribiéndonos al objeto de análisis por estos actuados, cual es el cumplimiento del artículo 5º del Acuerdo Plenario Nº 2215 y toda vez que el Ministerio ha dado respuesta al informar respecto de las tramitaciones que se están llevando a cabo y el grado de avance en relación al marco contractual aplicable a las derivaciones, cabe tener por cumplido el menado requerimiento.

Que sin perjuicio de ello, cabe señalar a las autoridades del Ministerio que en caso de resolverse aplicar dicho procedimiento de excepción mediante un Convenio marco de adhesión, el mismo deberá contar con aprobación legislativa, en virtud de que el mismo se apartaría del procedimiento genérico de contrataciones estatales previsto en la Ley Territorial Nº 6.

Que, por otra parte el Auditor Fiscal trae a colación la falta de cumplimiento de los artículos 3º y 4º del Acuerdo Plenario Nº 2215, por medio de los cuales se resolviera:

ARTICULO 3º.- Requerir a la actual Subsecretario de Control y Gestión, Lic. Rita RIVERA, que arbitre las medidas tendientes a que se dicte un octo administrativo por el cual se aprueba el procedimiento a llevar a cabo respecto de las derivaciones de pacientes a la Ciudad de Buenos Aires, el cual deberá ser de aplicación también en la esfera de la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la C.A.B.A.

ARTICULO 4º: Requerir a la actual Subsecretaría de Control y Gestión, Lic. Rita RIVERA, que arbitre las medidas tendientes a que se incorporen en los expedientes por los que tramite la concreción de facturas por los servicios de alojamiento y racionamiento, un informe del seguimiento diario de las derivaciones que lleva a cabo la Dirección de Salud y Desarrollo Social y, a su vez, para que se agreguen las planillas de ACCESS elaboradas por el Depto. de Estadísticas y Administración, encargada de relevar los datos que emergen de los menados seguimientos. Ello a fin de poder constatar la efectiva prestación de los servicios en cuestión".

Que sobre el particular cabe señalar que en función de que la Lic. Rita RIVERA ya no se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión del

Ministerio de Salud y dado que no se ha cumplido dicho cargo aun, cabe realizar los menados requerimientos a la Ministra de Salud.

Que en función de de las consideraciones precedentes, los suscriptos emiten el presente acto administrativo en el marco de lo previsto en el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 50.

En ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOL. V.12

ARTICULO 1º.- Tener por cumplido el artículo 5º del Acuerdo Plenario Nº 2215, en función de la expuesto en las considerandos.

ARTICULO 2º.- Hacer saber a las autoridades del Ministerio de Salud que, en caso de resolverse aplicar un procedimiento de excepción mediante un Convenio marco de adhesión con diferentes prestadores de los servicios de alojamiento y racionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los pacientes derivados del Ministerio de Salud, el mismo deberá contar con aprobación legislativa en virtud de que se apartaría del procedimiento genérico de contrataciones estatales previsto en la Ley Territorial Nº 6.

ARTICULO 3º.- Requerir a la Ministra de Salud, Dra. María Haydeé GRIECO que en el plazo de 15 (quince) días de notificada de la presente dé cumplimiento a los artículos 3º y 4º del Acuerdo Plenario Nº 2215, conforme lo expuesto en los considerandos, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones que este Tribunal de Cuentas estime pertinentes.

ARTICULO 4º.- Notificar con copia certificada de la presente a la Ministra de Salud, Dra. María Haydeé GRIECO, al Auditor Fiscal interviniente CPN Lisandro CAPANNA con remisión de las actuaciones citadas en el visto, a fin de que el mismo controle el cumplimiento del artículo 3º y a la Secretaría Contable de este Organismo.

ARTICULO 5º.- Por Secretaría privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

LONGHIITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 470

22-12-11

VISTO: El artículo 22 del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 152/09 -Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas-, modificado por Resolución Plenaria Nº 336/11,

CONSIDERANDO:

Que la citada norma dispone, en su inciso e), entre las funciones de los revisores de cuentas la de: "Reemplazar a los Auditores Fiscales, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley Provincial Nº 50 y este reglamento interno, en caso de ausencias prolongadas o vacaciones. La designación se efectuará por Resolución Plenaria de Miembros, previo impulso de la Vocalía de la cual dependen, y sólo podrá recaer en los Revisores de Cuentas profesionales con título de Contador Público, que cumplan los requisitos que exija el cargo subrogado. En tal supuesto el agente al que se le hayan asignado las funciones transitorias, tendrá derecho a percibir, por la subrogancia que efectivamente realice y por el tiempo que dure la misma, una retribución adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de la asignación de la categoría y adicionales particulares del agente y el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de subrogante".

Que atento la norma expuesta y considerando la ausencia prolongada que se genera en razón de la designación dispuesta por Resolución Plenaria Nº 356/11 del Auditor Fiscal C.P. Daniel MALDONES -Legajo Nº 64-, como Prosecretario Contable Subrogante, y el inconveniente de servicio que en consecuencia se presenta en las delegaciones que se encontraban a su cargo, junto al Auditor Fiscal C.P. Jorge ESPECHE, -IPRA, OPP, INFUTUR, DPOSS y Municipalidad de Ushuala-, resulta procedente, por estrictas razones de servicio y conforme la propuesta propiciada por el Vocal de Auditoría, designar como Auditor Fiscal subrogante al Revisor de Cuentas Profesional asignado a esas delegaciones C.P. Leonardo Rafael DARBOZA - Legajo Nº 120, quien conforme constancias obrantes en su Legajo Personal, cumple los requisitos del cargo a subrogar previstos en el artículo 21 de la Ley Provincial 50, y deberá tomar intervención, en tal carácter, en los procedimientos de control preventivo o posterior, según corresponda, en relación a las actuaciones de los siguientes organismos: IPRA e INFUTUR, ello mientras dure la licencia del Auditor Fiscal ya nombrado, conforme lo autorizan las previsiones

dispuestas por el inc. e) del artículo 22 de la Resolución Plenaria Nº 152/09, modificada por su similar Nº 336/11.

Que el agente ha prestado conformidad para su afectación transitoria como Auditor Fiscal Subrogante.

Que por todo lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que disponga la afectación del caso.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 inc. c) y 27 de la Ley Provincial Nº 50, e inc. e) del artículo 22 de la Resolución Plenaria Nº 152/09, modificada por su similar Nº 336/11.

POR ELLO:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º: Designar como Auditor Fiscal subrogante al Revisor de Cuentas Profesional C.P. Leonardo Rafael BARBOZA, D.N.I. Nº 30.644.833, Legajo Nº 120, quien conforme constancias obrantes en su Legajo Personal, cumple los requisitos del cargo a subrogar previstos en el artículo 21 de la Ley Provincial 50, y deberá tomar intervención, en tal carácter, en los procedimientos de control preventivo o posterior, según corresponda, en relación a las actuaciones tramitadas en las siguientes delegaciones: Instituto Provincial de Regulación de Apuestas -I.P.R.A.- e Instituto Fueguino de Turismo -IN.FUE.TUR.-, ello mientras dure la subrogancia del Auditor Fiscal C.P. Daniel MALDONES como Prosecretario Contable, conforme lo autorizan las previsiones dispuestas por el inc. e) del artículo 22 de la Resolución Plenaria Nº 152/09, modificada por su similar Nº 336/11, a partir del día siguiente al de su modificación. Pilo, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º: Notificar con copia certificada de la presente, al agente C.P. Leonardo Rafael BARBOZA y a la Secretaría Contable.

ARTICULO 3º: Registrar. Comunicar a Dirección de Administración. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 471

22-12-11

VISTO:

El Expediente del registro de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Nº 213/2011, Letra C.R.P.T.F. caratulado "LICITACION PUBLICA Nº 02/2011 - C.R.P.T.F. - S/ ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN LA CIUDAD DE USHUAIA" y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones *ut supra* citadas fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas en consulta, en el marco de la competencia legalmente atribuida por el artículo 2º, inciso j) de la Ley provincial Nº 50.

Que el trámite se orienta a llevar a cabo la Licitación Pública para la compra de un total de nueve (9) hectáreas de tierra en la ciudad de Ushuaia, como uno de los mecanismos previstos por la Ley provincial Nº 834 para la inversión de los activos de la Caja en cuestión, a fin de optimizar y fortalecer sus recursos económicos.

Que la Secretaría Legal de este Órgano de Control, tomó intervención mediante el Informe Legal Nº 444/2011, Letra T.C.P. - S.L., que se adjunta y forma parte de la presente.

Que los Miembros de este Tribunal de Cuentas compartimos en su totalidad el criterio volcado en el citado Informe, por lo que corresponde su aprobación y, en virtud de razones de brevedad, hacemos propios sus términos y nos remitimos a sus respectivas conclusiones.

Que este Cuerpo Plenario resulta competente para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto por los artículos 1º; 2 inciso j); 4 inciso g); 26 y 27 de la Ley provincial Nº 50 y Resolución Plenaria Nº 373/2010.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Informe Legal Nº 444/2011, Letra T.C.P. - S.L., que se adjunta y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Notificar a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mediante la remisión del expediente de su registro Nº 213/2011, Letra C.R.P.T.F., caratulado "LICITACION PUBLICA Nº 02/2011 - C.R.P.T.F. - S/ ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN LA CIUDAD DE USHUAIA", con adjunción de copia certificada del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 3º: Notificar a la Secretaría Legal en la sede de este Órgano de Control.

ARTÍCULO 4º: Comunicar y publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 472

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº S-1447/10, caratulado: "SANCHEZ JUAN DOMINGO S/ PAGO TOTAL DE DEUDA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante las citadas actuaciones tramita el convenio de pago total, suscripto entre el Fondo Residual Ley 478 y el señor Juan Domingo SANCHEZ en el marco de la Ley Provincial Nº 783 respecto a la Operación Línea 7772 Nº 0051716668.

Que el deudor reconoce que en relación con la operación mencionada ya había suscripto un Convenio de Refinanciación de fecha 29/11/01 del cual no surge capital abonado y que ante el incumplimiento del mencionado acuerdo se promovió la ejecución del mismo, en el cual surge un depósito judicial por la suma de \$ 2.130,44 (Pesos dos mil ciento treinta con 44/100) que debía ser descontado de la liquidación anexa al convenio actual.

Que al respecto en la cláusula tercera del convenio de pago se indica que el deudor reconocía mantener con el Fondo Residual una deuda cuyo valor contable actualizado con la aplicación del 1% mensual directo desde la fecha de mora en dicha entidad Bancaria y al momento de acogerse a este régimen ascendía a la suma de Pesos dos mil novecientos cuarenta y dos con 96/100 (\$ 2.942,96). Dicho monto fue establecido conforme lo establecido en el art. 2 de la Ley Nº 783.

Que atento que el deudor ofreció realizar la cancelación total en efectivo se le aplicó el descuento del 15% conforme lo establecido en el art. 6 de la Ley Nº 783, en razón de lo cual surgió un saldo de Pesos dos mil quinientos uno con 51/100 (\$ 2.501,51), al que se le descontó el depósito judicial mencionado *ut supra*, arrojando ello un saldo final de Pesos trescientos setenta y uno con 07/100 (\$ 371,07).

Que fs. 52 se agrega constancia de recepción de depósitos del Fondo Residual de fecha 14/10/2010 por la suma de \$ 371,07 (Pesos trescientos setenta y uno con 07/100).

Que mediante Informe Legal Nº 49/2011 Letra T.C.P.-C.A., de fecha 01 de febrero de 2011, tomó intervención el cuerpo de abogados de este Tribunal de Cuentas, indicando la Dra. Sandra FAVALLI que se encontraban cumplimentados los requerimientos exigidos por la Resolución Plenaria Nº 72/02.

Que mediante Informe Contable Nº 300/2011 Letra T.C.P.- FDO. RESIDUAL, de fecha 08 de julio de 2011, se expidió el Auditor Fiscal C.P. Marco FUENTES IBARRA, quien concluyó que "1) Al momento de la regularización de la deuda no correspondía la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244 (Actualización de deudas según Ley 25713), por tratarse de una deuda en pesos.

2) Atento al acogimiento realizado expresamente a fs. 43, de fecha 14/12/2010, el deudor se encontraba dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 783.

3) Conforme los cálculos efectuados por esta instancia de control, puede determinarse que a la fecha no consta en las actuaciones que el deudor haya cancelado totalmente su deuda. Puntualmente se detecta un error de cálculo en la determinación de la deuda obrante a fojas 51, ya que no se han imputado los pagos correctamente a intereses devengados en forma cronológica, y además no corresponde que se bonifique el 15% sobre los pagos realizados con fecha 10/06/2010 y 16/11/2010, ya que en esos momentos no se cancelaba el total de la deuda.

4) De lo expuesto en el párrafo anterior se determina, que al 14 de

diciembre de 2010 el deudor posee un saldo a abonar en la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 91/100 (\$ 321,8111...).

Que mediante Nota Int. Nº 2101/11 Letra F.G.P. S.C. (Fondo Residual), el 30 de noviembre de 2011, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable elevó las actuaciones al Vocal de Auditoría compartiendo lo actuado hasta el momento por el Auditor Fiscal Interviniente y señalando al respecto que la diferencia de \$ 521,81 determinada por el Auditor Fiscal al aumento de la suscripción del Convenio con fecha 14/12/2010, representa un 6,48% sobre el total de la deuda cancelada según el artículo 2º, 6º y 9º de la Ley 783/09.

Que a su vez señala que tomando en cuenta que el Fondo Residual ha tomado otro criterio de cálculo de la deuda y considerando por ello que el deudor no ha abonado la diferencia establecida, si se aplican los intereses hasta el 30/11/12, fecha de suscripción del presente Informe, la deuda no cancelada ascendería a la suma de \$ 521,81 representando un 10,33% sobre el total de la deuda.

Que finalmente señaló que si bien los porcentajes de diferencia calculada podrían ser considerables, en su opinión dicho importe carece de significatividad.

Que al respecto cabe señalar que se comparten los análisis efectuados tanto por el Auditor Interviniente, así como por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, por lo que si bien se determinó una diferencia, la misma carece de significatividad económica, por lo que no cabe la continuación de la tramitación de estas actuaciones por el dispendio administrativo que ello generaría. No obstante informar de ello a la Administradora a los fines que estime correspondan.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en el artículo 1º de la Ley provincial Nº 486, modificada por su similar Nº 551, Ley Nº 783 y la Ley provincial 50 art. 27 cc y ss.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el acuerdo de pago total celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y el señor Juan Domingo SANCHEZ en relación a la Operación Línea 7772 Nº 0051716668, dando por concluida la intervención de este Tribunal de Cuentas en las presentes actuaciones. En virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- No obstante lo indicado en el artículo anterior, cabe poner en conocimiento de la Administradora del Fondo Residual a los fines que estime correspondan- que del análisis realizado por el área contable de este Organismo, surge una diferencia con el cálculo efectuado por dicho ente respecto del monto de la deuda a cancelar por el deudor. Así a criterio de este Tribunal de Cuentas, la deuda asciende a la suma de \$ 521,81 en lugar de a \$ 371,07. Lo cual representa un 10,33% sobre el total de la deuda.

ARTICULO 3º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Administrador del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Nº S-1447/10, caratulado: "SANCHEZ JUAN DOMINGO S/ PAGO TOTAL DE DEUDA".

ARTICULO 4º.- Notificar en el Organismo, al Auditor Fiscal Interviniente y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 5º.- REGISTRAR, NOTIFICAR y PUBLICAR la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 473

22-12-11

VISTO: El Decreto Provincial Nº 2816/11 y la Nota S/N de fecha 15 de diciembre de 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto Provincial Nº 2816/11 se autoriza la rennovación de la adscripción del agente Hugo Rodolfo CEUNINCK.

Que el citado agente, solicita se autorice el usufructo de la licencia anual ordinaria entre el 27/12/2011 al 30/01/2012, ambas fechas inclusive.

Que de acuerdo a lo establecido por medio del Artículo 4º del Decreto Nacional Nº 3413/79, las licencias y franquicias deberán ser acordadas por las autoridades competentes del organismo en el cual se desempeña.

Que ha tomado intervención el Sr. Secretario Legal sin indicar objeciones.

Que no existen razones de servicio que impidan autorizar lo solicitado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias y el Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Autorizar el usufructo de la licencia anual ordinaria al agente adscripto Hugo Rodolfo CEUNINCK, entre los días 27/12/2011 y 30/01/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar al agente y a la D.G.A.FyD. de la Secretaría General de Gobierno, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 474

22-12-11

VISTO: La Causa Nº 26918/2011, caratula "SOLARI, EDUARDO ANIBAL P/ AMENAZAS Y DEFRAUDACION - DTE: BURGOS, MARIANA DEL ROSARIO", de trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur y

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal de Cuentas provincial se encuentra constituido como Actor Civil en la Causa penal citada, en cuyo marco se libró una cédula de notificación recibida el 15 de diciembre de 2011.

Que dicho instrumento notifica el dictado de una resolución, que en sus partes pertinentes dice: "Ushuaia, 13 de diciembre de 2011. IV. Dispáñese la realización de pericia contable por parte del Perito Contador del Poder Judicial CPN Daniel Rulihaut, tendiente a establecer lo siguiente: a) Si de la documentación obrante en la causa puede constatar la existencia de pagos por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios ZONA NORTE en concepto de realización de obras de ampliación de los instalaciones del cuartel de bomberos durante los ejercicios 2010 y 2011, con indicación en su casa del concepto, montos, fechas y conratista beneficiada. b) Determine si los pagos detallados en el punto a) se corresponden con los montos y plazos que surgen del 'Convenio de Construcción y ampliación del cuartel, mejoras edilicias y materiales' que en copia abra a fs. 411/412. c) Verifique de las registros contables y documentales, las formas en que dichas cancelaciones habrían tenido lugar (cheques, efectivo u otro medio de pago). d) Verifique la evolución del detalle de inventarios relativos a la adquisición de equipos estructurales desde el ejercicio 2006 a la fecha de acuerdo a lo que surge de los balances anuales y de las rendiciones de cuantías que efectuara la Asociación de Bomberos Voluntarios ZONA NORTE ante los organismos de contralor correspondientes. e) Verifique si se hubo cancelado una factura de fecha 12/07/2011 por el valor de \$ 115.197 a la firma 'Proveduría Industrial' y detalle en su casa, concepto y forma de pago de lo adquirido mediante la misma. f) coteje las rendiciones de cuentas formuladas por la Asociación de Bomberos Voluntarios ZONA NORTE ante la Municipalidad de Ushuaia y ante Defensa Civil (Ley 736) a los fines de constatar si la factura B nº 0001-00009627 por el valor de \$ 10.595 de la firma DIT Ushuaia de Luis A Firpa se encuentra rendida en ambas. g) Establezca el total abonado por la Asociación de Bomberos Voluntarios ZONA NORTE en concepto de adquisición del vehículo marco KIA K 2700 a la empresa PATAGONIA AUTOMOTORES durante el ejercicio 2010, con detalle de forma y oportunidades de pago. h) Establezca si existe registros contables u otras constancias sobre la adquisición y/o venta de un vehículo marca Peugeot Boxer (descrito por el testigo De Simone a fs. 404/6), si existen registros contables y/o constancia de pago respecto del rodado JEEP NISSAN PATROL que se describe como UNIDAD 30 del

inventario que en copia luce a fs. 402/3 y sobre la adquisición del camión de valor \$10.000 detallado en el libro de actas de comisión directiva. i) Indique toda otra circunstancia que a criterio del perito resulte de interés para la pesquisa. A tal fin, notifíquese a las partes para que hagan valer sus derechos en los términos del art. 232 del CPP y oportunamente, dése intervención al referido profesional, autorizando al mismo a concurrir ante organismos públicos e instituciones las fines del cumplimiento de la pericia encomendada. FDO: JAVIER de GAMAS SOLER, Juez de Instrucción. Ante mí: ANDRÉS FANELLI, Secretario de Instrucción".

Que a los efectos de ejercer el control de la prueba pericial ordenada, procede designar como consultor técnico de parte de este Organismo, al C.P. Facundo Antonio POLOPOLI, D.N.I. Nº 29.193.091, en orden a lo previsto por la Resolución Plenaria Nº 300/2011 y su Anexo I.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto en virtud a las facultades conferidas a este Tribunal de Cuentas por los artículos art. 2º inciso g), 26 inciso i), 27 y 51 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Designar Consultor Técnico de Parte en la Causa Nº 26918/2011, caratulada "SOLARI, EDUARDO ANIBAL P/ AMENAZAS Y DEFRAUDACION - DTE: BURGOS, MARIANA DEL ROSARIO", de trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 el Distrito Judicial Sur, al C.P. Facundo Antonio PALOPOLI, D.N.I. Nº 29.192.091.

ARTICULO 2º: Notificar en la sede del Organismo al C.P. Facundo Antonio PALOPOLI, D.N.I. Nº 29.192.091 y a la Secretaría Legal con copia certificada de la presente Resolución, a los efectos de que se lleven a cabo los trámites pertinentes ante el Juzgado de Instrucción interviniente.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, publicar, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 475

22-12-11

VISTO: el Expediente del Registro de este Tribunal de Cuentas Letra T.C.P.-SP, Nº 300 del Año 2011 caratulado: "S/ JUICIO DE RESIDENCIA SRA. SILVA RITA ZATZ", y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/14 se agrega la presentación efectuada por la funcionaria saliente Sra. Silvia Rita ZATZ, por medio de la cual solicita se dé inicio a su Juicio de Residencia, adjuntando copia del Decreto Nº 1448 de fecha 04 de junio de 2010, por medio del cual se la designara como Subsecretaria de Políticas de la Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el 11 de agosto de 2011.

Que con fecha 14 de septiembre de 2011 se designó por medio de Resolución Plenaria Nº 307/2011 a la Auditora Fiscal C.P. Marina IGLESIAS a cargo de la investigación dispuesta en la Resolución Plenaria Nº 51/2004, designándose asimismo al Dr. Gustavo MARCHESI para coordinar dicha tarea con la Prosecretaría Legal, a efectos de procurar el seguimiento de los oficios a las distintas dependencias.

Que a fs. 116/120 se agrega Informe Contable Nº 514/11 Letra T.C.P. emitido por la Auditora interviniente, quien indica que se adjunta copia de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en los periódicos.

Que asimismo informa que se remitieron oficios a los Juzgados de la Provincia y a la Fiscalía de Estado, encontrándose pendientes a la fecha de la emisión del informe las respuestas del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del DJS y el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia del Distrito Judicial Norte.

Que a su vez la Auditora interviniente manifiesta que se han circularizado a los Secretarios Contable y Legal de este Tribunal de Cuentas, así como al Prosecretario Contable, Auditores Fiscales, al Cuerpo de Abogados, Auditores

Fiscales del Organismo y Contaduría General de la Provincia.

Que los Auditores Fiscales circularizados informan no poseer causas, Investigaciones o sumarios que involucren patrimonialmente al funcionario sometido a Juicio de Residencia.

Que el Contador General de la Provincia no informa si la Sra. Silvia Rita ZATZ ha sido responsable de fondos permanentes, Anticipos con cargo a rendir, Cajas Chicas ni Cuentas Corrientes Bancarias.

Que obra respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, respondiendo en forma negativa.

Que la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable Informa que en forma posterior al Informe Contable Nº 514/11, ingresó respuesta de la Contaduría General, y que la misma no modifica la opinión vertida en el Informe.

Que luego de detallar el procedimiento llevado a cabo, la Auditora Fiscal CP Marina Magalí IGLESIAS, concluye que en su opinión, la documentación agregada en el expediente, no se detectó investigación o tramitación alguna que involucre patrimonialmente por parte del funcionario sometido a Juicio de Residencia por el período mencionado.

Que en virtud de los elementos colectados en el marco de los presentes actuados, resultan reunidos los elementos necesarios para dar por concluido el trámite de Juicio de Residencia iniciado por la Sra. Silvia Rita ZATZ.

Que no obstante ello, corresponde hacerle saber a la funcionaria saliente que en caso de que de las respuestas a los oficios faltantes o se determinase en el futuro la configuración de perjuicio fiscal imputable a su persona, será pasible de la acción en el marco del plazo del artículo 75 de la Ley Nº 50.

Que en mérito a lo expuesto, corresponde emitir el presente acto administrativo en orden a las facultades conferidas a este Tribunal de Cuentas por medio del Art. 27 y ctes. de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dar por concluido el procedimiento de Juicio de Residencia suscitado a la Sra. Silvia Rita ZATZ por el cargo Subsecretaria de Políticas de la Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, desde el 04 de junio de 2010 y hasta el 11 de agosto de 2011.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Informe Nº 514/11 Letra T.C.P. de fecha 14 de noviembre de 2011 de la Auditora Fiscal C.P. Marina Magalí IGLESIAS, toda vez que del mismo surge que no se colectan elementos que hagan presumir la existencia de perjuicio fiscal en el desempeño de la Sra. Silvia Rita ZATZ en el cargo y período detallado.

ARTICULO 3º.- Hacer saber a la funcionaria saliente que en caso de que de las respuestas a los oficios pendientes y/o investigaciones surja algún elemento que denote la existencia de un perjuicio fiscal que le sea imputable, será pasible de la acción en el marco de las pautas temporales establecidas por el Art. 75 de la Ley Provincial Nº 50.

ARTÍCULO 4º.- Informar de todo lo actuado a la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia prevista en los arts. 5 y 6 de la Ley Provincial 264, modificada por su similar 619, con copia íntegra y certificada de las actuaciones.

ARTÍCULO 5º.- Notificar, con copia certificada del presente a la Sra. Silvia Rita ZATZ, a la Secretaría Contable, al Auditor Fiscal interviniente y al Registro de Juicios de Residencia e investigaciones especiales a cargo de la Prosecretaría Contable.

ARTÍCULO 6º.- Por Secretaría del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se realizará la tramitación administrativa de rigor.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 476

22-12-11

VISTO: El Expediente del Registro de este Tribunal de Cuentas de la Provincia, Letra T.C.P. V.L. Nº 398, año 2008, caratulado "S/ CAUSA Nº 22481/2008 RIOS, MARIA FABIANA Y OLIVERO, RAUL EDUARDO S/ DCIA ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA D.J.S." y

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal de Cuentas provincial se encuentra constituido como Actor Civil en la Causa penal Nº 22481/2008 caratulada "RIOS, MARIA FABIANA Y OLIVERO, RAUL EDUARDO S / DCIA", de trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S.

Que en fecha 7 de diciembre de 2011, el Juez de Instrucción interviniente dictó el resolutorio que dispone: "...II) Téngase por formulado el requerimiento fiscal de elevación a juicio y notifíquese mediante cédula al octor civil en los términos del art. 81 del CPPP. Fdo. JAVIER DE GAMAS SOLER, Juez de Instrucción".

Que la Resolución Plenaria Nº 288/2010, del 8 de octubre de 2010, había determinado la concreción de demanda por parte de este Tribunal de Cuentas provincial, contra Elsa Inés BUGNEST de GUALDESI; Germán Horacio GUALDESI; Horacio Fernando MEDONE; Juan Carlos PACHECO, Ana Delfina ESPARZA, Alfredo Raúl IGLESIAS, Raúl Horacio BERRONE, Horacio Héctor SOSA y María Lorenza MORENO, por el monto de pesos dos millones cuatrocientos treinta y un mil noventa y nueve con cincuenta y tres centavos (\$ 2.431.099,53).

Que presentada la demanda civil, elevada la Causa, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, reanotuló la Causa bajo el Nº 1368/11 y como "Berrone, Raúl Horacio y otros s/ Peculado".

Que conforme lo expresa el requerimiento de elevación a juicio la causa Nº 22481/2008 caratulada "RIOS, MARIA FABIANA Y OLIVERO, RAUL EDUARDO S / DCIA" continuó tramitando por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., pues se encontraba investigando "...la conducta de dos imputadas dentro del marco de una hipótesis delictiva que, a su vez, forma parte del objeto procesal..." de la Causa Nº 1368/11 caratulada "Berrone, Raúl Horacio y otras s/ Peculado".

Que de acuerdo con dicho requerimiento fiscal "...la etapa instructoria se halla agotada, y teniendo en cuenta las pruebas producidas durante la misma" (...) "permite el cabal conocimiento de la sustracción de fondos públicos por un total de \$ 7.703.725, llevada a cabo por distintos funcionarios con la connivencia de terceros responsables estas de la firma "GUALDESI HNOS". Ello, mediante la tramitación fraudulenta del Expte. Administrativo Nº 20.351 -ME-2006 en el que se incorporó documentación falsa para opacitar una deuda - inexistente- de parte del Estado Provincial".

Que se califica legalmente de forma primaria las conductas del señor Isidro Omar FERREYRA y del C.P.N. Emilio Enrique MAY, como partícipes necesarios en el delito de Peculado (art. 261 y 45 del Cód. Penal) y, de forma alternativa al señor FERREYRA, por la Falsificación Ideológica de Documento Público y Encubrimiento en concurso ideal (arts. 54; 277 inc. 1º apartado a y/o b, e inciso 2º apartado d y 293 del Código Penal), mientras que al contador MAY, Malversación Culposa de Caudales Públicos (art. 262 del Código Penal).

Que tomó intervención la Secretaría Legal de este Tribunal, ocasión en que se emitieron los Informes Legales Nº 442/2011 Letra T.C.P. C.A. y Nº 445/2011, Letra T.C.P. S.L., que se comparten.

Que en función de los hechos investigados, expresados en el requerimiento de elevación a juicio y lo dispuesto por el art. 81 del Código Procesal Penal provincial, en la Causa Nº 22481/2008 caratulada "RIOS, MARIA FABIANA Y OLIVERO, RAUL EDUARDO S / DCIA", cuyo trámite continuó por ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S. y el carácter de Actor Civil ya asumido por este Órgano de Control, se encuentran reunidos los recaudos normativos para formalizar la demanda civil en sede penal, respecto de los imputados Isidro Omar FERREYRA y Emilio Enrique MAY.

Que sin perjuicio del monto establecido por el señor Fiscal interviniente en la suma de pesos siete millones setecientos tres mil seiscientos veinticinco (\$ 7.703.725), cabe recordar que en aquella primera oportunidad, se concretó demanda contra los señores Elsa Inés BUGNEST de GUALDESI; Germán Horacio GUALDESI; Horacio Fernando MEDONE; Juan Carlos PACHECO; Ana Delfina ESPARZA; Alfredo Raúl IGLESIAS; Raúl Horacio BERRONE; Horacio Héctor SOSA y María Lorenza MORENO, atribuyéndoles responsabilidad solidaria, por la suma total de pesos dos millones cuatrocientos treinta y un mil noventa y nueve con cincuenta y tres centavos (\$ 2.431.099,53).

Dicho importe fue determinado como el perjuicio fiscal efectivamente materializado, a través del Informe Contable Nº 576/10, Letra TCP, que concretamente concluyó que: "En virtud de lo expuesto en el punto VI-1- precedente y en el punto V- 2- precedente, se desprende que el monto del presunto perjuicio fiscal queda configurada por el pago de las letras de tesorería Nº 5489, 5490, Nº 5491; Nº 5492 y Nº 5493, las cuales totalizan la suma de \$ 2.431.099,53".

Que en atención a que no surgen del requerimiento de elevación a juicio, elementos que permitan inferir que hayan existido nuevos pagos de letras de tesorería, de modo de acrecentar el monto del perjuicio fiscal, la acción en cuestión debe ser ampliada en esta ocasión contra el C.P.N. Emilio Enrique MAY y del señor Omar Isidro FERREYRA, extendiéndoles la responsabilidad solidaria respecto de los mismos hechos y, por consiguiente, del mismo daño patrimonial.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acio en virtud a las facultades conferidas a este Tribunal de Cuentas por los artículos art. 2º inciso g), 26 inciso i); 27 y 51 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS**RESUELVE:**

ARTICULO 1º: Encomendar a la Secretaría Legal, la concreción de la demanda civil en los términos del artículo 81 del Código Procesal Penal de la provincia, en representación de este Tribunal, ampliándola contra el señor Isidro Omar FERREYRA, DNI Nº 14.069.189 y el C.P.N. Emilio Enrique MAY, DNI Nº 11.489.905, por el monto del perjuicio determinado en la suma de pesos dos millones cuatrocientos treinta y un mil noventa y nueve con cincuenta y tres centavos (\$ 2.431.099,53).

ARTICULO 2º: Notificar a Secretaría Legal con copia certificada de la presente Resolución.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, publicar, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 477

22-12-11

VISTO: El Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "C" Nº 1409 del año 2010, caratulado: "CORBELLA AIDA JOSEFINA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACIÓN"

CONSIDERANDO:

Que en el marco de las citadas actuaciones tramitó el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Refinanciación Ley provincial Nº 783, suscripto entre la Sra. CORBELLA Aida Josefina en su carácter de deudora, y el Fondo Residual Ley Provincial Nº 478, con fecha 15 de abril de 2010.

Que la deudora manifestó su adhesión al Régimen de Liquidación y Regulación de Deudas estipulado en la Ley Provincial Nº 783, respecto del crédito originado en la Línea 9410 Operación Nº 000897600 y Línea 9413 Operación Nº 000948800 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, los cuales al momento de ser transferido al Fondo Residual ascendían a la suma de Pesos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta con 47/100 (\$ 49.840,47) y Pesos diecinueve mil noventa y tres con 89/100 (\$ 19.093,89) respectivamente.

Que en el marco de dicho acuerdo la deudora reconoció mantener con el Fondo Residual, una deuda actualizada, con la aplicación del 1% mensual directo desde la fecha de entrada en mora en la entidad bancaria y hasta el acogimiento a este régimen, que ascendía a un monto total a refinanciar de \$ 226.795,33 (PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 33/100).

Que a fs. 73/75 se agrega Informe Legal Nº 166/2010 Letra TCP-CA emitido por el Dr. Gustavo MARCHESE, quien luego de analizar los actuados concluyó que, se había dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 72/02, sin perjuicio de las consideraciones que pudiera efectuar la Vocalía de Auditoría respecto a la liquidación practicada y a la tasa de interés aplicada.

Que a fs. 84/93 se anuda el Informe Contable Nº 186/2011 del CP Marco FUENTES IBARRA, quien luego de analizar los cálculos realizados por el Fondo Residual, arribó a las siguientes conclusiones:

"1) Por las operaciones Nº 9410-000887600 y Nº 9413-000948800, al momento de la refinanciación de la deuda NO correspondió la aplicación de lo prescripto en el Acuerdo Plenario Nº 1244, el cual menciona en su Artículo 1º: "...Aplicar el régimen de posificación establecido por las leyes Nacionales...". Lo anterior por tratarse de operaciones originalmente pactados en Pesos.

2) De la revisión de la documentación efectuada por esta instancia surge que, el deudor se encontraba dentro del régimen de regularización de deudas dispuesto en la Ley Provincial Nº 783, tomando como consunción de acogimiento los beneficios de la ley, la nota presentada por el mismo obrante a fs. 45, de fecha 15/04/2010.

3) Del análisis de los cálculos realizados por esta instancia, conforme los pautas establecidas en el art. 2 de la Ley Provincial Nº 783, surgen los siguientes montos para cada una de las operaciones: Op. Nº 9410-000887600 la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 97/100 (\$ 147.992,97) y por la Op. Nº 9413-000948800 la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 03/100 (\$ 57.203,03), no surgiendo diferencia, en esta etapa, respecto de los cálculos realizados por el Fondo Residual Ley Nº 478.

4) Del análisis de las actuaciones surge, a fojas 42, sentencia judicial de fecha 16/09/2003, la cual según lo expresado en la cláusula TERCERA del convenio de reconocimiento de deuda, obrante a fs. 58/59, la misma correspondería a la operación Nº 9410-000887600. En virtud de lo anterior, para dicha operación, correspondería la aplicación de lo prescripto en el artículo Nº 7 de la Ley Provincial Nº 783, el cual menciona que: "...Podrán acogerse a los beneficios de la presente ley los deudores del Fondo Residual, Ley 478, que se encuentren en mora, con juicios iniciados o no, tanto por el Banco de Tierra del Fuego como por el Fondo Residual, Ley 478, incluidos aquellos en que haya recaído sentencia. En estos últimos se tomará como base para la refinanciación la liquidación de la deuda conforme las pautas dadas por la sentencia dictado en cada caso. En el supuesto de superar la liquidación un porcentaje mayor al treinta por ciento (30 %) de la que corresponde al aplicar los lineamientos del artículo 2º, se usará dicho incremento como tope".

Se verifica que del análisis de los cálculos de intereses realizados por esta instancia y posteriormente comparados con los realizados por el Fondo Residual Ley Nº 478 a fs. 50, surge una diferencia en ~~impuestos~~ entre ambos importes, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100 (\$ 25.243,62. En virtud de lo anterior, se deja constancia que el monto total arrojado, según esta instancia de control, asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 68/100 (\$ 114.263,68), y el monto según el organismo fiduciario asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 30/100 (\$ 169.507,03). Según se pudo apreciar del análisis de los cálculos realizados por el Fondo Residual Ley Nº 478, en la planilla obrante a fs. 50, se detectaron algunas errores en lo carga de los datos correspondientes a las fechas y tasas. Se incorpora papel de trabajo a fs. 83, con diferencias en los días de mora y tasas consideradas.

5) En virtud de lo dispuesto precedentemente, esta instancia determinó que el monto total a refinanciar por ambas operaciones asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 71/100 (\$ 201.551,71). Se adjunta como ANEXO I el cuadro de marcha del sistema francés, desarrollando con el monto determinado por esta instancia de control.

6) El deudor ha refinanciado su deuda en el marco de la Ley Provincial Nº 783, siendo el plazo de financiación de diez (10) años, según lo dispuesto por el artículo 2 de la mencionada ley, surgiendo diferencias significativas respecto del cálculo realizado por el Fondo Residual Ley Nº 478...

Que a fs. 94 se agrega la Nota Interna Nº 1961/11 por la que la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable CPN María Laura PERZ TORRE, indica al Vocal de Auditoría que comparte el análisis efectuado por el Auditor Interviniente.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 783 y en el artículo 27 y concordantes de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Dar por verificado el Convenio de "Reconocimiento de deuda y refinanciación Ley Provincial Nº 783" celebrado entre el FONDO RESIDUAL LEY 478 y la Sra. CORBELL Aída Josefina, respecto del crédito originado en la Línea 9410 Operación Nº 000887600 y Línea 9413 Operación Nº 000948800, del Banco de

la Provincia de Tierra del Fuego.

ARTICULO 2º.- Indicar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478 que en razón del análisis formulado por el Auditor Fiscal en el Informe Contable Nº 186/2011 Letra: T.C.P.-FDO. RESIDUAL corresponde se reliquide la deuda mantenida por la Sra. Aída Josefina CORBELL A y readecue el monto del convenio obrante a fs. 58/59, en caso de así corresponder.

ARTICULO 3º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros notificar a la Administradora del Fondo Residual Ley 478, con remisión del Expediente del registro del Fondo Residual Ley Nº 478 Letra "C" Nº 1409 del año 2010, caratulado: "CORBELL AIDA JOSEFINA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y REFINANCIACION", así como al Auditor Interviniente y a la Secretaría Legal del Organismo.

ARTICULO 4º.- Registrar. Comunicar. Publicar, cumplido ello archivar.-

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 478

28-12-11

VISTO:

El expediente del registro de la Gobernación Nº 3830 SG/2011, caratulado: "S/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PRINCIPAL DE LA PROVINCIA"; y,

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones fueron intervenidas por la Auditora Fiscal C.P. Lorena RETAMAR, quien emite el Acta de Constatación Nº 114/2011 (fs. 448) formulando en ella las siguientes observaciones:

" 1. Verificado el de Acto Administrativo obrante a fojas 131/432 de las actuaciones y como ya se advirtiera oportunamente en Informe Contable 334/2011, se concluye:

- Se constata que en el artículo 1º, el mismo autoriza la contratación de la firma Námade Soft S.R.L., por la suma de pesos \$ 12.900.000,00 en concepto de mantenimiento, nuevos desarrollos, capacitaciones, transferencia tecnológica y adquisición de licencias y soporte sin establecer en el mismo el lapsa temporal de la presente contratación (fecha de inicio, plazo de duración y finalización de la misma).
- En relación a lo establecido en los artículos 2º, se remite a lo expuesto posteriormente, en relación al análisis de la Cláusula Vigésimo Tercera- Anticipo Financiero.
- En relación a lo establecido en el artículo 3º, se observa la falta de identificación y/o referencia inequívoca, en el artículo 1º del Acta Administrativa, del Proyecto de Contrato a suscribir.

2. Extemporaneidad en la tramitación de las actuaciones, cada vez que el Contrato de Mantenimiento Nº 14.507, ratificado por Decreto Provincial Nº 1812/10 venció el 14-05-11.

3. No obra en las actuaciones, presunta oficial y/o documental de respaldo de estimaciones o cálculos realizadas, a efectos de determinar la conveniencia del precio establecido en el proyecto de contrato. Indicando asimismo que en Nata 331/11, obrante a fs. 112/113, el Secretario de Informática y Telecomunicaciones concluye "Todos los puntos ante puestos hacen que sea un valor relativamente razonable..." (el resultado no corresponde al original).

4. Atento a lo expresado en el primer párrafo del Informe Nº 2739/11, letra: Auditoría Interna, de fecha 02-06-11, a fs. 233, suscripta por CP Adalberto José Santos, en lo que respecta a la imposibilidad de verificar las cuestiones técnicas específicas relacionadas con el efectiva cumplimiento contractual, en los aspectos de desarrollo, implementación, mantenimiento y transferencia tecnológica de programas Informáticos, toda vez que dicha dependencia carece de personal técnico idónea en la materia para llevar a cabo esta tarea, y lo resuelto en el artículo 1º de Resolución Plenaria Nº

306/2010, de fecha 25/10/2010, se observa el incumplimiento a lo dispuesto en la Ley Provincial N° 495, que establece la necesidad, por parte de la Auditoría Interna, de realizar un control integral e integrado.

5. Cláusula Primera – Objeto del proyecto de contrata, obrante a fs. 353/354: En concordancia con lo indicado por la Dra. Leila Eleonara GIADÁS, en su Informe S.L. y T. N° 1065/11, obrante a fs. 172/177, “nas encontramos frente a un contrato de **objeto múltiple**, pues las partes convendrían contratar la realización del mantenimiento de productos y servicios, de nuevos desarrollos, de la transferencia tecnológica necesaria para el logro de una mayor autonomía por parte de la Provincia...” Por lo antes expuesto y compartiendo lo expresado en Informe Legal 295/11 se observo la falta de una adecuada descripción del objeto, que delimite claramente los tiempos propios del cumplimiento de la obligación y los modos de ejecución de la misma de forma de poder dar un contenido propio al objeto del contrato. La pobre descripción del objeto del contrato en cuanto al modo y tiempo generará discusiones en cuanto al correcto o incorrecto cumplimiento de las obligaciones y sobre qué aspectos debe guardarse el deber de confidencialidad. Lo anterior, también a efectos de evitar inconvenientes al momento de practicar los controles necesarios por parte de la Secretaría, y obtener la conformidad de cada uno de los productos y servicios contratados.- Compartiendo plenamente y reiterando lo manifestado por el Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, en su Informe 295/2011, en cuanto a la necesidad de que el objeto de un contrato de transferencia de tecnología y los modos y tiempos de ejecución estén claramente delimitados para evitar cuestiones relacionadas con los derechos de las partes y ello por el carácter difuso del bien objeto del mismo: la tecnología.

6. En relación con el punto anterior y siguiendo el criterio vertido por el área Legal de este Órgano de Control, en Informe Legal 295/2011, suscripto por el Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, obrante a fs. 438/447, se observa con respecto al objeto y teniendo en cuenta el carácter difuso que tiene la definición de know how la falta de inclusión de una cláusula que sea lo suficientemente abarcativa, no solo en la descripción del objeto, sino en todos los medios que se dispondrán para la transmisión del know how, indicando el letrado que se deberá establecer, entre ellos: “1. El entrenamiento de personal. Se debe dejar aclarado minuciosamente en qué debe consistir el mismo y qué grado de capacitación el licenciatario asegura que se alcanzará y en qué tiempo. 2. La existencia de manuales, documentos, y soportes electrónicos. 3. Descripción de las instalaciones necesarias que debe tener el cesionario para poder utilizar el know how. Puede suceder que la tecnología del licenciatario no esté a la altura del conocimiento que se pretende recibir y sea obsoleta, y que el contrato de transferencia de tecnología sea de cumplimiento imposible. 4. Asistencia técnica posterior. Como explicamos antes, la información es dinámica y no estática. Puede suceder que las plataformas sobre las que se instala la tecnología se modifiquen y haya que hacer adaptaciones o modificaciones, las que por su complejidad pueden requerir de una asistencia técnica posterior. Es preciso definir en qué consistirá esta asistencia técnica posterior y cuántos personas estarán asignadas a ello, durante qué plazos y cuál será el alcance de las obligaciones, las que pueden llegar hasta el aporte de maquinarios, materias primas, materiales semielaborados, etc.

5. Garantías, para el supuesto que los objetivos en vista no se cumplan y se deban analizar otras alternativas. Pueden existir diversas razones para que los objetivos propuestos por las partes no se logren y antes de que se den inicio a denuncias de incumplimiento de contrato es bueno haber analizado qué puede suceder si la tecnología transferida no cumple sus fines respecto del resultado tenido en vista por las partes. También pueden existir garantías para el caso de que el know how haya sido conseguido ilícitamente y se prohíba su utilización. Si bien el tercero cesionario en este caso sería de buena fe, la discusión relativa a si puede o no mantenerse en posesión del know how puede no ser beneficiosa para el cesionario. Asimismo la falta de asistencia en el futuro por prohibición judicial al

cedente respecto de la utilización del know how puede significar la falta de interés en continuar el contrato. 6. Servicio de actualización del know how, en tanto éste pierde rápidamente su actualidad y deviene obsoleto. Quien provee de tecnología normalmente se ocupa de seguir creando tecnología por lo que es fundamental la actualización de la misma y que exista una obligación al respecto.

7. Cláusula Sexta-Capacitación: En relación con el punto anterior y lo establecido en la misma, se observa la falta de definición en forma clara, precisa y anticipada, de la totalidad de productos y servicios que constituyen el objeto de la contratación, a efectos de contar con la definición de un objeto cierto y determinado.

8. No obra en las actuaciones, documentación de respaldo de las estimaciones efectuadas y/o estadísticas utilizadas por la Secretaría de Informática, a efectos de arribar al cálculo máximo de horas de requerimiento mensual, (3.400) a efectos de asegurar la mínima cantidad de horas ociosas por mes. Debe quedar clara que estamos hablando de capacidad máxima instalada, pero esto no significa que todos los meses sea necesaria y exigible la utilización de la totalidad de las mismas. Ahora bien, independientemente de ello, “LA PROVINCIA” sí deberá abonar todos los meses dicho costo fijo.

9. En relación con la observación del punto anterior, resulta inaceptable la situación planteada en el ANEXO I, punto 3.2 MODALIDAD DE UTILIZACIÓN DE HORAS, CONTROL Y PAGO, SEGUNDO ESQUEMA, dada que todos los meses se abona el importe correspondiente a la totalidad de horas y por otro lado se está previendo la posibilidad de que la empresa no pueda cubrir con dicho requerimiento en el momento que la Provincia lo requiera.

10. Cláusula Décimo Primera – Obligaciones, Responsabilidades y Procedimientos: Con respecto a lo estipulado en el último párrafo, se comparte lo expresado en Informe Legal N° 246/2011, obrante a fs. 311 a 333, suscripto por el Sr. Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, el que indica: “...lo que estimo impropio en función de la posibilidad de que no se llegue o un acuerdo al respecto ante un problema puntual, que podría ocurrir la responsabilidad solidaria del Estado provincial frente a terceros” razón por la cual se observa la falta de adecuación total de la Cláusula mencionada, subsistiendo cuestiones a definir con posterioridad.

11. Cláusula Décimo Sexta – Rescisión del Contrato: Lo establecido en el primer párrafo de la misma, en relación a: “las partes tendrán la facultad de rescindir el presente contrato en cualquier momento, previa comunicación fehaciente cursada con una antelación mínima de noventa (90) días” se contraponen con la naturaleza del servicio contratado, especialmente, en relación con el objeto de la Transferencia Tecnológica pretendida, máxime de acuerdo a lo informado por el Secretario de Informática en Nota N° 331/11, obrante a fs. 112/113, sexto párrafo, constituye “un proceso a larga plazo, en el que se utiliza un procedimiento planeado, sistemático, organizado...”, y en Nota N° 214/11 Letra: S.I. Y T., obrante a fs. 2/4 segundo párrafo, punto 1, en la cual manifiesta que aún restan 2 años a efectos de lograr la salida de la dependencia absoluta con la empresa prestadora, y es con la misma empresa que se debería desarrollar.

12. Cláusula Décimo Novena– Disponibilidad de Personal Técnico: Si bien en Nota obrante a fs. 37/38, el Sr. Mariana Martínez, informa una nómina parcial del personal involucrado en la prestación del servicio de la empresa al Gobierno de Tierra del Fuego, no se especifica en el proyecto de Contrato, claramente y con exactitud, cantidad y nivel de capacitación del personal “capacitador” que la empresa pondrá a disposición de “LA PROVINCIA”. Asimismo, no se especifica el equipamiento tecnológico que proveerá “LA EMPRESA” a efectos de la debida prestación de los servicios.

13. De igual forma, en relación al personal de la Administración que recibirá la capacitación y/o transferencia tecnológica objeto de la

contratación, si bien se hace mención a los mismos en el Anexo I, punto 1.1.1.2 Recursos Humanos que dice: "LA PROVINCIA" se compromete a designar cuatro (4) agentes, cuya competencia será definida para los distintos proyectos convenidos entre "LA PROVINCIA" y "LA EMPRESA". Para ello, "LA PROVINCIA" afectará dos (2) programadores y dos (2) contadores cuyo perfil y función será fijado para participar activamente en los proyectos convenidos" aún no se ha identificado al mismo, no quedando claro si en la actualidad dicho personal se encuentra prestando servicios o se trata de personal que se incorporará a tal efecto.

Por último, en relación a este punto se considera oportuno, recomendar, la instrumentación de algún medio y/o mecanismo tendiente a asegurar una permanencia mínima en el puesto de trabajo de cada agente capacitado que permita a su vez, transferir los conocimientos adquiridos.

14. Cláusula Veésima Segunda – Readecuación de Cláusulas: Si bien se ha precedido o limitar las cuestiones sujetas a readecuación, aun subsisten cuestiones a definir con posterioridad, razón por la cual se reitera lo expresado en la observación 10.

15. Cláusula Vigésima Tercera- Anticipo Financiero: Se observa la inclusión de la misma, ya que ello incumple con la normativa vigente en relación a este tema, Decreto Provincial 674/11, artículo 34, punto 96-Plazo para el Pago.

Por último, se considera importantísimo destacar el nuevo aporte del Informe Legal 295/11, bajo el título CONCLUSIÓN, en lo que respecta a la falta de inclusión en el texto del instrumento, de los detalles en torno a cómo deberá llevarse a cabo la registración ante el pertinente registro de la propiedad intelectual, de todos los programas fuente (o códigos fuente), cuya titularidad depiera el Estado provincial, en procura de su adecuada tutela, teniendo en cuenta que se están pagando sumas millonarias por la adquisición de bienes registrables, cuya oponibilidad a terceros debe quedar cristalizada al momento en que se efectúen los pagos correspondientes."

Que a fs. 598 luce la Nota Nº 1181/11-Letra: S.I.T., suscripta por Sr. Secretario de Informática y Telecomunicaciones, quien efectúa su cargo a las observaciones formuladas, los que son ratados por la auditora obrante en el Informe Contable Nº 472/11 (fs. 610), concluyendo en mantener las observaciones 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 11º, 12º y 13º del Acta de Constatación de Control Previo Nº 614/11; y levantar los reparos indicados en los puntos 1º, 9º y 15º; sugiriendo además, respecto de las observaciones en los puntos 5º, 6º, 10º, 14º y 16º, dar intervención al servicio jurídico o este organismo de control.

Que por lo antedicho, a fs. 630 luce el Informe Legal Nº 386/11, el que se encuentra redactado en los siguientes términos:

"OBSERVACIONES 5 Y 6

"5. Cláusula Primera – Objeto del proyecto de contrato, obrante a fs. 353/354: En concordancia con lo indicado por la Dra. Leita Eleonora MADÁ, en su Informe S.L. y T. Nº 1065/11, 'nos encontramos frente a un contrato de objeto múltiple, pues las partes convendrán contratar la realización del mantenimiento de productos y servicios, de nuevos desarrollos, de la transferencia tecnológica necesaria para el logro de una mayor autonomía por parte de la Provincia...' Por lo antes expuesto y compartiendo lo expresado en el Informe Legal 295/11 se observa la falta de una adecuada descripción del objeto del contrato, al no haberse fijado los tiempos propios del cumplimiento de la obligación y los modos de ejecución de la misma de forma de poder dar un contenido propio al objeto del contrato. La pobre descripción del objeto del contrato en cuanto al modo y tiempo generará discusiones en cuanto al correcto o incorrecto cumplimiento de las obligaciones y sobre qué aspectos debe guardarse el deber de confidencialidad. Lo anterior, también a efectos de evitar inconvenientes al momento de practicar los controles necesarios por parte de la Secretaría, y obtener la conformidad de cada una de los productos y servicios contratados.- Compartiendo plenamente y reiterando lo manifestado (...) en su Informe 295/2011, en cuanto a la necesidad de que el objeto de un contrato de transferencia de tecnología y los todos y tiempos de ejecución estén

claramente delimitados para evitar cuestiones relacionadas con los derechos de las partes y ello por el carácter difuso del bien objeto del mismo: la tecnología.

6. En relación con el punto anterior y siguiendo el criterio vertido por el área Legal de este Órgano de Control, en Informe Legal 295/2011 (...) obrante a fs. 438/447, se observa con respecto al objeto y teniendo en cuenta el carácter difuso que tiene la definición del know how la falta de inclusión de una cláusula que sea lo suficientemente abarcativa, no solo en la descripción del objeto, sino en todos los medios que se dispondrán para la transmisión del know how, indicando el letrado que se deberá establecer, entre ellos: '1. El entrenamiento de personal. Se debe dejar aclarado minuciosamente en qué debe consistir el mismo y qué grado de capacitación el licenciatario asegura que se alcanzará y en qué tiempo. 2. La existencia de manuales, documentos, y soportes electrónicos. 3. Descripción de las instalaciones necesarias que debe tener el cesionario para poder utilizar el know how. Puede suceder que la tecnología del licenciatario no esté a la altura del conocimiento que se pretende recibir y sea obsoleta, y que el contrato de transferencia de tecnología sea de cumplimiento imposible. 4. Asistencia técnica posterior. Como explicamos antes, la información es dinámica y no estática. Puede suceder que las plataformas sobre las que se instala la tecnología se modifiquen y haya que hacer adaptaciones o modificaciones, las que por su complejidad pueden requerir de una asistencia técnica posterior. Es preciso definir en qué consistirá esta asistencia técnica posterior y cuántas personas estarán asignadas a ella, durante qué plazos y cuál será el alcance de las obligaciones, los que pueden llegar hasta el aporte de maquinarias, materias primas, materiales semielaborados, etc. 5. Garantías, para el supuesto que los objetivos en vista no se cumplan y se deban analizar otras alternativas. Pueden existir diversas razones para que los objetivos propuestos por las partes no se logren y antes de que se den inicio a denuncias de incumplimiento de contrato es bueno haber analizado qué puede suceder si la tecnología transferida no cumple sus fines respecto del resultado tenido en vista por las partes. También pueden existir garantías para el caso de que el know how haya sido conseguido ilícitamente y se prohíba su utilización. Si bien el tercero cesionario en este caso sería de buena fe, la discusión relativa a si puede o no mantenerse en posesión del know how puede no ser beneficiosa para el cesionario. Asimismo la falta de asistencia en el futuro por prohibición judicial al cedente respecto de la utilización del know how puede significar la falta de interés en continuar el contrato. 6. Servicio de actualización del know how, en tanto éste pierde rápidamente su actualidad y deviene obsoleto. Quien provee de tecnología normalmente se ocupa de seguir creando tecnología por lo que es fundamental la actualización de la misma y que exista una obligación al respecto".

A las observaciones transcritas, el señor Secretario de Informática y Telecomunicaciones, ingeniero Maximiliano Rubén FERNANDEZ, contestó mediante la Nota Nº 1181/11, Letra S.I.T., obrante a fojas 598/608, que: "En relación a esta observación, cabe tener presente que no se ha invocado transgresión legal o reglamentaria alguna que dé sustento a la misma, pues no existe apartamiento o incumplimiento legal alguno por parte de esta Administración que pueda matar dicha observación, lo que conlleva que ese Organismo de Control deba proceder a levantarla sin más trámite, pues es claro el art. 4º inc. b) al expresar que es atribución del Tribunal de Cuentas '... observar los actos administrativos que dispusieren gastos por transgresión de disposiciones legales o reglamentarias, cuando ejercer el control

preventiva de legalidad...' y de igual modo, no presenta duda alguna el Punto 4 inc. c) de la Resolución Plenaria Nº 01/01, cuando indica el Auditor Fiscal podrá efectuar reparos u observaciones y emitir el acta pertinente, cuando '... considerase que existen transgresiones legales a reglamentarlas...', la cual como se señaló no acontece en el presente punto.

No obstante ello, para el hipotético y poco probable caso de que se entendiera que lo observación resulta procedente, deberá indicarse con claridad cuál es la norma legal transgredida, a efectos de motivar debidamente la observación formulada y posibilitar a esta Administración formular su descarga adecuadamente.

El objeto del contrato se encuentra correctamente definido en su intención, límite y alcance, tanto para esta Secretaría como para el proveedor en su Cláusula 1 y su Anexo V- Glosario de Terminología. En este entendimiento, se satisfacen los elementos necesarios para un adecuado control y seguimiento de todo el proyecto, en el Anexo I, apartado 3 y 4.

Asimismo, el carácter difuso de la definición del objeto del contrato y del know how es sólo atribuible a la falta de competencia en la materia por parte de la auditora, situación reconocida por lo mismo en el primer punto de las aclaraciones previas de su Acta Nº 674/11 a fs. (449).

Ello es así, toda vez que la observación formulada se sustenta en el informe legal previo y en razón que en el marco jurídico se reconocen dos supuestos a saber:

1. El programa objeto: es la 'licencia de uso' de un producto determinado desarrollado por un tercero donde no existe transferencia de propiedad intelectual. (Por ejemplo licencia de Windows).

2. El programa fuente: es aquel sistema desarrollado por un tercero a requerimiento del cliente, que una vez finalizado nos entrega el programa objeto (licencia de uso), los códigos fuentes y la propiedad intelectual (la cual debe ser tramitada por el Cliente).

La presente contratación no se corresponde con ninguno de los casos anteriormente definidos, ya que tiene por objeto la transferencia del know how, en la utilización, administración, seguimiento y análisis de impacto del código fuente y su interrelación con la base de datos. Es decir, nos permitirá modificar y adaptar el código fuente a necesidad de la administración provincial e niveles básicos que hacen a la operatividad cotidiana del sistema sin la intervención de la empresa proveedora, lo que técnicamente se define como soporte de nivel 1 y 2. Todo ello, sin que implique una transferencia de la propiedad intelectual, o sea, seguirá siendo de NOMADE SOFT S.R.L. Lo descrito en el presente fue incorporado en el Anexo V - Glosario de Terminología.

En relación al deber de confidencialidad planteado, se deja expresamente de manifiesto que la provincia no adquiere la propiedad intelectual del programa fuente y del programa objeto entregado por el proveedor.

Extracto del Contrato Registro 14507, 1.- CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: 'LA PROVINCIA' contrata la realización del mantenimiento de los productos y servicios adquiridos en virtud del Contrato de Locación de Obra registrado bajo el Nº 13205 y ratificado por Decreto Provincial Nº 923/08. Las partes acuerdan que el mantenimiento de los productos y servicios comprenderá y se realizará en la forma descrita en el presente Contrato y en Anexa I que se redacta por separado y forma parte de la presente...

En cuanto a las objeciones realizadas referentes al entrenamiento del personal, nivel de capacitación, descripción de las instalaciones, garantías, asistencia técnica posterior y servicio de actualización del know how, estos son elementos propios que esta Secretaría de Informática y Telecomunicaciones ya ha evaluado para el desarrollo del presente contrato, no pudiendo ser ello una causal para mantener esta observación, toda vez que no se incumple ninguna normativa y siendo estas aspectos netamente de gestión.

Con respecto al servicio de actualización del know how, se ha contemplado expresamente en el contrato en la Cláusula 4 – nuevos desarrollos, en la Cláusula 12 – Implementación de nuevas funcionalidades en sus apartados 2 y 4, en el Anexo I – apartado 1.1. y 1.2.

Asimismo se adaptó la Cláusula 5, indicando expresamente que la empresa se obliga a realizar la transferencia tecnológica de todos los productos/módulos/submódulos desarrollados hasta el día de la suscripción del contrato y la transferencia tecnológica de todos los nuevos productos/módulos/submódulos que se desarrollen durante la vigencia del presente contrato, el cual está incluida en el costo de los nuevos desarrollos".

En primer lugar, deba disentir con los términos del descargo bajo examen, en función de que, si bien la planta de profesionales intervinientes por parte de este Tribunal de Cuentas, carece de incumbencia específica en materia informática, que permita evaluar la cuestión técnica descrita en esta última ocasión, si posee competencia para entender y distinguir suficientemente lo que se desprende como objeto de un contrato.

En tal sentido, debo resaltar que las posibles malas interpretaciones en que podría haberse incurrido, en el mejor de los casos, han sido inducidas por las explicaciones iniciales de la propia autoridad contratante, que ha ejemplificado enfáticamente sobre el objeto del contrato comparándolo con la adquisición de la "fórmula de la Coca Cola" (SIC) y no ha explicitado el grado de detalle que, por primera vez a lo largo de las presentes actuaciones, ha dado en esta última ocasión.

En función de lo expuesto, estimo que no corresponde poner en tela de juicio la acabada cobertura y descripción de los parámetros técnicos del objeto, máxime si en su especialidad, el señor Secretario de Informática y Telecomunicaciones, asevera que se describen suficientemente las obligaciones a cargo de cada una de las partes y que se halla acotada al máximo la probabilidad de discrepancias interpretativas sobre la que las partes -en la buena fe contractual- entendieran o debieron entender al momento de suscribirla (conf. Art. 1198 Código Civil), pues en definitiva, será dicho funcionario el responsable principal de que su cumplimiento sea posible. Por lo tanto, procedería el levantamiento de las observaciones citadas.

OBSERVACIONES 10 Y 14

Con relación a la observación plasmada en el punto 10, la Auditora Fiscal oportunamente dijo: "Cláusula Décima Primera – Obligaciones, Responsabilidades y Procedimientos: Con respecto a lo estipulado en el último párrafo, se comparte lo expresado en Informe Legal Nº 246/2011, obrante a fs. 311/333 (...) el que indica: 'lo que estimo impropio en función de la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo al respecto ante un problema puntual, que podría acarrear la responsabilidad solidaria del Estado provincial frente a terceros' razón por la cual se observa la falta de adecuación total de la Cláusula mencionada, subsistiendo cuestiones a definir con posterioridad".

Asimismo en relación a la observación plasmada en el punto 14, la señora Auditora Fiscal detalló: "Cláusula Vigésima Segunda – Readequación de Cláusulas: Si bien se ha procedido a limitar las cuestiones sujetas a readecuación, aún subsisten cuestiones a definir con posterioridad, razón por la cual se reitera la expresado en la observación 10".

A tales observaciones, el señor Secretario de Informática y Telecomunicaciones, respondió que: "... cabe tener presente que no se ha invocada transgresión legal o reglamentaria alguna que dé sustento a la misma... (reitera la fórmula ya transcrita respecto de la observación anterior en cuanto a una supuesta falta de sustento normativo).

... Por último, cabe resaltar que la inclusión de dicho párrafo en la cláusula contractual responde a criterios de conveniencia y oportunidad que han sido merituados por esta Administración al diseñar el instrumento legal cuestionado, y que resultan ajenos a la competencia funcional del organismo de control, cuya tarea se circunscribe al control de la función económico-financiera patrimonial y de legalidad del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en los arts. 1º y 2º de la Ley Provincial Nº 50.

En ese sentido, es doble recordar que el controlador no debe volar ni sustituir el núcleo interno de la discrecionalidad de la Administración, pues no es su cometido pronunciarse sobre el mérito, oportunidad o conveniencia de las políticas adoptadas, sino sobre los aspectos que hacen a la juridicidad de su ejecución.

Asimismo, en la Cláusula 11, se procedió a cambiar el ítem verbal 'se detallarán' por la de 'se detalla'. Teniendo en cuenta que las obligaciones y responsabilidades de las partes ya se encuentran descriptas en el Anexo II Apartado 1.

En orden a la competencia legal que ostenta este Órgano de Control externo de la hacienda pública, calificada doctrina en la materia, tiene dicha que:

"Existe una variada tipología que se puede clarificar del siguiente modo:

a) Con referencia a la materia sobre la que recae el control: juridicidad y mérito.

Este último se vincula a la valoración política. En tal criterio, esta zona de reserva constitucional debe quedar al margen del control cuando es realizado por un órgano externo de carácter técnico. El control de juridicidad en sentido amplio comprende: 1) el de legalidad o juridicidad; y 2) el de gestión que, a su vez, abarca el de economía, eficiencia, eficacia y regularidad.

b) Con relación al momento en que se produce: preventiva, previo, concomitante y posterior...

En el marco del actual sistema nacional, el control puede ser de legalidad, regularidad financiera o fiscalización financiera (razonabilidad, registra e información contable) y de gestión (comprensiva de las tres "E": economía, eficacia y eficiencia)...

CONTROL DE LEGITIMIDAD O, MÁS PRECISAMENTE, DE JURIDICIDAD

Las reformas introducidas por el sistema constitucional comparado, como la Ley Fundamental de Bonn (Art. 20, op. 3º), la Constitución Italiana de 1984 (Art. 97) y la Constitución Española (Arts. 9.2 y 103.1), expresan que la actuación de la Administración Pública hoy no sólo se sujeta a la ley sino también al Derecho. Lo mismo ocurre con la reforma constitucional argentina y las modernas constituciones provinciales, que, como la de Córdoba, subordina la Administración al orden jurídico (Art. 174).

Su efecto práctico es que se otorga significativo importancia a los principios generales del Derecho, los cuales junto a la ley pasan a constituir el marco de juridicidad que sirve como fuente de la actividad administrativa...

En lugar de requisitos de legitimidad del acto administrativo, debemos hablar de requisitos de juridicidad y, consecuentemente, de control de juridicidad: su razón es que la terminología actualmente en uso, legitimidad o legalidad, podría entenderse *prima facie* demasiado apegada a la ley y aliviar de tal forma que la Administración moderna debe sumergirse a un contexto mucho más amplio. De tal manera, también son elementos que hacen a la juridicidad del acto: la buena fe, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad, el precedente; y sus vicios: la desviación de Poder, la falsedad en los hechos, la ilogicidad manifiesta, el error manifiesto de apreciación, la arbitrariedad, la irrazonabilidad, entre otras. Ella amplía los clásicos elementos a requisitos de legitimidad que tradicionalmente recaen sobre la competencia, causa, motivación, objeto, forma, procedimiento y fin, con sus consecuentes vicios.

Por lo tanto, con el control de juridicidad, la estrategia o metodología de fiscalización no debe constituir su *slogismo* lógico jurídico sobre la base sólo de la ley, sino revisar el acto con un criterio amplio de adecuación a la unicidad del orden jurídico" (SESfN, Domingo Juan, en Control de la Administración Pública, Rap, Buenos Aires, 2009, págs. 324/325. El destacado no es original).

Asimismo, se ha sostenido que: "El control sobre la gestión tiene el siguiente cometido:

a) Verifica la legitimidad y regularidad de la gestión. Por legitimidad se refiere al análisis del acto concreto pudiendo detectar los vicios de violación de ley, incompetencia y desviación de poder. En nuestro ordenamiento argentino, se verifica lo mismo, aunque con otras palabras que comprenden la totalidad de los elementos del acto administrativo. Por

regularidad se quiere significar el respeto por el trámite procedimental administrativo reglado.

b) Analiza la correspondencia de los resultados de la actividad administrativa a los objetivos establecidos por la ley. Se refiere al control de economicidad, eficiencia y eficacia.

c) Verifica el funcionamiento de los órganos internos de control.

10. NATURALEZA DEL CONTROL DE GESTIÓN

Tiene carácter eminentemente colaborativa, a fin de garantizar que cada sector de la Administración Pública responda al modelo ideal trazado por la Constitución... Pretende que las diversas unidades administrativas respeten los principios de legalidad, imparcialidad y eficacia.

11. DIFERENCIAS DEL CONTROL DE GESTIÓN CON EL DE LEGALIDAD O JURIDICIDAD

La diversidad no sólo está en que el control de legitimidad concierne a los actos individuales, sino que el control de gestión recae sobre la actividad considerada en el conjunto de sus efectos operativos y sociales; sobre todo, en la estructura misma de la función de control. En efecto, en el marco del control de gestión, el Tribunal de Cuentas debe operar a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y lo planificado normativamente a priori.

La Corte Constitucional Italiana... sostuvo que el control posterior sobre la gestión no puede ser asimilada a un mero control de derecho objetivo con exclusión de cualquier apreciación que no sea estrictamente jurídica. El control de gestión, por sus objetivos, por sus efectos y por su modalidad de ejercicio, configura esencialmente un control de carácter empírico. Más que en parámetros normativos, se inspira en cánones o estándares de común experiencia que encuentran su racionalización en los conocimientos técnico-científicos, propios de las varias disciplinas utilizadas a los fines de la evaluación de los resultados de la actividad administrativa" (SESfN, Domingo Juan, op. cit. pág. 329/330).

Ahora bien, en cuanto a si este Tribunal de Cuentas tendría competencia sobre cuestiones de llamada oportunidad, mérito y conveniencia, cabe distinguir su implicancia.

En ese orden de ideas, se ha precisado: "CONCEPTO DE ECONOMICIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA

Según el Manual de Control del Tribunal de Cuentas Europea, [...] en el control de eficacia se verifica si las objetivos del ente controlado han sido alcanzados, en el de economicidad si se han elegido los medios menos onerosos para conseguir el objetivo fijado, y el de eficiencia si los medios han sido utilizados de manera apropiada...

El auditor no puede cuestionar el mérito de las políticas adaptadas por el órgano decisor, pero sí puede y debe examinar cómo dichas políticas son implementadas. El control de gestión no puede cuestionar los objetivos políticos fijados, los méritos de éstos, pero sí tiene derecho a que esos objetivos sean establecidos en forma clara y cuantificada, y, desde luego, en la eficacia y eficiencia de su implementación. Son los medios no los fines las que son objeto de control...

EL CONTROL DE JURIDICIDAD AMPLIADO TAMBIÉN ABARCA EL CONTROL DE GESTIÓN, EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMICIDAD

Si el control de eficacia presupone verificar en esencia si una actividad administrativa ha alcanzado el objetivo propuesto, es indudable que ha existido antes una planificación prearmada en la que se ha incluido ese propósito. En consecuencia, expresa o implícitamente, ella comparte una actividad reglada o vinculada, donde el controlador debe verificar si los objetivos se han logrado conforme la planificación elaborada...

El examen de los proyectos, planes, programas y operaciones de la Administración Pública controlada, que verifica si se han logrado los objetivos previstos y si se han utilizado los recursos del Estado con eficiencia, economía, racionalidad, en el marco de la legalidad vigente, bien puede entrar dentro de un concepto alargado de juridicidad, desde que, en definitiva, se trata de actuar sobre la base de reglas, normativas

preestablecidas a pautas técnicas, científicas o de experiencia, de universal consenso o, al menos, tolerables. El control es perfectible, ya que, en definitiva, se trata de verificar si se han respetado reglas jurídicas o de otro tipo, para reglas al fin, en las que el espacio de lo discrecional es generalmente inexistente y excepcionalmente reducido. Aun para este último supuesto, hay control de su ejercicio.

En definitiva, se puede hablar de control de legalidad relacionada con la verificación del cumplimiento de normas jurídicas, y de control de gestión omnicausal de la economía, eficacia y eficiencia. En mi criterio, ambos de legalidad y de gestión, pueden formar parte del control de juridicidad en su sentido más amplio" (SESIN, Domingo Juan, op. cit. pág. 331/332).

Asimismo, importantes autores en esta misma materia tienen establecido que: "El alcance del control de los tribunales de cuentas.

Se advierte una clara evaluación del alcance del control por parte de los tribunales (...) que nos permite distinguir distintas etapas sobre la base de la forma de su realización distintas etapas sobre la base de la forma de su realización...

Por la tanto podemos decir que la fiscalización de los tribunales de cuentas actualmente se refiere a un control de juridicidad en sentido amplio, que comprende el control de legalidad o juridicidad y el de gestión (economía, eficiencia, eficacia)" (MAYOR, Armanda, "Órganos de Control y Auxiliares" publicado en HERNÁNDEZ, Antonio María -Coordinador- Derecho Público Provincial, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008, pág. 492).

De acuerdo con los preceptos transcritos, surge con meridiana claridad que este Tribunal de Cuentas, resulta efectivamente competente a efectos de controlar la eficacia de un instrumento contractual y su adecuación a la unicidad del orden jurídico, con el objetivo de velar por la incolumidad del patrimonio del Estado.

Sin perjuicio de ello, entiendo que hechos las debidas advertencias por parte del Tribunal, que se formularon en términos de recomendaciones desde esta Secretaría Legal, en cuanto revisar preventivamente aspectos que podrían devenir en debilidades a la hora de interpretar y ejecutar cláusulas como las que fueron materia de reparo, en mi opinión, la Autoridad Administrativa -desde la especialidad técnica que le incumbe- asume la responsabilidad si insiste en considerar suficientemente cubiertas las aristas de una contratación con un objeto tan particularmente difuso como específico, en función de lo cual, cabría levantar la observación analizada.

OBSERVACIÓN 16

La observación formulada mediante el punto 16, refleja la siguiente: "Por último (...) en la que respecta a la falta de inclusión en el texto del instrumento, de los detalles en torno a cómo deberá llevarse a cabo la registración ante el pertinente registro de la propiedad intelectual, de todos los programas fuente (o códigos fuente), cuya titularidad adquiera el Estado provincial, en procura de su adecuada tutela, teniendo en cuenta que se están pagando sumas millonarias por la adquisición de bienes registrables, cuyo oponibilidad a terceros debe quedar cristalizada al momento en que se efectúen los pagos correspondientes".

Respecto de dicho reparo, el Secretario de Informática y Telecomunicaciones, reitera la fórmula invocada recurrentemente sobre la supuesta falta de amparo normativo que le diera sustento y además dijo: "De todos modos, cabe tener presente que la Provincia en ningún momento adquirirá la propiedad intelectual sobre el Sistema S.I.G.A., con lo cual no resulta necesario pautar ningún mecanismo relativo a la registración ante la autoridad competente".

Hecha tal aclaración y teniendo en cuenta que, como ya se dijo al analizar los descargos relativos a las observaciones 5 y 6, ha sido la propia autoridad administrativa la que, en toda caso, indujo a error al Tribunal con la ejemplificación respecto de que se estarían adquiriendo fórmulas que brindarían a la Administración provincial una independencia absoluta de la empresa proveedora de las licencias del S.I.G.A., cuestión que recién se aclara en esa oportunidad, luego de sendas intervenciones en el mismo sentido.

En función de ello considera, también en este caso, que si el funcionaria citado entiende agotada la descripción de un objeto tan específico y particular, a través de la parte pertinente del contrato analizado, cabría el levantamiento de la observación baja examen, teniendo en claro -ahora sí- que no se estarían adquiriendo programas fuente del S.I.G.A., cuya propiedad intelectual pertenece a Nómade Soft S.R.L."

Que como consecuencia de los hasta aquí actuado, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable emite la Disposición SC Nº 193/2011 por la que resuelve levantar los reparos 1º), 9º), 15º) y 16º), del Acta de Constatación de Control Previo Nº 614/11, y mantener las Observaciones 2º), 3º), 4º), 5º), 6º), 7º), 8º), 10º), 11º), 12º), 13º) y 14º).

Que a fs. 696 luce la Nota Informe Nº 934/11 Letra S.I.T. por la que el Secretario de Informática y Telecomunicaciones brinda sus descargos a lo resuelto en la Disposición S.C. Nº 193/11; todo lo cual será tratado a continuación.

Que narrados de esta forma los antecedentes del caso, pasaremos a dar tratamiento a cada una de las observaciones formuladas en el Acta de Constatación Nº 614/11, y que fueran mantenidas por la Disposición S.C. Nº 193/11, a fin de determinar su pertinencia.

Que en ese orden, por el reparo 2 se observa la extemporaneidad en la tramitación de las actuaciones, indicando que el Contrato de Mantenimiento Nº 14.507 ratificado por Decreto Provincial Nº 1812/10 venció el 14/05/11.

Que sobre este punto, la autoridad responsable manifiesta a fs. 598 que si bien las actuaciones fueron iniciadas en fecha 10 de marzo de 2011, es decir, con anterioridad al vencimiento del contrato (14 de mayo de 2011), la complejidad del trámite y el control interno y externo hicieron que ésta observación sea insalvable.

Que analizados por nuestra parte los extremos invocados precedentemente, resulta razonable la respuesta dada en cuanto a que la complejidad del tema impusiera que la demora en el trámite supere los plazos que al parecer, desde un principio, podrían haberse apreciado, como suficientes; ello, por cuanto del examen de las actuaciones se extrae que efectivamente el manejo que tuvo éstas demandó plazos que escapan a cualquier previsión lógica en función a la materia técnica y específica involucrada. Por ello, consideramos que la observación propiciada en ese sentido debe ser levantada.

Que continuando con el examen, por la observación 3 se repara en la falta de información que de sustento a la conveniencia del precio fijado en el proyecto de contrato.

Que sobre este punto, a fs. 697 el Secretario de Informática y Telecomunicaciones manifiesta que esa secretaría solicitó cotización de presupuesto para 3.400 horas hombre de mantenimiento (fs. 678, 681 y 684), informando como consecuencia ello, que según la documentación adjunta, la empresa Software cotizó el valor hora a \$ 585,56 (fs. 679), la empresa ACP cotizó el valor hora a \$ 468 (fs. 682), y que Nómade Soft S.R.L. cotizó el valor hora en \$ 87,38.

Que sobre lo indicado precedentemente, hay que destacar que si bien las dos primeras empresas no cotizan en una compulsa de precios ya que lo hicieron a título informativo, lo cierto es que la notable diferencia en los valores de referencia que aportan, dan razonabilidad a los precios por los que tramitan las presentes actuaciones. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que no existen parámetros en las actuaciones que importen conocer que la contratación se está efectuando a un precio inconveniente para la administración, ya que desde la Secretaría Contable no se incorpora elemento alguno que demuestre o justifique la falta de conveniencia en el precio de Nómade Soft S.R.L., limitando su observación a manifestar la falta de información sobre los montos fijados, con lo cual, frente a la documentación arrojada por la autoridad responsable, la observación así formulada corresponde ser levantada.

Que mediante la observación 4 se repara en lo expresado en el Informe Nº 2779, Letra Auditoría Interna (fs 233) en el cual se hace referencia en la imposibilidad de verificar las cuestiones técnicas específicas relacionadas con el cumplimiento del contrato en función a que esa Auditoría

Interna carece de personal técnico capacitado en materia informática. A tal efecto, la Auditora Fiscal interviniente formula la presente observación ya que con ello incumple las previsiones de la Ley Provincial Nº 495 en cuanto al control integral e integrado de la Auditoría Interna.

Que ingresando a su análisis, resulta conveniente remitimos al inicio del Acta de Constatación Nº 614/11 y apreciar que en la misma se inserta el tipo de trámite por el cual se interviene, esto es, el control previo de expediente Nº 3830 SG/ 11 relacionado al mantenimiento, desarrollo y transferencia del sistema informático principal de la Provincia. Hacemos esta aclaración ya que, la presente observación se relaciona a cuestiones vinculadas con el control interno de la administración y a las deficiencias de un área en particular que aada tiene que ver con el contrato en formación. En otras palabras, las cuestiones interorgánicas entre este Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna emanadas de la Ley Provincial Nº 495 el área contable debería canalizarlas por los canales administrativos correspondientes y por separado, y no en el marco de una contratación entre la administración y un privado por carecer objetivamente ello de toda oportunidad, extremos estos que la Secretaría Contable y la Auditora Fiscal deberán tener presente en casos futuros a fin de procurar el debido proceso adjetivo. Por lo demás, en cuanto al trámite que nos ocupa, la observación 4 del acta de Constatación Nº 614/11 mantenida por la Resolución de Secretaría Contable Nº 193/11 debe ser levantada por ser improcedente en los presentes actuados.

Que respecto a las observaciones 5 y 6, procederemos a su análisis en forma conjunta ya que así fueron tratadas por el área contable para su elevación a plenario, refiriéndose ellas, sinécticamente, al objeto del contrato respecto al "...modo y tiempo" (sic); al "...correcto o incorrecto cumplimiento de las obligaciones y sobre qué aspectos debe guardarse el deber de confidencialidad" (sic); y al carácter difuso que tiene la definición "know how".

Que al efecto, la autoridad administrativa explica (fs. 601) que el informe legal reconoce dos supuestos que son, el "programa objeto" y el "programa fuente" y en rigor de verdad indican, que la presente contratación no se corresponde con ninguno de ellos, ya que tiene por objeto la transferencia del know how en la utilización, administración seguimiento y análisis del impacto del código fuente y su interrelación con la base de datos, lo que permite modificar y adaptar el código fuente a la necesidad de la administración provincial en niveles básicos que hacen a la operatividad cotidiana del sistema y sin la intervención de la empresa proveedora, lo que técnicamente, se define como nivel 1 y 2; y sin que todo ello importe una transferencia de la propiedad intelectual, es decir, que ésta seguirá siendo de NOMADE SOFT S.R.L..

Que no obstante, a fs. 634 mediante Informe Legal Nº 630/11, el Secretario Legal señala en cuanto al objeto del contrato, que no corresponde poner en tela de juicio la acabada cobertura y descripción de los pormenores técnicos del objeto, máxime si en su *especialidad*, el señor Secretario de Informática y Telecomunicaciones asevera que se describen suficientemente las obligaciones a cargo de cada una de las partes, y que se halla acotada al máximo la probabilidad de discrepancias interpretativas sobre lo que las partes con la *bueni fe* contractual- entendieron o debieron entender al momento de suscribirlo (conf. Art. 1198 Código Civil), pues en definitiva, será dicho funcionario el responsable principal de que su cumplimiento sea posible; aconsejando en tal sentido el levantamiento de la observación.

Que si bien estos argumentos, no fueron compartidos por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable en la Disposición SC Nº 193/11 quien mantiene el presente reparo, éste Plenario considera que los fundamentos jurídicos propiciados en el informe legal son suficientes y razonables. Ello, por cuanto las explicaciones técnicas de la contratación resultan efectuadas por quien tiene competencia para hacerlo, esto es, por el Secretario de Informática y Telecomunicaciones Ingeniero Maximiliano BERNANDEZ, quien además amplió más aun sus conceptos a fs. 708.

Que los fundamentos para mantener ésta observación en la Disposición SC Nº 193/11, la Prosecretaría Contable lo enmarca en que no se describen los pormenores técnicos. En tal entendimiento, y siguiendo el criterio sustentado en el Informe Legal Nº 630/11, entendemos que el fondo de

la cuestión observada se encuentra satisfecho ya que las explicaciones del caso fueron sobradamente brindadas.

Que sin perjuicio de ello, a fs. 624 la Auditora actuante entiende la importancia de la presente observación en orden a lo dispuesto en el artículo 99 inc. c) de la Ley Provincial Nº 141. Cabe recordar que ésta norma establece que el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, todo lo cual, a esta altura de las circunstancias, resulta cumplido en función a que ese objeto, conforme los informes aduados, es concreto y no se evidencia que su cumplimiento tanto físico como jurídico pueda verse frustrado como consecuencia de su redacción, máxime cuando la autoridad técnica responsables de sus consecuencias, lo entiende suficiente. Del mismo modo, y teniendo en cuenta lo manifestado por la Auditora, debemos remarcar que también es importante el inciso b) de la misma norma que se relaciona con la causa del acto, es decir, con los hechos y antecedentes que lo sustentan, destacándose en ello, las presentes actuaciones donde surge todas las explicaciones dadas en su consecuencia y que resulta a todas luces la debida ilustración de su objeto; sin perjuicio de quedar subsistente en todos estos antecedentes la responsabilidad administrativa de los funcionarios intervinientes por cualquier eventualidad perjudicial a los intereses del estado como consecuencia del objeto y las explicaciones sobre él formuladas.

Que asimismo no debe escapar al conocimiento de los intérpretes que el objeto que aquí se analiza se relaciona a con una cosa inmateria susceptible de valor (art. 2312 C.C.), por tal motivo, no se comprende los pormenores técnicos invocados por la Prosecretaría Contable para no levantar la observación (fs. 653), como del mismo modo tampoco ésta indica cuales deberían ser para una mayor comprensión de su expresión o para requerir la información correspondiente. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que de la lectura de las actuaciones surge que el contrato cuenta con un objeto determinado y debidamente explicado a lo largo de su trámite, con lo cual, las observaciones así formuladas debe ser levantadas.

Continuando el análisis, la observación 7 se refiere a la falta de definición en forma clara, precisa y anticipada de la totalidad de los productos y servicios que constituyen el objeto de la contratación a los efectos de contar con la definición de un objeto claro y preciso.

Que los términos de esta observación guardan identidad con lo analizado en el punto anterior, por lo que a fin de evitar reiterar los argumentos expuestos anteriormente, nos remitimos a ellos *brevitatis causae*. A tal efecto, con el sentido indicado, corresponde el levantamiento de la presente observación.

Que por la observación 8 se repara en la falta de documentación que de respaldo al calculo máximo de horas de requerimiento mensual (3.400), a fin de asegurar la mínima cantidad de horas ociosas. Asimismo entiende la auditora que al contratar capacidad máxima instalada, ello no significa que todos los meses sea necesaria la totalidad de esas horas, independientemente de lo cual, la Provincia deberá abonar todos los meses ese costo fijo. Además, a fs. 625 agrega que en el apartado 3.2 del Anexo I del Decreto Provincial Nº 2315/11 (fs. 576) se prevé la posibilidad que la Provincia utilice una cantidad de horas menor.

Que al respecto, la autoridad responsable informa que surge de la capacidad máxima las horas que la empresa puede brindar para hacer un seguimiento acabado del proyecto. Destaca que la demanda de la administración puede ser infinita y deberá ajustarse a un máximo de 3.400 horas mensuales.

Que sin perjuicio de las explicaciones que preceden, de la lectura de la cláusula 8 del contrato se desprende que para los servicios se fija una unidad de medida estipulada en horas hombre por mes por el plazo de vigencia del contrato. Asimismo se estipula que las partes acuerdan la contratación de una cantidad fija de disponibilidad por parte de la empresa de tres mil cuatrocientas (3.400) horas hombre de mano de obra mensual. Por su parte, el apartado 3.2 del Anexo I del Decreto Provincial Nº 2315/11 (fs. 576) establece, básicamente, que en caso que la Provincia no supere el monto máximo de horas mensuales, la empresa quedará eximida de ello y se respetará el tope máximo fijado.

Que de la lectura integral de todas estas cuestiones surge, en pida síntesis, que la empresa no puede disminuir su producción en menos de 3.400 horas hombre mensuales, con lo cual, si bien ello constituye la capacidad máxima de la empresa (conf. fs. 704), para la Provincia, significa el "mínimo garantizado" en la prestación del servicio contratado y que, según los informes producidos, sería el conveniente a los fines de la administración.

Que a más de lo dicho, en el punto del contrato denominado "PRIMER ESQUEMA" (fs. 576) se lee que el tope máximo de horas mensuales se establece en función a la planificación realizada por la empresa, y su "no" utilización por la Provincia exime de responsabilidad a la empresa, respetándose ese tope a fin de no producir perjuicios a las partes. Partiendo de este concepto, resulta razonable que la empresa a fin de no sufrir perjuicios y asegurar su normal funcionamiento requiera un monto fijo para el cumplimiento del contrato; del mismo modo, que la Provincia se debe asegurar ese normal funcionamiento de la empresa de la cual se sirve, y todo ello, en gran medida depende de un adecuado financiamiento, ya que cualquier desequilibrio económico podría impactar en el cumplimiento del contrato, el cual, como es sabido por ser de público y notorio conocimiento, tiene suma importancia para el funcionamiento de la actividad administrativa de la Provincia.

Que en función de lo expresado precedentemente no se encuentra arbitrariedad en lo pactado sobre este punto, tampoco se encuentra una explicación concreta en la observación 8 que abarque el análisis de toda la cuestión, ya que la Auditora actuante postula la inconveniencia para la Provincia del monto fijo, sin evaluar que ello, visto de otro modo, para ésta significa la garantía de un servicio mínimo y sobre el cual la empresa es responsable conforme a las garantías estipuladas en el contrato. Además, hermenéuticamente, estas cuestiones deben ser analizadas con las previsiones de la cláusula decimonovena que prevé que la Empresa pondrá a disposición de la Provincia personal con perfil de analista, durante ocho (8) horas en los días laborables; y que la Empresa debe garantizar la afectación de personal mediante un sistema de reemplazo que de respuesta a lo requerido por la administración, todo lo cual redundará en la obligación de la empresa de mantener operativo el servicio para la Provincia, y, consecuentemente, que ésta se sirva de ello. Así definido, se advierte que estas cláusulas y circunstancias contestan lo observado para propiciar su levantamiento.

Que por lo la explicación que precede, corresponde que la observación 8 sea levantada.

Que las observaciones 10 y 14 por encontrarse relacionadas se tratarán en forma conjunta para un mejor análisis. Así, por la primera de ellas se observa (compartiendo el Informe Legal Nº 246/11), la redacción de la cláusula décimo primera del contrato, a la que interpreta la Auditora como impropia en función a la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo al respecto, frente a un problema puntual que podría acarrear responsabilidad solidaria del Estado provincial frente a terceros, toda vez que subsisten cuestiones a definir con posterioridad; en tanto que por la segunda de las observaciones plantea, respecto de la cláusula vigésimo segunda, que si bien se procedió a limitar las cuestiones sujetas a readecuación, aún subsisten cuestiones a definir con posterioridad, razón por la cual reitera lo expresado en la observación 10.

Que sobre estas cuestiones, por tratarse de una interpretación subjetiva de la Auditora y la Prosecretaría Contable, puesto que reparan en acontecimientos que en la actualidad resultan futuros e inciertos, pudiendo éstos ocurrir o no, debemos remitirnos a lo expresado por el Secretario Legal (fs. 642) respecto a que si "...la autoridad administrativa -en cuanto a la especialidad técnica que le incumbe- asume la responsabilidad si insiste en considerar suficientemente cubiertas las aristas de una contratación con un objeto particularmente difuso como específico, en función de la cual, cabría levantar la observación analizada". Es decir que, dada la insistencia de la autoridad competente sobre las cuestiones aquí planteadas, corresponde levantar las observaciones analizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios intervinientes sobre los acontecimientos aleatorios que, en el momento oportuno, puedan causar perjuicio al Estado Provincial.

Que conforme lo expuesto corresponde el levantamiento de estas observaciones.

Que la observación 11 se refiere a la cláusula décimo sexta referida a la rescisión del contrato, indicando que ello se contrapone con la naturaleza del servicio contratado que versa sobre la transferencia tecnológica, para lo cual, la Auditora cita la Nota Nº 331/11 (fs. 112/3) en la que se expresa que se trata de un proceso a largo plazo; y la Nota Nº 214/11 (fs. 2/4) en la que se indica que restan dos (2) años para la salida de la dependencia de la empresa prestadora.

Que al igual que lo narrado en los párrafos anteriores, la Auditora y la Prosecretaría Contable hacen referencia a cuestiones subjetivas que no se acomodan a la convención que analizan.

Que a fin de echar luz a la interpretación que elaboran, corresponde hacer un análisis pormenorizado del hecho concreto que se estipula en la cláusula décimo sexta del contrato, apreciando de nuestra parte, conforme a los términos de la observación, que lo cuestionado sería la posibilidad de la empresa de rescindir el contrato a su exclusivo arbitrio. Así, ingresando al análisis de la cláusula, en ésta se lee que las partes tienen la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento previa notificación anticipada de 90 días. Haciendo un análisis integral de lo pactado en ella, resulta que la frase "facultad de las partes" no constituye, en principio, "la voluntad" exclusiva y autónoma de una sola de ellas, sino que esa facultad se encuentra limitada a los supuestos que en la misma cláusula se estipulan. Basta con apreciar el punto b) allí redactado para entender que la simple voluntad como hecho generador del distracto, para que tenga efecto jurídico, debe ser por mutuo acuerdo, es decir, que también debe mediar acuerdo del Estado, pues la sola voluntad de la empresa no alcanza para rescindir el contrato.

Que fuera de este supuesto, el resto de los casos para poder rescindir se encuentran perfectamente tabulados en la cláusula, y son: por incumplimiento de la empresa (a); por caso fortuito o fuerza mayor (c) y por incumplimiento de la Provincia (d). Por último, existe otro supuesto que le da una facultad adicional al Estado por cuanto se incluye en la primera parte del cláusula, que la Provincia puede rescindir el contrato por causas no imputables a la empresa, fijando el mecanismo para hacerlo. Este supuesto, que constituye una típica prerrogativa administrativa, es el único por el que la voluntad unilateral puede dar lugar a la rescisión, estando aun por encima del punto b) (mutuo consentimiento) toda vez que "éste" se encuentra redactado en términos generales, no pudiendo entrar así en contradicción con "aquel" que establece una especialidad. Por lo demás, la empresa, al no contar con un marco contractual expreso que le de la facultad unilateral de rescisión como el caso recién enunciado, debe remitirse al marco general, esto es, al mutuo consentimiento.

Que en mérito a lo expuesto precedentemente, la observación formulada corresponde ser levantada.

Que por la observación 12 se repara que en el proyecto de contrato no se indica claramente y con exactitud la cantidad y nivel de capacitación del personal que la empresa pondrá a disposición de la provincia, y tampoco la descripción del equipo tecnológico.

Que sin entrar en mayores consideraciones sobre el tenor de lo expresado en el párrafo que precede, debemos indicar a modo de comentario que la redacción de la cláusula décimo novena sobre la que se repara, constituye para la empresa más que una obligación, una condición "*sine qua non*" para el cumplimiento del objeto del contrato, es decir, que para poder cumplir con éste, la empresa debería cuanto menos, contar con el servicio de personal técnico capacitado para cumplirlo, sin lo cual, estimamos que su ejecución se vería seriamente impedida.

Que no obstante del texto de la cláusula se desprende que la empresa pondrá a disposición de la Provincia personal con perfil de analista; en una jornada laboral de 8 horas durante los días hábiles administrativos; la Provincia asignará el horario de las personas afectadas por la empresa de acuerdo a su requerimiento; El horario será computado al sistema hora hombre; la empresa debe garantizar los reemplazos en forma de dar respuesta

a lo requerido por la autoridad administrativa, y la empresa debe proveer de equipamiento tecnológico que requiera para la debida prestación del servicio.

Que analizados éstos extremos, entendemos que ello además de encontrar íntima vinculación con el cumplimiento del contrato, se encuentra relacionado con la contraprestación que percibe la empresa, ya que los pagos se asientan sobre resultados de horas-hombre.

Que partiendo del análisis del marco general de la contratación, no encontramos sustento a los términos de la observación, referidos a solicitar cantidad y capacitación del personal de la empresa, ya que independientemente de ello, la empresa contrata una obligación de resultado, y sobre el cumplimiento de ésta va a obtener su cabro. Por tal motivo ésta observación debe ser levantada.

Que por la observación 13 se repara en el personal de la administración que recibirá la capacitación tecnológica objeto de la contratación, indicando que no se han identificado los mismos y que no queda claro si en la actualidad dicho personal se encuentra prestando servicios a se trata de personal que se incorporará al efecto.

Que sobre este punto corresponde indicar que por el contrato que se analiza, la administración se asegura la obligación de la empresa de capacitar a los agentes que se designen al efecto, de los cuales dos deben ser programadores y dos cantadores.

Que partiendo de esta estipulación, el reparo formulado invade la esfera de actuación de la administración, ya que al tratarse la designación de agentes (de planta o a incorporar a planta) de una actividad de gestión, la actividad de este Tribunal se encuentra restringida a los resultados obtenidos. En otras palabras, el control externo debe limitarse a verificar en el momento oportuno el debida cumplimiento de lo aquí pactado; pero en modo alguno podemos conminar a la administración a que indiquen en ésta oportunidad quienes son los agentes designados, y mucho menos si para ello va a incorporar personal a la administración.

Que sobre éste tópico adherimos a la doctrina de Domingo SESIN citada por el Secretario Legal para fundar las observaciones 10 y 14 (fs. 640). Básicamente, en cuanto al control de gestión, SESIN postula que el Tribunal de Cuentas debe operar a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y la planificado normativamente a priori. Con ella, el control de lo pactado en el "Anexo I, Punto 1.21.2 Recursos Humanos" debe ser efectuado sobre su ejecución, verificando que las agente designados al efecto reúnan las condiciones estipuladas y no en esta instancia prematura de cumplimiento.

Que por lo precedentemente expuesto corresponde levantar la observación aquí analizada.

Que por la observación 14 se formula lo siguiente: "*Clausula Vigésima Segunda- Re adecuación de Clausulas: Si bien se ha procedida a limitar las cuestiones sujetas a re adecuación, aun subsisten cuestiones a definir con posterioridad, razón por la cual se reitera lo expresado en la observación 10*".

Que al respecto corresponde señalar que de la transcripción textual efectuada no se desprende con claridad cual es su objeto, ya que se mencionan "cuestiones a definir con posterioridad", sin indicación expresa de cuales son, o cual es la interpretación que se hace de ello. No obstante, al indicarse que para ésta observación se reitera lo expresado en la observación 10, corresponde, en idéntico sentido, que la auditora tenga presente lo resuelto en el presente acto administrativo para ese punto.

Que sin perjuicio de ello, a fs. 13 el Secretario Legal bajo el título "OBSERVACIÓN 16" analiza los argumentos utilizados por la autoridad responsable para éste reparo, y que se refieren a que la Provincia en ningún momento obtendrá la propiedad intelectual sobre el SIGA, con lo cual no resulta necesario puntualizar ningún mecanismo relativo a la registración de la autoridad competente.

Que sobre estas manifestaciones el Secretario Legal concluye en que si el funcionario entiende agotada la descripción de un objeto tan específico y particular, a través de la parte pertinente del contrato analizado, habría el levantamiento de la observación.

Que no obstante los términos del reparo formulado, estos miembros comparten la conclusión efectuada por el Secretario legal en la forma que precede, con lo cual, corresponde el levantamiento de la observación.

Que efectuado así el análisis de las observaciones arrojadas a estos Miembros para su tratamiento plenario, ingresaremos ahora en algunos puntos advertidos en el expediente y que consideramos que deben ser aclarados a fin de disipar dudas.

Que del análisis global de los descargos, surge el énfasis puesto de manifiesto por el Secretario de Informática y Telecomunicaciones en cuanto a cuestiones de carácter normativo y de oportunidad mérito y conveniencia que limitarían la competencia de este Tribunal de Cuentas. Sobre ello, y a fin de no ser extensos en el presente fundamento, nos remitimos a lo expresado oportunamente por el Secretario Legal en Informe N° 386/11 al analizar las observaciones 10 y 14 (a fs. 636), cuyos argumentos y doctrina invocada compartimos plenamente a los efectos de tener por debidamente acreditada nuestra competencia, y contestada en cabal forma las manifestaciones efectuadas.

Que del mismo modo, haciendo un análisis global de las observaciones formuladas, corresponde indicar a la Auditora Fiscal Interviniente y la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable que tengan presente para casos futuros las consideraciones efectuadas precedentemente respecto del control de "gestión" de la autoridad administrativa, el que deberá ser realizado con el alcance postulado por el doctrinario Domingo SESIN a fin de no persuadir a la administración a tomar decisiones que, constitucionalmente, quedan reservada a su propia esfera de competencia; ello, sin perjuicio de la responsabilidad que en el caso particular pueda sobrevenir a los responsables de esa "gestión" como consecuencia directa de una eventual actividad perjudicial para el Estado.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial N° 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27° del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Levantar las observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 del Acta de Constatación N° 614/11, mantenidas por Disposición Secretaría Contable N° 193/11, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Secretario de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Provincial, con copia certificada de la presente y con remisión del expediente del registro de la Gobernación N° 3830 SG/2011, caratulado: "S/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PRINCIPAL DE LA PROVINCIA"; y en el Tribunal, al Secretario Legal, a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable y a la Auditora Fiscal C.P. Lorena RETAMAR.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar, cumplido ello archivar.-

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 479

29-12-11

VISTO: El Expediente originario del registro del Tribunal de Cuentas Letra TCP PR Nº 258/2011 caratulado "S/ INCORPORACION DE AUDITOR MEDICO PARA EL TCP ", y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita el llamado a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Auditor Médico - Categoría A3, conforme procedimiento dispuesto mediante Resolución Plenaria Nº 437/11.

Que se han cumplido las instancias de Evaluación de Antecedentes y de Entrevistas, según surge de las Actas labradas por la Comisión Evaluadora obrantes a fs. 123/127, de las cuales resulta, en relación a la única postulante válidamente inscripta y que se presentó a cumplimentar cada instancia, los puntajes obtenidos y su incorporación en consecuencia, al listado que establece el Orden de Mérito.

Que en razón de lo expuesto, procede comunicar a la profesional participante, los resultados obtenidos, ello a los efectos previstos en el Anexo I, Punto B)- IV - 1) a) de la Resolución Plenaria Nº 437/11.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por los artículos 26 inciso c), 27 y 81 de la Ley Provincial Nº 50.

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE**

ARTICULO 1º.- Hacer saber los resultados obtenidos en las instancias de Evaluación de Antecedentes y de Entrevistas previstas en el presente concurso, ello de acuerdo al detalle obrante en Anexo I, y conforme a las constancias que resultan del Acta de la Comisión Evaluadora obrante a fs. 124/127.

ARTICULO 2º.- Hacer saber a la postulante Celina GIORDA, que integra el Orden de Mérito, según el cual el Plenario de Miembros oportunamente y de quedar firme, resolverá la designación del cargo concursado.

ARTICULO 3º.- Notificar a la interesada con copia certificada de la presente, en el domicilio constituido, haciendo saber que cuenta con un plazo de cinco (05) días, contados a partir de la notificación, para interponer recurso de reconsideración, conforme lo dispuesto en el Anexo I, Punto B)- IV - 1) a) de la Resolución Plenaria Nº 437/11.

ARTICULO 4º.- Reservar las actuaciones en Secretaría Privada del Cuerpo Plenario durante el transcurso del plazo previsto en el artículo precedente.

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boleín Oficial, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 480

29-12-11

VISTO: El expediente del Registro de la Gobernación de la Provincia, Nº 008639, Letra MO, año 2011, caratulado "S/ ACTA DE MEDICION Y CERTIFICADO DE OBRA Nº 1, CDTE. A LA OBRA "REFACCIONES VARIAS 3º EDAD Y DISCAPACIDAD A CARGO DE SUR INSTALACIONES", y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones resultan remitidas para tratamiento del Cuerpo Plenario en el marco del Control Preventivo previsto en Resolución Plenaria Nº 01/01, en las que tramita el Certificado de Obra Nº 1 de la Obra "Refacciones Varias 3º Edad y Discapacidad - Ushuaia" que fuera aprobada por Resolución Subsec. Inf. Z. S. Nº 016/2011 de fecha 11 de julio de 2011 (fs. 48).

Que a fojas 52/53 obra Informe Técnico Nº 289/11 Letra: SC-GEOP-AREA TÉCNICA mediante el cual el Auditor Arq. Víctor Hugo ORTEGA analiza las actuaciones concluyendo que no tiene observaciones ni recomendaciones de índole técnicas que formular.

Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente el Auditor señala que en las vistas fotográficas glosadas a fojas 24/7 el Representante Técnico de la contratista estampa un sello del Banco Provincia de Tierra del Fuego, lo cual en principio ameritaría un análisis a fin de determinar una posible incompatibilidad de

funciones.

Que en fecha 28 de julio de 2011 el Secretario Legal del Organismo, Dr. Sebastian OSADO VIRUEL, emite Informe Legal Nº 247/11 Letra: T.C.P.-S.-L. (fs. 57/60) en el que luego de hacer un análisis jurídico de las posibles incompatibilidades del representante técnico de la contratista concluye que: "...En virtud de lo expuesto -insisto- siempre que se verifique que el arquitecto mencionado efectivamente revista como agente dependiente del Banco de Tierra del Fuego, la cuestión debería ser escindida en dos aspectos diferentes:

Por un lado, la cuestión ética del profesional por haber incurrido en una eventual incompatibilidad, debe quedar elucidada a través de los procedimientos propios del Ente empleador y/o colegio profesional competente.

Por otra parte, si el Pliego de Bases y condiciones de la contratación estableciera la obligación de la empresa adjudicataria, se encuentre desvinculado de forma permanente a la obra, debería exigirse a la contratista el reemplazo del arquitecto Ernesto O. GIAMBRONI en tal carácter, por la imposibilidad material manifiesta, emergente de su dependencia laboral con la entidad bancaria...".

Que en fecha 29 de julio de 2011 y en el marco del procedimiento de Control Preventivo a fojas 61/67, toma intervención la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLON mediante Acta de Constatación Nº 90/11, formulando cuatro (4) observaciones, las cuales señalan: "...1. Se observa la extemporaneidad en el dictado de la Resolución MoySP Nº 403/11, copia fiel obrante a fs. Ref. 39/40, dictada con fecha 15/06/2011 por la cual se reconoció el plan de trabajos con fecha de inicio 08/04/2011 y finalización 07/06/2011. Ello, configura un incumplimiento del Art. 2º del Dto. Provincial Nº 73/03 y del ARTÍCULO 18º C.E. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN, del pliego de bases y condiciones, correspondiente, por tanto, la aplicación del inciso D) del Régimen de Multas.

2. De conformidad con el Art. 31º C.E. "Insufmas a proveer" del pliego de bases y condiciones, correspondió entregar los insumos allí previstos dentro de los diez (10) días siguientes al acta de inicio de obra. Atente a lo establecido en el Art. 26º C.E. "Forma y plazo de pago de los certificados", incisos 8), que requiere "Constancia de entrega de insumos para la inspección si así correspondiera", deberá acreditar su cumplimiento. El incumplimiento de la obligación de entrega de los insumos para la inspección se encuentra previsto en el inciso m) del Régimen de Multas, correspondiendo por tanto su aplicación.

3. Asimismo, corresponde acreditar el cumplimiento del Art. 26º C.E. "Forma y plazo de pago de los certificados", inciso 6), en cuanto exige la "Acreditación de que las pólizas se encuentran vigentes y actualizadas" (V.gr. Garantía de ejecución de contrato, seguros, etc.). Téngase presente que solo se agregó copia de una póliza, la cual refiere a riesgos de accidente personales de la inspección.

4. Verificadas las fojas 24/27 se constata que el cargo del firmante no guarda relación con el carácter requerido para las fojas que se suscriben, esto es el "representante técnico", conforme lo previera por el Punto 3.1 Aclaración de firma, del Dto. Territorial Nº 4144/86. Se advierte que en las mencionadas fojas se consigna "Arq. Ernesto O. Giambroni, Obras y Servicios Banco Tierra del Fuego". En relación a este tema se ha expedido el Secretario Legal de este órgano, mediante Informe Legal Nº 247/2011 de fecha 28 de julio de 2011 (fs. 57/60). Como consecuencia de lo anterior, a fin de evaluar la regularidad de la situación detectada, la Comiteente deberá instrumentar los medios tendientes a determinar si el Arquitecto Ernesto Giambroni se desempeña laboralmente en el Banco Provincia de Tierra del Fuego, y si el ejercicio simultáneo de las funciones examinada configura alguna incompatibilidad.

Para ello, la Administración deberá: a) dar intervención a la entidad bancaria mencionada, a fin de que se expida respecto de ambas cuestiones y, b) incorporar un informe, de donde surja expresamente la fama de conocimiento de la situación planteada, y la evaluación de pertinencia y/o conveniencia de ello, en función de la dedicación personal que se le exige al representante técnico...".

Que mediante Inf. Nº 2297/2011 de fecha 16 de agosto de 2011, glosado a fojas 83, el Director de Administración y Despacho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos acompaña los descargos en relación a los reparos formulados, ello en sustento a la documentación obrante a fojas 68/82 compuesta de Copia de la Póliza de Caución en garantía de Ejecución de Contrato (fs. 68/72), Informe 1325/11 Letra: D.R.Z.S.-M.O.y.S.P (73/74) mediante la cual el Inspector de Obra, en fecha 12 de mayo de 2011, informa que la contratista el día 12 de abril de 2011 hizo entrega de la totalidad de los insumos detallado en el artículo 31º C.E. "INSUMOS A PROVEER" y Nota Nº 1849/11 Letra: Subs. Inf. Z. S. M.O.y.S.P. (fs. 75) por la cual la

Jefe del Departamento Área Técnica del SIZS-MOySP informa al Departamentos Compras y Patrimonio que por intermedio del expediente N° 8262/MO 2010 se hizo entrega de una cámara Digital compacta y a fojas 76 corre glosada Nota N° 323/2011 Letra: D.P.yS. de fecha 19 de julio de 2011 mediante la cual la Dirección de Patrimonio informa que por problemas de índole técnica con el sistema SIGA resulta imposible proceder al alta del bien de uso y posterior generación de la planilla de cargo correspondiente.

Que asimismo vinculado con la observación N° 1 el jefe de Departamento de Certificaciones indica a fojas 78 que "...Se tomó debido conocimiento de lo expresado tanto por esta Dirección, como así también la Inspección de Obra respecto de esta situación. Para la pronta solución de lo observado respecto de la extemporaneidad éste Ministerio ha procedido a emitir Circular N° 09/11 de la cual se adjunta copia a fs. 77...".

Que a fojas 79 corre agregada Nota N° 2504/11 Letra: Subs. Inf. A.S. DAIZS mediante la cual el Subsecretario de Infraestructura Zona Sur del M.O.yS.P. solicita al Presidente del Banco Provincia de Tierra del Fuego, informe al Arq. Ernesto C. GIAMBRONI revista como empleado de dicha entidad ello en consideración a que se desempeña como representante técnico del contratista que está llevando adelante una obra en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la cual es respondida por el Banco mediante Nota S.G. N° 203/2011 (fs. 81) señalando que dicho profesional se desempeña como empleado de esa institución y que la circunstancia señalada por el Auditor Fiscal está siendo analizada por las instancias internas de la entidad crediticia.

Que en fecha 31 de agosto de 2011 la Auditora Fiscal, mediante Informe N° 387/2011 Letra: TCP-AOP (fs. 84/91) analiza los descargos presentados y propicia el mantenimiento de las cuatro (4) observaciones, indicando en relación a la N° 1 que "Atenta la naturaleza del reparo, y analizado el descargo, se desprende que aquel revestía el carácter de insalvable. No obstante la expresada me remito al apartado final del presente informe en el que se sugiere efectuar nuevo reparo en virtud de los términos allí detallados..."

Que en relación a la observación N° 2 señala que: "Analizada la documentación incorporada a fs. 73/76, se desprende preliminarmente que se trata de fotocopias intervenidas y firmadas con sello de "copia de copia", por lo que no se ha dado debido cumplimiento al Art. 40 de la Ley 141. No obstante, de su lectura y considerando la copia fiel del acta de inicio de obra, que luce a fs. 28, con fecha 08/04/2011, cabe inferir que se ha dado cumplimiento con la entrega de insumos en el tiempo debido. Por ella salvo mejor criterio se sugiere mantener el reparo formulado, hasta tanto el Ministerio proceda a certificar debidamente los fotocopias incorporadas, y procure la emisión, a la mayor brevedad posible, de las respectivas planillas de cargo patrimonial a fin de acreditar el debido registro de los bienes ingresados al patrimonio del Estado Provincial. Por otra parte se informa a esa Secretaría Contable que, en oportunidad de la intervención del expediente que tramita el Certificado N° 2 de la presente obra (Expte. 10587-MO-11) se constató la incorporación de copias de facturas referidas a los insumos en las cuales se verificó como fecha de entrega de los mismos el día 19/04/11, motivo por el cual se solicitó descargo al respecto en el apartado V-NOTA, numeral 1 del Acta de Constatación correspondiente a la tramitación mencionada. Se destaca que la importancia de la fecha de recepción de los insumos resulta ser un requisito esencial en cuanto a lo previsto del pliego de bases y condiciones respecto al momento de entrega de los mismos y la sanción por incumplimiento, en su caso..."

Que respecto a la observación N° 3, luego de analizar la documentación agregada por el cuentadante la Auditora Fiscal señala "Verificada la documental obrante a fs. 68/71, se desprende que también se trata de fotocopias simples ("copias de copia"), por lo que nuevamente se incumple el Art. 40 de la Ley 141. Sin perjuicio de ello, no se acredita la cobertura de seguro de responsabilidad extracontractual, inciso a) del régimen de seguros (fs. 171 del expediente principal). Por tanto, se aconseja mantener la observación hasta tanto se de total cumplimiento a la requerido..."

Que finalmente, en relación a la observación N° 4 destaca que "...Vista la documentación referida en el descargo, cabe inferir que se han activado los mecanismos tendientes a evaluar si la situación detectada configurará irregularidad alguna, y asimismo en su caso evitar la reiteración de situaciones similares en el futuro. No obstante lo expuesto, y con la confirmación del desconocimiento de tal situación por la Inspección de obra, entiende quien suscribe que lo contratista deberá acreditar documentadamente ante el comitente el cumplimiento de la establecido en el punto 6.1 de los cláusulas generales del pliego de bases y condiciones, en particular lo dispuesto en los párrafos primero y quinto, a fin de evaluar si corresponde o no la

aplicación de la multa prevista el inciso f) del régimen correspondiente. Ante ello, elevo a su consideración por considerar que en la instancia de las presente el reparo formulado deberá mantenerse hasta tanto se verifique lo indicado en primer término, destacó que por otra parte que, en oportunidad de la verificación de las tramitaciones que contienen el Certificado N° 2, en las cuales también abra acta de recepción provisoria, las mismas han sido objeto de numerosos reparos de índole técnica, entre otros, los que contrastan con la indicado pro el inspector de obra que formula el descargo..."

Que por otra parte la Auditora Fiscal sugiere observar la falta de aplicación de lo dispuesto por el inciso i) del Régimen de Multas, por cuanto no consta en ninguna de las actuaciones referidas en la presente obra, disposición alguna al respecto, máxime teniendo en cuenta que la totalidad de la obra se desarrolló sin un plan de trabajos presentado por la contratista y aprobado en forma oportuna por la autoridad competente.

Que por Disposición Secretaría Contable N° 153/2011 de fecha 08 de septiembre de 2011 se comparte lo actuado hasta el momento por la Auditora Fiscal y en consecuencia se mantienen las cuatro (4) observaciones labradas mediante Acta de Constatación N° 90/11 y se realizan dos (2) nuevas observaciones vinculadas con la falta de aplicación del Régimen de Multas en consideración al desarrollo de la obra sin plan de trabajos y con la falta de acreditación del cumplimiento de lo estipulado en el punto 6.1 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones en cuanto a la permanencia en la obra del representante técnico de la contratista.

Que mediante Inf. N° 3056/2011 en fecha 03 de noviembre de 2011 el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos M.M.O. Manuel BENEGAS (fs. 107) remite en apelación al cuerpo Plenario de Miembros las actuaciones, solicitando se consideren los descargos presentados, conforme los argumentos que obran a fojas 97/106 en relación a las observaciones 2, 3 y 4 y las nuevas labradas por la Secretaría Contable, destacando el carácter de insalvable de la Observación N° 1.

que en fecha 17 de noviembre de 2011 la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable C.P.N. María Laura PEREZ TORRE, mediante Informe N° 521/11 Letra: T.C.P.-S.C. (fs. 108/110) analiza la presentación realizada por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, entendiendo que ningún elemento agrega que permita levantar las observaciones oportunamente formuladas.

Que preliminarmente corresponde dejar sentado que el plazo que tiene el cuentadante para interponer recurso de apelación ante el Plenario de Miembros es de cinco (5) días, conforme lo previsto en el inciso f) del Punto 4 de la Resolución Plenaria N° 01/01, según redacción de Resolución Plenaria N° 89/02 en cuanto establece que: "...El cuentadante, de así creerlo conveniente, podrá apelar la disposición del Secretario Contable ante el Plenario de Miembros contando para ello con un plazo perentorio de cinco (5) días contados desde la notificación fehaciente del acta..."

Que bajo tales consideraciones se observa, a fojas 96, que la Auditora Fiscal el día 08 de septiembre de 2011 remite las actuaciones a la Contaduría General y recién vienen en apelación, según luce a fojas 107, en fecha 03 de noviembre de 2011, por lo que a todas luces resulta que el recurso de apelación fue interpuesto en forma extemporánea.

Que, no obstante lo señalado y a fin de permitir que el cuentadante puede continuar con el trámite de insistencia previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50 y Punto 4 inciso g) de la Resolución Plenaria N° 01/01, en aras del cumplimiento del compromiso asumido por el Estado, se propicia dar formal trámite a dicho recurso.

Que bajo las premisas señaladas cabe indicar que en razón de los antecedentes obrantes en el expediente, las consideraciones formuladas por la Auditora Fiscal, lo expresado en la Disposición de Secretaría Contable y el descargo presentado por el cuentadante, corresponde mantener la observación N° 1 labrada por la Auditora Fiscal en el Acta de Constatación N° 90/11, toda vez que ningún elemento que haga revertir la posición adoptada ha aportado el cuentadante, la cual resulta de carácter insalvable en consideración a que el artículo 18° C.E. del Pliego de Bases y Condiciones señala que "...dentro de los cinco (5) días corridos de firmada el Acta de Inicio, el Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, el plan de trabajos a que debe ajustarse la ejecución de la obra..."

Que conforme se observa a fojas 28 obra copia del Acta de Inicio de Obra labrada el 08 de abril de 2011 y el Plan de Trabajo, conforme surge a fojas 40, tiene fecha 13 de junio de 2011, y resulta aprobado por Resolución M.O.yS.P. N° 403/11 en fecha 15 de junio de 2011, cuando la obra de acuerdo a dicho plan tenía fecha de finalización el 07 de junio de 2011.

Que en relación a la observación N° 2 propicio su levantamiento toda vez que cotejando el expediente N° 8262-MO-10 se observa que las copias agregadas a fojas 73/76 de las actuaciones bajo análisis resultan ser copias fieles de la documental que obra a fojas 483, 485, 522 y 523 de aquel, de las que surge que en fecha 12 de abril de 2011 el contratista hizo entrega de los insumos descriptos en el artículo 31° del C.E. del Pliego de Bases y Condiciones, y a fojas 100 obra el correspondiente cargo patrimonial N° 00680 de la Cámara Fotográfica entregada por el contratista, por lo cual emerge que la misma fue entregada en el plazo estipulado por el pliego, esto es dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha del Acta de Inicio de Obra que aconteciera el 08 de abril de 2011.

Que en relación a la observación N° 3 se propicia su mantenimiento atento el carácter de insalvable de la misma toda vez que el artículo 26° C.E. del Pliego de Bases y Condiciones establece que a los efectos del pago de los certificados el contratista deberá dar cumplimiento a una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra la acreditación de que las pólizas contratadas se encuentran vigentes y actualizadas.

Que en relación a lo indicado, en el capítulo SEGUROS del Pliego se establece que el adjudicatario contratara una póliza de responsabilidad extracontractual, que deberá ser presentada con antelación no inferior a los diez (10) días hábiles de la iniciación de los trabajos, y en las actuaciones no se acreditó el cumplimiento de dicha obligación, toda vez que la copia de la Póliza agregada a 68 a 71 cubre la garantía de contrato y no la responsabilidad extracontractual del contratista como lo requiere el pliego, circunstancia que resulta ratificada en el descargo presentado por el Inspector de Obra a fojas 98 en tanto señala "Estando finalizada la obra, la solicitud de cobertura y la presentación en esta instancia resultarían extemporáneas, interpretándose que las mismas no podrán ser con efecto retroactivo...".

Que en lo que respecta a la observación N° 4 corresponde sea levantada toda vez que a fojas 79 y 81 obran los antecedentes de la puesta en conocimiento del Banco Provincia de Tierra del Fuego, a fin de que dicha entidad manifieste sobre alguna eventual incompatibilidad del Representante Técnico del Contratista en consideración a que el arquitecto GIAMBRONI resulta ser agente de la entidad crediticia, ello conforme lo señalado por el Secretario Legal en el Informe Legal N° 247/2011 Letra: T.C.P.-S.J..

Que asimismo a fojas 99 obra presentación formulada por la contratista en la que pone de manifiesto que el representante técnico de la misma cumplió su labor profesional conforme le fuera requerido, por lo que deberá ser su empleador, Banco Provincia de Tierra del Fuego, quien en última instancia, y de así corresponder, le reproche a su dependiente la falta al débito laboral en la que eventualmente pueda haber incurrido.

Que asimismo en relación a las observaciones plasmadas en artículo 2° de la Disposición Secretaría Contable N° 152/11 corresponde sea dejada sin efecto toda vez que del procedimiento señalado por la Resolución Plenaria N° 01/01 a la Secretaría Contable al intervenir en el trámite del Control Preventivo, solo le corresponde, previo análisis de los antecedentes y en forma fundada, mantener o levantar las observaciones formuladas por el Auditor Fiscal en la correspondiente Acta de Constatación, criterio que fue plasmado en el expediente Expediente del Registro de la Gobernación de la Provincia, N° 017587, Letra MO, año 2010, caratulado "S/ REFACCIONES VARIAS PEQUEÑO HOGAR USHUAIA".

Que al respecto en el marco de tales actuaciones se expidió el área legal del Organismo mediante Informe Legal N° 336/2011 Letra: T.C.P.-C.A., en el cual se señaló que: "...IV.- DEL ART. 4° DE LA DISPOSICIÓN SECRETARÍA CONTABLE N° 111/2011. Expresamente dice el art. 4° de la Disposición Secretaría Contable N° 111/2011, lo siguiente: "...ADVERTIR el estricto cumplimiento de la Ley N° 141 Decreto Provincial N° 2242/94 Artículo 9°) y Decreto Provincial 4144/46 Punto 1.1.14 en lo que respecta a la incorporación de antecedentes a los expedientes, en un todo de acuerdo a lo plasmado en la Observación N° 6..."

En tal sentido, la Observación N° 6 del ACTA DE CONSTATAción TCP N° 67/11 AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS.- (Control Previa - Administración Central), dice: "...Verificada la foja 346 y advirtiéndose la fecha de emisión del día 15/12/10, respecto de la misma no se acredita la fecha de la presentación e incorporación a las actuaciones, toda vez que resulta posterior a la apertura de ofertas..."

Sin ultimar en el fondo de la cuestión, toda vez que el expediente se encuentra en la etapa de control previo, el cuentadante puede corregir, modificar o deslistar el acto en los términos de los reparos efectuados por el Auditor Fiscal (Punto 4 inciso D, de la Resolución Plenaria 1/01), quedando sin efectos las observaciones realizadas.-

Asimismo el cuentadante, podrá ejercer su derecho de defensa sometiendo a un nuevo análisis del Auditor Fiscal, el que será remitida al Secretario Contable, quien deberá realizar una nueva evaluación.

En tal sentido, el Punto 4 Inciso E, de la Resolución Plenaria 1/01 expresamente dice: "...En caso que la autoridad no se conformase con los reparos efectuados por el Auditor Fiscal, deberá acompañar circunstanciada fundamentación, conjuntamente con los antecedentes respectivos. El expediente será remitido al Secretario Contable del Tribunal, quien en el plazo de dos (2) días, mediante disposición, evaluará las actuaciones y mediante disposición podrá: 1.- Levantar los reparos formulados. 2.- Ratificar los reparos realizados por el auditor fiscal en cuya casa remitirá las actuaciones al cuentadante..."

En su caso, podrá apelar la disposición de la Secretaría Contable, (punto 4 inciso D, de la Resolución Plenaria 1/01, modificada por el art. 2° de la Resolución Plenaria N° 89/02).-

Por lo expuesto en este punto, es que considera que la "Advertencia" realizada en el art. 4° de la Disposición Secretaría Contable N° 111/2011, no se ajusta a las facultades conferidas a la Secretaría Contable, conforme la determina el Punto 4 inciso E, de la Resolución Plenaria 1/01.-

En consecuencia, y toda vez que la Observación N° 6 del ACTA DE CONSTATAción TCP N° 67/11 AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS, solo puede ser levantada o ratificada, la advertencia expresada en el art. 4° de la Disposición Secretaría Contable N° 111/2011, debe ser dejada sin efecto..."

Que por lo expuesto las Observaciones obrantes en artículo 2° de la Disposición Secretaría Contable N° 152/2011 corresponde sean dejadas sin efecto.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 Inciso g) y 27 de la Ley Provincial N° 50.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Mantener las observaciones N° 1 y 3 labradas mediante "Acta de Constatación TCP N° 90/11 - Auditoria Obras Públicas" de fecha 20 de julio de 2011, mantenidas por Disposición Secretaría Contable N° 152/2011, ello de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO 2°: Levantar las observaciones N° 2 y 4 labradas mediante "Acta de Constatación TCP N° 90/11 - Auditoria Obras Públicas" de fecha 20 de julio de 2011, mantenidas por Disposición Secretaría Contable N° 152/2011, ello de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO 3°: Dejar sin efecto las Observaciones obrantes en artículo 2° de la Disposición Secretaría Contable N° 152/2011, ello por los fundamentos expuestos.

ARTICULO 4°: Hacer saber al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos que en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley 50 podrá, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, insistir en el cumplimiento del acto observado.

ARTICULO 5°: Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos con remisión del Expediente del Registro de la Gobernación de la Provincia, N° 008639, Letra MO, año 2011, caratulado "S/ ACTA DE MEDICION Y CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CDTE. A LA OBRA "REFACCIONES VARIAS 3° EDAD Y DISCAPACIDAD A CARGO DE SUR INSTALACIONES", a la Auditora Fiscal interviniente y a la Secretaría Contable de este Tribunal.

ARTICULO 6°: Registrar, Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

VISTO: El expediente del Registro del Instituto Provincial de Viviendas EPV 3012/10, caratulado "OBRA 72 VIVIENDAS B° MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE", y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones resultan recibidas para tratamiento del Cuerpo Plenario en el marco del Control Preventivo previsto en Resolución Legales N° 01/01, en las que tramita la obra denominada "72 VIVIENDAS B° MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE" aprobada por Resolución I.P.V. N° 821/11 (fs. 16/17).

Que las actuaciones fueron intervenidas por el Tribunal de Cuentas mediante Informe Técnico N° 386/11 Letra: SC-GEOP-AT (fs. 513/516) y Acta de Constatación N° 364/11 (fs. 519).

Que luego del trámite de rigor previsto por Resolución Plenario N° 01/01 en fecha 02 de noviembre de 2011 se emite Disposición Secretaría Contable N° 188/11 mediante la cual se mantiene la Observación indicada en el punto 1° del Acta de Constatación N° 364/11.

Que la Observación N° 1 refiere "Se compare **OBSERVACIÓN N° 1 del Informe Técnico N° 386/11 LETRA SC - GEOP - AT: 1.** Esta Área Técnica entiende que las cláusulas del Pliego que refieren a la expresada en puntos C.4. y C.5. del presente, limitan la posibilidad de presentación de ofertas que aún sin contar con esos requisitos, estarían en condiciones de resultar ofertas admisibles y convenientes. Esto resulta evidente al momento de tener en cuenta que tratándose de una Licitación Pública Nacional y ante una obra de esa magnitud, sólo se recibió una oferta, siendo ella de una Empresa de la Ciudad de Río Grande. Por lo expuesto se considera que han sido violados los principios de Igualdad y Concurrencia que deben imperar en todas las contrataciones del Estado, como así también el Artículo 3° del Decreto Nacional 1254/90."

Que en fecha 07 de diciembre de 2011, mediante Nota N° 1794 Letra: IPV (P) el Presidente del Instituto Provincial de Viviendas M.M.O. José Luis DEL GIUDICE apela ante el Plenario de Miembros la Disposición Secretaría Contable N° 188/11, en el entendimiento que lo dispuesto por Acuerdo Plenario N° 2233, de fecha 23 de noviembre de 2011 emitido en el marco del Expte. del Registro del IPV N° 835/11 caratulado "REF. 80 VIVIENDAS URP USHUAIA" le resulta aplicable a las presentes actuaciones, ello a fin de levantar la observación que fuera mantenida por la Secretaría Contable.

Que en fecha 21 de diciembre de 2011 se emite Informe Legal N° 440/2011 Letra: T.C.P.-C.A. suscripto por la Dra. Andrea Fabiana FURTADO (fs. 540/556), señalando al respecto que: "...Comenzando su análisis, cabe señalar que el reparo sostenido por la mencionada Disposición, y que resulta materia de consulta en esta instancia, se efectuó en los siguientes términos: "1) Se compare **OBSERVACIÓN N° 1 del Informe Técnico N° 386/11 LETRA SC - GEOP - AT: 1.** Esta Área Técnica entiende que las cláusulas del Pliego que refieren a lo expresado en puntos C.4. y C.5. del presente, limitan la posibilidad de presentación de ofertas que aún sin contar con esos requisitos, estarían en condiciones de resultar ofertas admisibles y convenientes. Esto resulta evidente al momento de tener en cuenta que tratándose de una Licitación Pública Nacional y ante una obra de esta magnitud, sólo se recibió una oferta, siendo ella de una Empresa de la Ciudad de Río Grande. Por lo expuesto se considera que han sido violados los principios de Igualdad y Concurrencia que deben imperar en todas las contrataciones del Estado, como así también el Artículo 3° del Decreto Nacional 1254/90."

Por su parte, los Puntos C.4. y C.5. del Informe Técnico Letra: SC - GEOP - AT N° 386/11 elaborado por el Auditor Arq. Luis DONNARUMMA, indican: "...C.4. A fs. 31, inciso h), se exige la presentación de un detalle de antecedentes empresariales correspondientes a los últimos diez (10) años, de obras de arquitectura ejecutadas por el oferente en el ámbito de la Provincia. C.5. A fs. 35, ítem. Párrafo, se define como "condición indispensable para resultar adjudicatario", la presentación detallada en punto inmediato anterior, estableciendo además como condición, la demostración de haber construido como mínimo una cantidad igual a la ofertada en obras de similares características. Cabe destacar, que esta condición que impone el Pliego se contrapone con lo establecida en los Considerandos y en los Artículos 2° y 3° del Decreto Nacional N° 1254/90."

El descargo pertinente fue efectuada por el Director General del Área Técnica del ente Arq. Roberto O. CAMIO, a través de la Nota I.P.V. (A.T) N° 833/11, argumentando que el Decreto citado anula todo otro tipo de registro que no sea el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, por lo cual el ente

mantiene para todos los contrataciones de obras, la supervisión, aprobación y afectación de fondos que realiza el citado Registro como único organismo de control. Agregando que en el Punto 2.2.2. h) del Pliego de Bases y Condiciones aprobada por la Resolución I.P.V. N° 821/11 se solicitan, además, antecedentes empresariales de obras ejecutadas en el ámbito de la Provincia, como condición indispensable para resultar adjudicatario, dado que dicha circunstancia garantiza el conocimiento de las condiciones propias del lugar (climáticas, estacionales, remuneración de mano de obra, provisión de insumos, etc.), y el hecho de haber trabajado en obras con el Estado Provincial como forma de una acción y de cumplimiento de inscripciones en la Provincia. Destacando que la concurrencia al llamado, poca o mucha, puede deberse a infinidad de factores, siendo posible que ésta sea una de esas causas, señalando que, sin embargo, alguna empresa realizó algún trabajo al respecto en las sedes de venta del Pliego. E indicando que, no obstante lo expuesto, se tenía en cuenta lo observado para futuras licitaciones.

El referido descargo fue analizada por el Auditor a través del Informe Técnico Letra: SC - GEOP - AT N° 423/11, considerando que no se aportan elementos objetivos suficientes que brinden alguna justificación a la observación respecto de los principios de Igualdad y Concurrencia. Indicando que si bien el antecedente de haber ejecutado obras en la Provincia puede garantizar el conocimiento de las condiciones climáticas del lugar, ella no implica que otras empresas en el país no posean la capacidad para ejecutarlas. Expresando que "...La norma IRAM 11603 divide al país en seis zonas bioclimáticas. Tierra del Fuego se encuentra en la zona VI (Muy frío) junto con la mayor parte de Santa Cruz, parte de Chubut, Neuquén y Río Negro. Esta división se establece según datos climáticos y días de diseño para invierno y verano, que se utilizan en la verificación de la calidad térmica de los edificios y recomendaciones de diseño para condiciones micro climáticas específicas. Estando definido los parámetros de diseño para las distintas zonas bioambientales, cualquier empresa en el país con la capacidad adecuada está en condiciones de ejecutar una obra como la que se tramita mediante el presente expediente."

Este criterio resultó compartido tanto por la Auditora Fiscal a través del Informe Letra: T.C.P. - Delegación IPV N° 478/11, resaltando que la observación busca en forma inequívoca garantizar los principios de Igualdad y Concurrencia que deben imperar en todas las contrataciones del Estado y a tal fin debe darse una clara redacción a los requisitos solicitados, sin que afecten tales principios. Así como por la Prosecretaría Contable a cargo de la Secretaría Contable mediante la Disposición S.C. N° 188/11, por cuyo Artículo 1° se mantiene la observación contenida en el Punto 1) del Acta de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previo) N° 364/11. Levantando las reparos efectuados en sus Puntos 2) y 3).

Devueltas las actuaciones al organismo, mediante la Nota Letra: I.P.V. (A.T.) N° 1003/11, el Director General del Área Técnica solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales, a los efectos de indicar el procedimiento a seguir, atento lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 2233, incorporada en copia a fs. 539/545, emitido en el marco del Expediente del registro del Instituto Provincial de Vivienda N° 835/11, caratulado: "REF. 80 VIVIENDAS URP USHUAIA".

En consecuencia, se origina la Nota Letra: IPV (DGAIN) N° 262/11, en la cual se indica que, atento el nuevo hecho dado por el citado Acuerdo Plenario, dando se levantan las observaciones que se han mantenida en las presentes actuaciones, procede remitir las actuaciones a este Tribunal a los efectos que sea levantada la observación mantenida por la Disposición S.C. N° 188/11 y seguir la tramitación pertinente.

Por tanto, mediante la Nota Letra: IPV (P) N° 1794/11, el Presidente del ente M.M.O. José Luis DEL GIUDICE, remite las actuaciones al Presidente de este Tribunal de Cuentas, a fin que sea tratado por este organismo de control, y se expida acerca de si el Acuerdo Plenario N° 2233 resulta de aplicación a ellas.

II.- Con lo cual, y en función de la intervención conferida a la Secretaría Legal por el Sr. Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia a fs. 547, seguidamente analizaré la observación efectuada en el Punto 1) del Acta de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previo) N° 364/11, a la luz de lo dispuesto por el referido Acuerdo Plenario, en el cual se sustenta la presentación del titular del I.P.V.

Desde el punto de vista formal, considero, cabe imprimir a dicha presentación el trámite de apelación de la Disposición S.C. N° 188/11 ante el Plenario de Miembros, prevista por el Punto 4 inc. F) del Anexo I de la Resolución Plenario N° 01/01, modificada por su similar N° 89/02.

No surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones la fecha de notificación fehaciente de la citada Disposición al interesado, en función de la cual, a mi criterio, por aplicación del artículo del

informalismo en favor del administrado recepcionado ~~entre otros~~ por el Artículo 3º de la Ley Provincial 141, procede ~~considerar~~ *interpuesta la apelación dentro del plazo previsto por la citada norma.*

En cuanto a la cuestión de fondo, cabe destacar que la observación mantenida por el Artículo 1º de la Disposición S.C. Nº 198/11, transcrita precedentemente, refiere sustancialmente a que los requisitos previstos en los Puntos 2.7.2 inc. h) y 3.2. inc. d.1) -último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública L.P.V. Nº 835/11, aprobado por la Resolución L.P.V. Nº 1121/11, vulneran los principios de Igualdad y Concurrencia, retores de ese procedimiento de selección del contratista, así como el Artículo 1º del Decreto Nacional Nº 1254/90.

Los Puntos cuestionados expresan: "2.7.2. Documentación que deberán contener los sobres: ... SOBRE Nº 2: ... h) Antecedentes empresariales: Se presentará un detalle (ANEXO IV), correspondiente a los últimos diez (10) años, de obras públicas de arquitectura ejecutadas por el oferente en el ámbito de la provincia, indicando en una planilla del tipo que se encuentra en el presente Pliego, superficies construidas y monto de inversión actualizada con la variación del índice INDEC CONSTRUCCIÓN NIVEL GENERAL entre el mes de la oferta y el mes del último índice conocido. Las obras se considerarán ejecutadas cuando cuenten, como mínima, con recepción provisoria. En el caso de obras con inicio anterior a diez años pero con fecha de recepción provisoria comprendida en los últimos diez años, se considerará la totalidad del monto del contrato actualizado. Para toda obra mencionada en la planilla deberá adjuntarse la documentación que avale los datos volcados (Contrato de Locación de Obra, Planilla de Cómputo y Presupuesto y Acta de Recepción Provisoria). ... 3.2. Metodología de evaluación y selección ... d.1) Respecta al Certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitación, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, deberá constatar como mínimo una capacidad de contratación para la Sección Arquitectura, según se detalla a continuación: ... Es condición indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente cuente con antecedentes de Obras Públicas de Arquitectura en ejecución o ejecutadas en los últimos diez (10) años en la Provincia, cuya superficie en obras de similares características resulte como mínimo de igual cantidad a la ofertada.".

Ahora bien, el Acuerdo Plenario Nº 2233, dispuso levantar las observaciones contenidas en los Puntos 1) y 3) del Acta de Constatación T.C.P. - L.P.V. (Control Previo) Nº 369/11, emitida en relación al Expediente del registro del Instituto Provincial de Vivienda Nº 835/11.

Conforme surge de sus términos, la observación que guarda relación con lo analizada en las presentes actuaciones es la efectuada en el Punto 3) del Acta de Constatación citada, siendo de similar naturaleza.

En el referido Acuerdo, el Plenario de Miembros discrepó con el criterio del Auditor, indicando que en el Pliego de Bases y Condiciones allí analizado, no se observaba que se impusiera un requisito que vulnerara los principios de Igualdad y Libre Concurrencia, pues conjuntamente con los antecedentes que la empresa debía presentar, se encontraban otros requisitos tales como las obligaciones laborales y previsionales, datos empresariales, equipo y personal técnico a afectar a la obra, planilla de cómputo y presupuesto, análisis de precios, declaración jurada MOT, que sirven para evaluar las condiciones empresariales y técnicas de la empresa y que, en definitiva, sirven para poder tomar una decisión en base a elementos objetivos en la elección del contratista. Señalando, asimismo, que no se vislumbraba cómo el solicitar la descripción de los antecedentes de obras realizadas por el oferente en los últimos diez (10) años, violentaba el principio de Igualdad y concurrencia, toda vez que los antecedentes requeridos no se refieren en ese caso a obras realizadas exclusivamente en la Provincia de Tierra del Fuego, sino a cualquier obra que se hubiere realizado en los últimos diez (10) años.

Efectivo, también, el referido Acuerdo Plenario una serie de actuaciones en lo atinente a los alcances que cabe atribuirle al principio de concurrencia, expresando en tal sentido que: "...lo que la Administración lograra mediante la aplicación de este principio es seleccionar la mejor oferta para comparar con quien la presentó. Es la posibilidad de elegir mejor la que facilita la concurrencia; porque a mayor cantidad de oferentes, mayores serán las opciones de escoger y, por ende, de obtener un elevado nivel de idoneidad del cocontratante que satisfaga las expectativas del ente que llama a concurso. Lo dicho no implica que en caso de que sólo se reciba una propuesta la licitación no pueda seguir su curso hasta la adjudicación y celebración del contrato, si aquella es admisible y conveniente, porque el desinterés que demuestran quienes habido podido participar y estaban anunciados del llamado no acuden a él está evidenciando que la oferta obtenida es la mejor a la cual puede aspirar la Administración. Por tanto es si el licitante pone trabas, condicionamientos o limitaciones que restrinjan irrazonablemente la participación de los interesados, porque entonces, la

concurrencia se encontraría estorbada no por falta de postulantes, sino por el establecimiento de recaudos que no sólo frustrarían la oposición o competencia, sino que, además atentarían contra la igualdad que, como ha quedado expresado, constituye otro de los principios específicos del procedimiento de selección" (COMADIRA, Julio Rodolfo, "La Licitación Pública", Editorial DEPALMA, pág. 7173). En el Pliego de Bases y Condiciones observado por el Auditor Fiscal, se requiere en el acápite "Antecedentes empresariales" que se presente un detalle correspondiente a los últimos diez años, de obra públicas de Arquitectura ejecutadas y en ejecución indicando superficies construidas por obra y monto de inversión actualizada con el último índice conocido del INDEC construcción nivel general. Sin embargo, a partir del análisis del Dr. COMADIRA, puede concluirse que en este caso ese requisito, al no resultar un extremo excluyente, no implica un condicionamiento a tanta irrazonable, sino que guarda relación con el objeto de la contratación. Por lo que no se vulnera con ese recaudo el principio de concurrencia...". (Del Voto del Vocal Abogado en ejercicio de la Presidencia)

III.- Analizadas las consecuencias obrantes en los presentes actuaciones, en mi opinión, la decisión adoptada por el Acuerdo Plenario Nº 2233, no resulta aplicable en relación a la observación contenida en el Punto 1) del Acta de Constatación T.C.P. - L.P.V. (Control Previo) Nº 364/11, mantenida por la Disposición Secretaría Contable Nº 189/11. Ello así, por cuanto, a mi criterio, las circunstancias planteadas en el Expediente L.P.V. Nº 835/11, analizado en el citado Acuerdo, que motivaron el levantamiento de la observación contenida en el Punto 3) del Acta de Constatación T.C.P. - L.P.V. (Control Previo) Nº 369/11, no se configuran en las presentes actuaciones.

En efecto, en este caso el Pliego de Bases y Condiciones exige en su Punto 2.7.2. inc. h) la presentación de un detalle de obras públicas de arquitectura ejecutadas por el oferente en el ámbito de la Provincia correspondiente a los últimos 10 años, indicando en relación a este requisito el Punto 3.2. inc. d.1) del Pliego, que resulta condición indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente cuente con antecedentes de Obras Públicas de Arquitectura en ejecución o ejecutadas en los últimos diez (10) años en la Provincia, cuya superficie en obras de similares características resulte como mínimo de igual cantidad a la ofertada.

En función de lo cual, entiendo, en el caso de la Licitación tramitada por las presentes actuaciones este requisito, al resultar una condición indispensable para la adjudicación, aparece como un requisito que condicionamiento o limitación que restringe irrazonablemente la participación de los interesados en el presente procedimiento; vulnerando los principios de Igualdad y Concurrencia retores de la Licitación Pública, tal como observan los Auditores intervinientes y la Secretaría Contable.

En tal sentido, con el análisis efectuado por el Auditor en su Informe Letra: SC -GEOP-AT Nº 423/11, queda clara que el conocimiento de las condiciones propias del lugar, invocado por el Director General del Área Técnica en su descargo como fundamento de este requisito, no constituye un elemento objetivo que permita justificar tal exigencia en una Licitación Pública Nacional.

Si, entiendo, le asiste razón en cuanto que este recaudo no vulnera las normas contenidas en el Artículo 3º del Decreto Nacional Nº 1254/90, por cuanto, éste no apunta a verificar extremos ya acreditados ante el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, que se relacionan con la capacidad de contratación de la empresa; cuya certificación es requerida en el Punto 2.7.2. inc. d) del Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, creo oportuno señalar que el principio de Igualdad supone "...que el órgano licitante no puede establecer cláusulas o condiciones discriminatorias y exige que todas los oferentes estén en idénticas condiciones de elegibilidad, de modo que ninguno ostente ventajas sobre los demás. Ella así toda vez que "...sólo es posible una real competencia de precios cuando se coloca a los oferentes en pie de igualdad, evitando discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en detrimento de otros..." ... la importancia del principio de igualdad se pone de manifiesto al analizarse las consecuencias jurídicas que trae aparejada su vulneración, esto es: la nulidad absoluta del contrato..." (conf. Ricardo Tomás DRUETTA - Ana Patricia GUGLIELMINETTI, Ley 13.064 de Obras Públicas comentada y anotada, Alfredo Perrot, pág. 67/71)

Indicando la misma obra respecto al principio de Concurrencia que "...fue calificada como un "...requisito de capital importancia dentro del sistema de selección porque permite la elección". Tiene por objeto lograr que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de oferentes, es decir, promover la afluencia de ofertas que inutilice la puja, la posibilidad de competir y, de allí, la de obtener las mejores condiciones para la selección de la Administración en orden a satisfacer los intereses públicos. La concurrencia permite a la Administración Pública seleccionar al cocontratante que ofrezca condiciones más ventajosas, sobre la base de una comparación objetiva entre los diversos ofertas. Por

ello, este principio ha de ser observado en la elaboración de los pliegos de la contratación, de manera que no contengan disposiciones irrazonablemente limitativas de la participación de eventuales interesados o del ejercicio de los derechos constitucionales de los proponentes. Vale decir, es una condición esencial del pliego que sus cláusulas fomenten la concurrencia y competencia ... Si no se verifica en la realidad de los hechos la efectiva competencia entre los participantes, no hay posibilidades de obtener la oferta más conveniente a los intereses de la Administración ...". (obra citada págs. 71/74)

Reitero, a mi criterio, en el caso analizado, al contemplar el Pliego la exigencia de emitir con antecedentes de Obras Públicas de Arquitectura en ejecución o ejecutadas en los últimos diez (10) años en la Provincia, cuya superficie en obras de similares características resulte como mínima de igual cantidad a la referida, como condición indispensable de adjudicación, se trata de una disposición que restringe irrazonablemente la participación de eventuales interesados, y no fomenta la concurrencia y competencia en una Licitación Pública Nacional.

Por todo lo cual, considero, procede ratificar el reparo contenido en el Punto 1) del Acta de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previo) Nº 364/11, mantenida por la Disposición Secretaría Contable Nº 188/11.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, de las constancias obrantes a fs. 323/327 surge que la empresa PETROCON S.A. no presentó la documentación requerida en el Punto 2.7.2. inc. h) -segundo párrafo- del Pliego, en cuanto establece que para toda obra mencionada en la planilla prevista en su Anexo IV, debe adjuntarse la documentación que avale los datos volcados (Certificado de Ubicación de Obra, Planilla de Cómputo y Presupuesto y Acta de Recepción Provisional). Adjuntando la citada empresa únicamente las Planillas de Calificación expedidas por el Registro Provincial de Contratistas y Empresas de Obras y Trabajos Públicos adjuntadas a fs. 325/327.

IV.- En función de todo lo expuesto, en mi opinión, procede en esta instancia dar intervención al Cuerpo Plenario de Miembros a los efectos de dar cumplimiento a la apelación de la Disposición S.C. Nº 168/11 efectuada por la Nota Interna I.P.V. (P) Nº 1704/11, en el marco de las atribuciones previstas por el Punto 4 Inc. E) del Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 01/01, modificada por su similar Nº 19/02. Correspondiendo, a mi criterio, ratificar el reparo contenido en el Punto 1) del Acta de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previo) Nº 364/11, mantenida por la Disposición Secretaría Contable Nº 188/11; haciendo saber al titular de la obra, que podrá insistir en el cumplimiento del acto observado asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de notificada, de conformidad con lo dispuesto por el Punto 4 inc. G) del Anexo I de la citada Resolución Plenaria y los Artículos 30 y 31 de la Ley Provincial 50...

Que en fecha 22 de diciembre de 2011 toma intervención a fojas 36 vuelto el Secretario Legal del Tribunal de Cuentas Dr. Sebastian OSADO MIRUEL, mediante el cual comparte el criterio vertido en el Informe Legal Nº 410/2011 y remite la actuaciones para continuidad del trámite.

Que en razón de los antecedentes glosados en el expediente del Visto y lo indicado en el Acuerdo Plenario Nº 2233 los suscriptos comparten y hacen propios los conceptos vertidos por la Dra. Andrea FURTADO, quien realiza un minucioso análisis comparativo de los hechos antecedentes y los conceptos jurídicos aplicables al caso, que llevan a concluir que corresponde en el presente ratificar el reparo contenido en el Punto 1º del Acta de Constatación T.C.P.-I.P.V. (Control Previo) Nº 364 que fuera mantenida por la Disposición Secretaría Contable Nº 188/11.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 inciso g) y 27 de la Ley Provincial Nº 50.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1º: Mantener la observación Nº 1 del Acta de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previo) Nº 364/11, mantenida por la Disposición Secretaría Contable Nº 188/11, ella de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO 2º: Hacer saber al Sr. Presidente del Instituto Provincial de Viviendas que en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria Nº 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley 50 podrá en el plazo perentorio de cinco (5) días de notificada, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, insistir en el cumplimiento del acto observado.

ARTICULO 3º: Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Presidente del Instituto Provincial de Viviendas, con remisión de expediente del Registro del Instituto Provincial de Viviendas Nº 3012/10, caratulado "OBRA 72

VIVIENDAS Bº MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE", y en el Organismo a la Auditora Fiscal interviniente, a la Secretaría Contable y a la Secretaría Legal.

ARTICULO 4º: Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 001

03-01-12

VISTO: La Nota Interna Letra T.C.P.-V.A. Nº 2224/11, y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Vocal de Auditoría C.P.N. Luis Alberto CABALLERO cursó la nota del visto, poniendo en conocimiento del Sr. Presidente que durante los días 16 de enero al 05 de febrero de 2012, ambas fechas inclusive, hará uso de 21 días correspondientes de la Licencia Anual del año 2010.

Que mediante Resolución Plenaria Nº 13/2009 se estableció que las licencias podrían ser usufructuadas cuando el Sr. Vocal lo estimara pertinente, previa comunicación a los otros miembros.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga, en el marco de las facultades conferidas por el art. 26 inc. e) y 27 de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1º: Comunicar que el Sr. Vocal de Auditoría C.P.N. Luis Alberto CABALLERO hará uso de 21 días correspondientes a su Licencia Anual del año 2010, a partir del día 16 de enero y hasta el 05 de febrero de 2012, ambas fechas inclusive; queriendo pendiente el usufructo de 19 días.

ARTICULO 2º: Registrar, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, publicar, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 002

03-01-12

VISTO: El expediente Nº 295/2011, Letra TCP - PR, caratulado: "S/ FERIA ANUAL 2011", la Resolución Plenaria Nº 310/2011, y la Nota Nº 1916/2011, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota Nº 1916/2011, la agente Vanina María REINA, legajo Nº 94, solicita autorización para usufructuar la licencia anual, entre los días 12/06/2012 y el 21/07/2012, ambas fechas inclusive.

Que el pedido de usufructo de la licencia anual, fuera del plazo estipulado por Resolución Plenaria Nº 310/2011, se encuentra fundado en el hecho de que la agente se encuentra haciendo uso de licencia por maternidad hasta el 11/06/2012 inclusive.

Que ha tomado intervención la Sra. Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, sin esgrimir objeciones.

Que no existen razones de servicio que impidan autorizar lo solicitado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26º y 27º de la Ley Provincial Nº 50 y sus modificatorias, artículo 39º del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria Nº 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria Nº 310/2011.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el usufructo de la Licencia Anual 2011 a la agente Vanina María REINA, Legajo Nº 94, entre los días 12/06/2012 y 21/07/2012, ambas fechas inclusive, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°: Registrar, notificar a la agente, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 003

03-01-12

VISTO: La Causa N° 26918/2011, caratulada "SOLARI, EDUARDO ANIBAL P/ AMENAZAS Y DEFRAUDACION - DTE: BURGOS, MARIANA DEL ROSARIO" de trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur; la Resolución Plenaria N° 474/2011 y

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal de Cuentas provincial se encuentra constituido como Actor Civil en la Causa penal citada, en cuyo marco se dispuso la realización de una pericia contable.

Que mediante la Resolución Plenaria N° 474/2011, este Órgano de Control designó al C.P. Facundo Antonio POLOPOLI, D.N.I. N° 29.193.091, como consultor técnico de parte para el ejercicio del controlador de la prueba pericial ordenada.

Que en el artículo 1° de dicha Resolución, se cometió un error material respecto del número de documento de identidad del citado profesional, cuya corrección resulta procedente.

Que en virtud de la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- corresponde asimismo su habilitación a los efectos de la emisión del presente acto administrativo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente acto en función de las facultades conferidas a este Tribunal de Cuentas por los artículos art. 2° inciso g), 26 inciso i); 27 y 51 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE:**

ARTICULO 1°: Habilitar feria a los efectos de la emisión del presente acto administrativo, en orden a lo dispuesto mediante la Resolución Plenaria N° 310/2011.

ARTICULO 2°: Rectificar el artículo 1° de la Resolución Plenaria N° 474/2011, que quedará redactado de la siguiente manera: "Designar Consultor Técnico de Parte en la Causa N° 26918/2011, caratulada "SOLARI, EDUARDO ANIBAL P/ AMENAZAS Y DEFRAUDACION - DTE: BURGOS, MARIANA DEL ROSARIO", de trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, al C.P. Facundo Antonio PALOPOLI, D.N.I. N° 29.193.091".

ARTICULO 3°: Notificar en la sede del Organismo al C.P. Facundo Antonio PALOPOLI, D.N.I. N° 29.193.091 y a la Secretaría Legal con copia certificada de la presente Resolución, a los efectos de que se lleven a cabo los trámites peninentes ante el Juzgado de Instrucción interviniente.

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar, publicar, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 004

05-01-12

VISTO:

El Expediente del registro de la Gobernación N° 21962 MO/10, caratulado: "S/ REEMPLAZO DE CARPINTERÍAS ESCUELA N° 2-27 RIO GRANDE", y,

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramitan los trabajos de extracción de ventanas para ser reemplazadas por otras de PVC; comprendiendo el enmarcado y pintado de las áreas afectadas por las tareas a realizar (conf. fs. 2).

Que en ese marco, las actuaciones fueron intervenidas por la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLON, quien emite el Acta de Constatación N° 94/11 (fs. 299), formulando 7 observaciones; y por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría

Contable quien emite la Disposición Secretaría Contable N° 161/2011 (fs. 336) por la que levanta las observaciones 3, 5 y 6 de la referida Acta, manteniendo las observaciones 1, 2, 4 y 7.

Que en orden a lo expuesto precedentemente, las observaciones mantenidas se encuentran redactadas en los siguientes términos:

"1. Vistos los expedientes N° 21959/MO/10, 21962/MO/10 y 21992/MO/10, referidos reemplazo de carpinterías en los establecimientos escolares "Alicia Moreau de Justo" N° 2/27 y N° 14 de Río Grande, respectivamente, se resalta lo siguiente: En fecha 28/12/10, la Administración activa tenía conocimiento de los trabajos a realizar, lo cual queda acreditado mediante las Notas N° 2478/10, 2479/10 y 2480/10 incorporadas a los actuados mencionados, todas de fecha 28/12/10, en virtud de las cuales el Director de Administración Z.N., Sr. Fernando Forestello, pone en conocimiento de las autoridades la necesidad en cuestión. En fecha 21/02/11, se dictaron las Resoluciones MOySP N° 151/11, 152/11 y 150/11, referidas a los expedientes mencionados respectivamente, mediante las cuales el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos aprobó las bases de las contrataciones y autoriza el llamado y la emisión de invitaciones. El objeto contratado en los tres expedientes es el mismo. En los tres procedimientos de contratación se invita a las mismas empresas: Todo PVC SRL., Tecnobras SRL y "La casa del aluminio" de Leonardo Atadía. Los pliegos resultan de similares características y condiciones. En razón de lo expuesto, se constata el incumplimiento del Art. 9 de la Ley Nacional N° 13.064 el cual prescribe que, todas las obras deberán adjudicarse por licitación pública o excepción de aquellos supuestos expresamente enumerados en el artículo mencionado. En las presentes tramitaciones, existiendo una necesidad única a satisfacer, lo cual puede verificarse mediante la lectura del Punto 1. GENERALIDADES, del pliego de bases y condiciones, el cual determina la identidad del objeto de la contratación en las tres actuaciones, y sumado a ello los puntos reseñados precedentemente, se pone de manifiesto que, mediante el funcionamiento del procedimiento de contratación a aplicar, sin justificativo alguno que encuentre amparo en la normativa vigente, se ha eludido el procedimiento reglado correspondiente (Licitación Pública). Ello, además se contrapone con lo establecido en los Arts. 73°, primer párrafo, y 74° de la Carta Magna provincial, por cuanto, existiendo objeto idéntico, un pliego de bases y condiciones de igual o similar naturaleza, y habiendo iniciado las tramitaciones en forma simultánea, no surgen de los actuados las causas que justifiquen el despido administrativo ocasionado como consecuencia de instrumentar tres procedimientos de contratación. En mérito a este punto, merece ser destacado además que, en cada una de las actuaciones señaladas más arriba, se invitó a las mismas tres empresas, lo cual acota significativamente la concurrencia y por tanto, la puja de ofertas. Entiendo que esta circunstancia se habría subsanado a través de la implementación de un procedimiento de selección más amplia a, mínimamente, público. Por lo expuesto, no surgen antecedentes que, en forma explícita o implícita, permitan justificar el apartamiento del Art. 9° de la L.O.P., dejándose constancia que, el presente reparo ha sido formulado como consecuencia de la verificación de los expedientes mencionados en el párrafo primero, no teniendo conocimiento de la magnitud o importancia de los gastos totales involucrados. 2 Se detecta el incumplimiento del Art. 73, primer párrafo, de la Constitución de la Provincia y Art. 99 inc. b) de la Ley Provincial N° 141, por cuanto la necesidad planteada a fojas 2 y 73, la cual sería satisfecha mediante la presente contratación, no se encuentra acreditada mediante el correspondiente relevamiento efectuado sobre el edificio. Este relevamiento o examen, resulta importante pues, en primer lugar, pone de manifiesto los requerimientos insatisfechos, justificando la utilización de los fondos públicos, y por otro lado permite constatar si las prestaciones contratadas se corresponden con las necesarias. 4 Visto que no se halla inserto sello fechador en el sobre abrante a fs. 132, 133, 144 y 248 mediante los cuales los participantes presentaron sus ofertas, corresponde efectuar una observación por incumplimiento de lo establecido en el Art. 35° de la Ley Provincial N° 141. 7 Respecto del pliego de bases y condiciones, se ha detectado las siguientes falencias: a) No se prevé la presentación del correspondiente plan de trabajos, el cual resulta necesario independientemente del exiguo plazo de ejecución establecido, por cuanto permite visualizar la distribución de trabajos dentro del paro de obra, permitiendo una participación más activa de la inspección en la dirección y/o supervisión de la ejecución de los trabajos. b) Independientemente de lo anterior, el inciso e) del punto 4.19 establece una penalidad "Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto...".

Que ingresando al análisis de las observaciones mantenidas y remitidas a esta instancia de tratamiento, se aprecia que por la primera de ellas se repara en el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Nacional Nº 13064 en el que se expresa que "las obras deben adjudicarse por licitación pública con excepción de los supuestos expresamente enumerados; ello, indica la Auditora, ya que por los expedientes Nros. 21959 MO/10, 21962 MO/10 y 21992 MO/10 tramitan el reemplazo de carpinterías en los establecimientos escolares "Alicia Moreau de Justo" Nº 2027 y Nº 14 de Río Grande. Agrega que existiendo una "necesidad única a satisfacer", que conlleva a la identidad de objeto en la contratación, se fracciona el procedimiento sin justificativo alguno, eludiéndose el procedimiento reglado de la licitación pública. Además repara en el dispendio administrativo en instrumentarse tres procedimientos de contratación.

Que planteada así la observación, debemos inferir que no resultan eficientemente acreditados los extremos de la observación por cuanto se limita a indicar la identidad de objeto, cuando mínimamente, deberían haberse aportado los elementos de análisis que resulten suficientes y que permitan comparar las presentes actuaciones con los expedientes Nros. 21959 MO/10 y 21992 MO/10, los cuales, como se expresara, no se acompañan.

Que no obstante ello, el argumento central de la observación radica en la identidad en el objeto que se contrata para los distintos establecimientos, los cuales, si hubiesen contratado en forma unida, darían lugar a una licitación pública y no a una licitación privada como en definitiva tramita.

Que tal apreciación resulta una expresión subjetiva que debería encontrar apoyo en otros elementos para tener por configurada una conducta que, desde el punto de vista legal, merezca reproche. Ello, toda vez que el fraccionamiento o desdoblamiento que invoca la Auditora, constituye en sí mismo una presunción, y como tal, más allá de los elementos de convicción que aporte la autoridad administrativa, su imputación a la administración debe contar con sustento tanto lógico como jurídico para tener por debidamente acreditada la conducta observada. Nótese que en el propio texto de la observación se argumenta que "...el presente reproche ha sido formulado como consecuencia de la verificación de las expedientes mencionados en el párrafo primero, no teniendo conocimiento de la magnitud o importancia de los gastos totales involucrados". De ello se desprende que, al tener desconocimiento de los montos totales involucrados, falta un elemento fundamental en la observación como es "conocer" si éstos montos en forma conjunta superan el monto fijado por el jurisdiccional correspondiente a las licitaciones privadas de obras públicas, ya que de lo contrario, si los montos no alcanzan a llegar a los establecidos para la licitación pública, la presente discusión deviene abstracta.

Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, las contrataciones que se observan corresponden a establecimientos distintos, con lo cual, si bien el objeto puede ser similar, no existen elementos que demuestren un apartamiento a las disposiciones del artículo 9 de la Ley Nacional Nº 13064, ya que, si bien éste estipula como regla la "licitación pública", prevé también los casos de excepción dentro de los que se encuentra los que reglamente el Poder Ejecutivo a través de su jurisdiccional (inc. a); y sobre el trámite seguido en las diferentes actuaciones consideradas en forma individual y sustentadas en ese jurisdiccional, no merecieron observaciones por parte del área contable.

Que por último, la Auditora interviniente hace referencia a lo ya resuelto por este Tribunal en materia de desdoblamiento al hacer referencia al Acuerdo Plenario Nº 1985, el que consideramos que resulta ilustrativo a los fines de lo aquí observado por cuanto se dijo que "*Sin perjuicio de ello, y pese a no resultar aplicable a los presentes actuados el Decreto Provincial Nº 1505 que reglamenta las Contrataciones del Estado Provincial (ya que en los casos bajo análisis resulta aplicable la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064) así como tampoco el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto nacional Nº 436/2000*" cabe indicar la forma en que dichas normas describen al desdoblamiento, a fin de analizar dicho instituto". Con ello, se deja aclarado en el Acuerdo Plenario Nº 1985 que el Decreto Provincial Nº 1505/02 no resulta de aplicación en materia de obras públicas, por limitarse estrictamente a compras, con lo cual, no se debería continuar insistiendo en la aplicación de su texto a los casos previstos, y que estrictamente quedan comprendidos en la Ley Nacional Nº 13064.

Que también se expresó en aquella oportunidad: "*Al respecto Dromi tiene dicho: "Monto Menor: Cuando por su escasa magnitud económica la contratación tendida en miras por la Administración, no llega al monto fijado para ser*

realizada por el procedimiento licitatorio, la regulación indica que estará exceptuada del mismo en razón del 'monto menor'. En nuestro derecho positivo nacional observamos que el legislador no ha previsto el caso de obras, suministros o servicios realizados repetidas veces durante un breve tiempo, sobre un objeto o actividad idéntica, por un monto inferior al límite legal individualmente considerado, pero mucho mayor en su conjunto. Es evidente que este vacío legislativo puede provocar que burla fácilmente el trámite de la licitación pública, haciendo ilusorias sus garantías, merced a la adquisición o contratación fraccionada y consecutiva por precios inferiores cada una de ellas al límite legal" "(Dromi, Alberto, 'Licitación Pública', pág. 139, Ed. Ciudad Argentina).

Que en mérito de lo expuesto, corresponde el levantamiento de la presente observación.

Que continuando el análisis, por la observación 2 la Auditora interviniente repara en el incumplimiento del artículo 73 primer párrafo de la Constitución Provincial, y en el artículo 99 inc. b) de la Ley Provincial Nº 141 por cuanto no se encuentra acreditada la necesidad, ya que no existe un relevamiento en el edificio.

Que en función a los descargos producidos, la Auditora insiste en que estos no son suficientes, ya que deberían sustentarse en prueba documental que acrediten las especificaciones del pliego y se relacionen con las necesidades. A tal efecto, repara en la necesidad de producir relevamientos por agentes e informes técnicos que justifiquen el recambio del material. Dice que los elementos aportados consisten en las explicaciones de un funcionario sin el debido respaldo documental que sustente sus dichos.

Que ingresando nosotros a la cuestión planteada por la Auditora, y sin perjuicio de no verificar en las presentes actuaciones que ésta haya dado intervención al área técnica de este Tribunal a fin de verificar los extremos de la observación, corresponde remitirnos a los descargos formulados, en los cuales se agregan constancias fotográficas (fs. 313/315) a fin de apreciar el estado de las aberturas a reemplazar. Por su parte el Subsecretario de Infraestructura Z.N. manifiesta a fs. 348 que la utilización de PVC en lugar de madera, otorga a las aberturas un mínimo mantenimiento, y no sufre las inconveniencias del tiempo. Asimismo aclara que las ventanas de madera que existen en la actualidad en la institución poseen cuarenta (40) años de antigüedad.

Que desde nuestro punto de vista las manifestaciones vertidas en los descargos resultan suficientes a los fines de justificar la necesidad de la obra. Asimismo, teniendo en cuenta la enérgica insistencia de la Auditora actuante ratificada por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable- en cuanto a la documentación de la necesidad, corresponde instruir diferentes cuestiones. En primer lugar las explicaciones dadas por un funcionario en materia de su competencia como ocurre en el presente caso, resultan alcanzadas por las responsabilidades civiles, penales y administrativas que el ejercicio del cargo impone; es decir, que las manifestaciones vertidas en el presente, en modo alguno pueden ser consideradas disvaliosas por la sola condición de quien las dice. Más, de ser éstas inexactas, nacerán en consecuencia las responsabilidades inherentes al Funcionario Público, con lo cual el contenido de lo manifestado al efecto debe ser adecuadamente apreciado.

Que sin perjuicio de ello, en la presente cuestión resulta de relevancia aclarar que más allá del mayor o menor acierto en la justificación de la "necesidad" (la cual resulta ratificada por la autoridad responsable), lo cierto es que también abona al presente caso las facultades de "gestión" que asiste al proceder del Poder Ejecutivo, y sobre lo cual, la competencia de este Tribunal encuentra una actuación tanto singular como acotada, ya que de lo contrario impondríamos el ejercicio del gobierno a las autoridades controladas, cayendo en un proceder inconstitucional. Ello, toda vez que si bien se encuentra explicada la necesidad y acompañada las tomas fotográficas correspondientes, no escapa al conocimiento de los suscriptos que en definitiva la decisión de reemplazar las aberturas se relaciona, en última instancia, con la facultad de gestionar que posee el Ejecutivo Provincial.

Que sobre el control de gestión este Plenario distingue la doctrina de SFSIN que postula: *"La diversidad no sólo está en que el control de legitimidad concierne a los actos individuales, sino que el control de gestión recae sobre la actividad considerada en el conjunto de sus efectos operativos y sociales; sobre todo, en la estructura misma de la función de control. En efecto, en el marco del control de gestión, el Tribunal de Cuentas debe operar a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y la planificación normativamente a priori."*

La Corte Constitucional Italiana... sostuvo que el control posterior sobre la gestión no puede ser asimilado a un mero control de derecho objetivo con exclusión de cualquier apreciación que no sea estrictamente jurídica. El control de gestión, por sus objetivos, por sus efectos y por su modalidad de ejercicio, configura esencialmente un control de carácter amplio. Más que en parámetros normativos, se inspira en cánones o estándares de común experiencia que encuentran su racionalización en los conocimientos técnico-científicos, propios de las varias disciplinas utilizadas a los fines de la evaluación de los resultados de la actividad administrativa" (SFSIN, Domingo Jorda, op. cit. Pág. 329/330).

Que en función a la doctrina citada, este Tribunal tiene dicho en cuanto al control de "gestión" de la autoridad administrativa, que debe ser realizado a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y lo planificado normativamente a priori, a fin de no persuadir a la administración a tomar decisiones que, constitucionalmente, quedan reservada a su propia esfera de competencia; ello, sin perjuicio de la responsabilidad que en el caso particular pueda sobrevenir a los responsables de esa "gestión" como consecuencia directa de una eventual actividad perjudicial para el Estado (conf. Res. Plen. Nº 479/11).

Que por lo precedentemente expuesto corresponde levantar la presente observación.

Que ingresando al estudio de la observación 4, en la misma se repara en que no se había inserto el sello fechador en el sobre de oferta de fs. 132, 133, 144 y 248 lo que incumple con el artículo 35° de la Ley Provincial Nº 141.

Que al efecto el artículo 35 aludido establece: *"Todo escrito inicial a en el que se deduzca un recurso o reclamación deber presentarse en Mesa de Entradas o Recepción del organismo competente. Podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores se presentarán a remitirlos a la oficina donde se encuentre el expediente. La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fue presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador"*.

Que sin perjuicio de lo establecido en la norma que precede, la misma ley en cita indica en su artículo 37 que *"En caso de duda deberá estar en la fecha anunciada en el escrito, y en su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término"*.

Que con el sentido indicado, la Auditora deberá tener presente la fecha inserta en el escrito de presentación (fs. 146 y 249), esta es 28 de febrero de 2011 y 10 de mayo de 2011 respectivamente, y si ello aun le genera dudas, deberá tener presente que la presentación se hizo en término.

Que no obstante lo explicado precedentemente, el plazo de presentación de las ofertas era hasta la fecha de apertura de los sobres conforme la invitaciones cursadas (fs 129/131), y, conforme el Acta de Apertura (fs. 250), las presentaciones en análisis ya se encontraban en el curso del procedimiento licitatorio, con lo cual, la observación carece de sustento jurídico y debe ser levantada.

Que ingresando al análisis de la observación 7, en la misma se repara en la falta de plan de trabajos; y la penalidad establecida en el inciso r) del punto 4.19 por incumplimiento del plan de trabajos.

Que al efecto, la autoridad responsable (fs. 319) indica que no resulta necesario un plan de trabajos dado que se trata de una obra de corto plazo y que la certificación será una vez finalizados éstos.

Que analizados por nuestra parte estos antecedentes, concluimos en que el plan de trabajos "en principio" no afectaría el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud al escaso tiempo comprometido para ello y el tipo de tarea a desarrollar, todo lo cual, será abonado con una única certificación que se hará al final de la realización de la obra, o mejor dicho, con el cumplimiento total del contrato.

Que sin perjuicio de ello, el inciso e) del punto 4.19 prevé la multa por el incumplimiento del plan de trabajos, con lo cual, si éste se encuentra previsto a esos fines, la administración así deberá exigir al contratista con el objeto allí previsto. A tal efecto, debemos agregar además que la presentación del plan de trabajos resulta ineludible a los fines del apartado b) del contrato y la eventual aplicación del Decreto Provincial Nº 73/93 allí previsto.

Que en consideración a lo expuesto, corresponde levantar la presente observación.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27° del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U M E N

ARTICULO 1º.- Levantar las observaciones 1, 2, 4 y 7 del Acta de Constatación Nº 91/11 mantenidas por Disposición Secretaría Contable Nº 161/2011, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con copia certificada de la presente y con remisión del Expediente del registro de la Gobernación Nº 21962 MO/10, coratulado: "S/ REEMPLAZO DE CARPINTERÍAS ESCUELA Nº 2-27 RIO GRANDE"; y en el Tribunal a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable y a la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLÓN.

ARTICULO 3º.- Registrar, Comunicar, Publicar, cumplido ello archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 005

05-01-12

VISTO:

El Expediente del registro de la Gobernación Nº 21992 MO/10, caratulado: "S/ REEMPLAZO DE CARPINTERÍAS ESCUELA Nº 14 RIO GRANDE"; y,

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramitan los trabajos de extracción de ventanas para ser reemplazadas por otras de PVC; comprendiendo el enmarcado y pineda de las áreas afectadas por las tareas a realizar (conf. fs. 2).

Que en ese marco, las actuaciones fueron intervenidas por la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLÓN, quien emite el Acta de Constatación Nº 95/11 (fs. 297), formulando 10 observaciones; y por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable quien emite la Disposición Secretaría Contable Nº 164/2011 (fs. 339) por la que levanta las observaciones 4, 6, 7, 9 y 10 de la referida Acta, manteniendo las observaciones 1, 2, 3, 5 y 8.

Que en orden a lo expuesto precedentemente, las observaciones mantenidas se encuentran redactadas en los siguientes términos:

"1. *Vistos los expedientes Nº 21959/MO/10, 21962/MO/10 y 21992/MO/10, referidos reemplazo de carpinterías en los establecimientos escolares "Alicia Moreau de Justo" Nº 2/27 y Nº 14 de Río Grande, respectivamente, se resalta la siguiente: En fecha 28/12/10, la Administración activa tenía conocimiento de los trabajos a realizar, lo cual queda acreditado mediante las Notas Nº 2478/10, 2479/10 y 2480/10 incorporadas a los actuados mencionados, todas de fecha 28/12/10, en virtud de las cuales el Director de Administración Z.N., Sr. Fernando Forestello, pone en conocimiento de las autoridades la necesidad en cuestión. En fecha 21/02/11, se dictaron las Resoluciones MOySP Nº 151/11, 152/11 y 150/11, referidas a los expedientes mencionados respectivamente, mediante las cuales el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos aprobó las bases de las contrataciones y autoriza el llamado y la emisión de invitaciones. El objeto contratado en los tres expedientes es el mismo. En los tres procedimientos de contratación se invita a las mismas empresas: Todo PVC SRL., Tecnobros SRL. y "La casa del aluminio" de Leonarda Azaña. Los pliegos resultan de similares características y condiciones. En razón de lo expuesto, se constata el incumplimiento del Art. 9 de la Ley Nacional Nº 13.064 el cual prescribe que, todas las obras deberán adjudicarse por licitación pública a excepción de aquellos supuestos expresamente enumerados en el artículo mencionado. En las presentes tramitaciones, existiendo una necesidad única a satisfacer, la cual puede verificarse mediante la lectura del Punto 1. GENERALIDADES, del pliego de bases y condiciones, el cual determina la identidad del objeto de la contratación en las tres actuaciones, y sumado a ello los puntos resueltos precedentemente, se pone de manifiesto que, mediante el fraccionamiento*

del procedimiento de contratación a aplicar, sin justificativo alguno que encuentre amparo en la normativa vigente, se ha eludido el procedimiento reglado correspondiente (Licitación Pública). Ello, además se contrapone con lo establecido en los Arts. 73º, primer párrafo, y 74º de la Carta Magna provincial, por cuanto, existiendo objeto idéntico, un pliego de bases y condiciones de igual o similar naturaleza, y habiendo iniciado las transacciones en forma simultánea, no surgen de las actadas las causas que justifiquen el dispendio administrativo ocasionado como consecuencia de instrumentar tres procedimientos de contratación. En mérito a este punto, merece ser destacado además que, en cada una de las actuaciones señaladas más arriba, se invitó a las mismas tres empresas, lo cual acota significativamente la concurrencia y por tanto, la puja de ofertas. Entiendo que esta circunstancia se habría subsanado a través de la implementación de un procedimiento de selección más amplio o, mínimamente, público. Por lo expuesto, no surgen antecedentes que, en forma explícita o implícita, permitan justificar el apartamiento del Art. 9º de la L.C.P., dejándose constancia que, el presente reparo ha sido formulado como consecuencia de la verificación de los expedientes mencionados en el párrafo primero, no teniendo conocimiento de la magnitud o importancia de los gastos totales involucrados. 2. Se detecta el incumplimiento del Art. 73, primer párrafo, de la Constitución de la Provincia y Art. 99 inc. b) de la Ley Provincial N° 141, por cuanto la necesidad planteada a fojas 2 y 73, la cual sería satisfecha mediante la presente contratación, no se encuentra acreditada mediante el correspondiente relevamiento efectuado sobre el edificio. Este relevamiento o examen resulta importante pues, en primer lugar, pone de manifiesto los requerimientos insatisfechos, justificando la utilización de los fondos públicos, y por otro lado permite consultar si las prestaciones contratadas se corresponden con las necesarias. 3. Se observa que la "Resolución MoySP N° 032/11" cuya fiel obra a fs. 250, se encuentra suscripta por el Sr. Jorge PESARINI en carácter de Secretario de Coordinación y Control de Gestión, razón por la cual carecería de facultades para emitir dicho acto administrativo. En su caso, ante la ausencia transitoria del Ministro de Obras y Servicios Públicos, corresponde tener presente lo establecido mediante Decreto N° 914/06 modificado por su similar N° 2966/07 5. Visto que no se halla inserto sello rechazador en los sellos obrantes a fs. 132, mediante el cual el participante presenta su oferta, corresponde efectuar una observación por incumplimiento de lo establecido en el Art. 35º de la Ley Provincial N° 141. 8. Se ha detectado que, el pliego de bases y condiciones, no se prevé la presentación del correspondiente plan de trabajos, el cual resulta necesario independientemente del exiguo plazo de ejecución establecido, por cuanto permite visualizar la distribución de trabajos dentro del plazo de obra, posibilitando una participación más activa de la inspección en la dirección y/o supervisión de la ejecución de los trabajos. No obstante ello, el inciso e) del punto 1.13 establece una penalidad "Por incumplimiento del Plan de trabajos previsto..."

Que ingresando al análisis de las observaciones mantenidas y remitidas a esta instancia de tratamiento, se aprecia que por la primera de ellas se repara en el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Nacional N° 13064 en el que se expresa que todas las obras deben adjudicarse por licitación pública con excepción de los supuestos expresamente enumerados; ello, indica la Auditora, ya que por los expedientes Nros. 21959 MO/10, 21962 MO/10 y 21992 MO/10 tramitan elemplaza de carpinterías en los establecimientos escolares "Alicia Moreau de Justo" N° 2727 y N° 14 de Río Grande. Agrega que existiendo una "necesidad única a satisfacer", que conlleva a la identidad de objeto en la contratación, se fracciona el procedimiento sin justificativo alguno, eludiéndose el procedimiento reglado de la licitación pública. Además repara en el dispendio administrativo en instrumentarse tres procedimientos de contratación.

Que planteada así la observación, debemos inferir que no resultan suficientemente acreditados los extremos de la observación por cuanto se limita a indicar la identidad de objeto, cuando mínimamente, deberían haberse aportado los elementos de análisis que resulten suficientes y que permitan comparar las presentes actuaciones con los expedientes Nros. 21959 MO/10 y 21962 MO/10, los cuales, como se expresara, no se acompañan.

Que no obstante ello, el argumento central de la observación radica en la identidad en el objeto que se contrata para los distintos establecimientos, los cuales, si se hubiesen contratado en forma unida, darían lugar a una licitación pública y no a una licitación privada como en definitiva transita.

Que tal apreciación resulta una expresión subjetiva que debería encontrar apoyo en otros elementos para tener por configurada una conducta que, desde el punto de vista legal, merezca reproche. Ello, toda vez que el fraccionamiento o desdoblamiento que invoca la Auditora, constituyen en sí mismo una presunción, y como tal, más allá de los elementos de convicción que aporte la autoridad administrativa, su imputación a la administración debe contar con sustento tanto lógico como jurídico para tener por debidamente acreditada la conducta observada. Nótese que en el propio texto de la observación se argumenta que "...el presente reparo ha sido formulado como consecuencia de la verificación de los expedientes mencionados en el párrafo primero, no teniendo conocimiento de la magnitud o importancia de los gastos totales involucrados". De ello se desprende que, al tener desconocimiento de los montos totales involucrados, falta un elemento fundamental en la observación como es "conocer" si éstos montos en forma conjunta superan el monto fijado por el Jurisdiccional correspondiente a las licitaciones privadas de obras públicas, ya que de lo contrario, si los montos no alcanzan a llegar a los establecidos para la licitación pública, la presente discusión deviene abstracta.

Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, las contrataciones que se observan corresponden a establecimientos distintos, con lo cual, si bien el objeto puede ser similar, no existen elementos que demuestren un apartamiento a las disposiciones del artículo 9 de la Ley Nacional N° 13064, ya que, si bien éste estipula como regla la "licitación pública", prevé también los casos de excepción dentro de los que se encuentra lo que reglamentó el Poder Ejecutivo a través de su Jurisdiccional (inc. a); y sobre el trámite seguido en las diferentes actuaciones consideradas en forma individual y sustentadas en ese Jurisdiccional, no merecieron observaciones por parte del área contable.

Que por último, la Auditora interviniente hace referencia a lo ya resuelto por este Tribunal en materia de desdoblamiento al hacer referencia al Acuerdo Plenario N° 1985, el que considerando que resulta ilustrativo a los fines de lo aquí observado por cuanto se dijo que "Sin perjuicio de ello, y pese a no resultar aplicable a los presentes actados el Decreto Provincial N° 1505 que reglamenta las Contrataciones del Estado Provincial (ya que en los casos bajo análisis resulta aplicable la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064) así como tampoco el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto nacional N° 436/2000, cabe indicar la forma en que dichas normas describen al desdoblamiento, a fin de analizar dicho instituto". Con ello, se deja aclarado en el Acuerdo Plenario N° 1985 que el Decreto Provincial N° 1505/02 no resulta de aplicación en materia de obras públicas, por referirse estrictamente a compras, con lo cual, no se debería continuar insistiendo en la aplicación de su letra a los casos previstos, y que estrictamente quedan comprendidos en la Ley Nacional N° 13064.

Que también se expresó en aquella oportunidad: "Al respecto Dromi tiene dicho: 'Monto Menor: Cuando por su escasa magnitud económica la contratación tendida en miras por la Administración, no llega al monto fijado para ser realizada por el procedimiento licitatorio, la regulación indica que estará exceptuada del mismo en razón del 'monto menor'. En nuestro derecho positivo nacional observamos que el legislador no ha previsto el caso de obras, suministros o servicios realizados repetidas veces durante un breve tiempo, sobre un objeto o actividad idéntica, por un monto inferior al límite legal individualmente considerado, pero mucho mayor en su conjunto. Es evidente que este vacío legislativo puede provocar que baste fácilmente el trámite de la licitación pública, haciendo illusorias sus garantías, merced a la adquisición o contratación fraccionada y consecutiva por precios inferiores cada una de ellas al límite legal'" (Dromi, Alberto, "Licitación Pública", pág. 139, Ed. Ciudad Argentina).

Que en mérito de lo expuesto, corresponde el levantamiento de la presente observación.

Que continuando el análisis, por la observación 2 la Auditora interviniente repara en el incumplimiento del artículo 73 primer párrafo de la Constitución Provincial, y en el artículo 99 inc. b) de la Ley Provincial N° 141, por cuanto no se encuentra acreditada la necesidad, ya que no existe un relevamiento en el edificio.

Que en función a los descargos producidos, la Auditora insiste en que estos no son suficientes, ya que deberían sustentarse en prueba documental que acrediten las especificaciones del pliego y se relacionen con las necesidades. A tal efecto, repara en la necesidad de producir relevamientos por agütes e informes

técnicos que justifiquen el recambio del material. Dice que los elementos aportados consisten en las explicaciones de un funcionario sin el debido respaldo documental que sustente sus dichos.

Que ingresando nosotros a la cuestión planteada por la Auditora, y sin perjuicio de no verificar en las presentes actuaciones que ésta haya dado intervención al área técnica de este Tribunal a fin de verificar los extremos de la observación, corresponde remitirnos a los descargos formulados, en los cuales se agregan constancias fotográficas (fs. 309/316) a fin de apreciar el estado de las aberturas a reemplazar. Por su parte el Subsecretario de Infraestructura Z.N. manifiesta a fs. 358 que la utilización de PVC en lugar de madera, otorga a las aberturas un mínimo mantenimiento, y no sufre las inclemencias del tiempo. Asimismo aclara que las ventanas de madera que existen en la actualidad en la institución poseen cuarenta (40) años de antigüedad.

Que desde nuestro punto de vista la manifestaciones vertidas en los descargos resultan suficientes a los fines de justificar la necesidad de la obra. Asimismo, teniendo en cuenta la enérgica insistencia de la Auditora actuante -ratificada por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable- en cuanto a la documentación de la necesidad, corresponde instruir diferentes cuestiones. En primer lugar las explicaciones dadas por un funcionario en materia de su competencia como ocurre en el presente caso, resultan alcanzadas por las responsabilidades civiles, penales y administrativas que el ejercicio del cargo impone; es decir, que las manifestaciones vertidas en el presente, en modo alguno pueden ser consideradas disvaliosas por la sola condición de quien las dice. Más, de ser éstas inexactas, nacerán en consecuencia las responsabilidades inherentes al Funcionario Público, con lo cual el contenido de la manifestación al efecto debe ser adecuadamente apreciado.

Que sin perjuicio de ello, en la presente cuestión resulta de relevancia aclarar que más allá del mayor o menor acerto en la justificación de la "necesidad" (la cual resulta ratificada por la autoridad responsable), lo cierto es que también abona al presente caso las facultades de "gestión" que asiste al proceder del Poder Ejecutivo, y sobre lo cual, la competencia de este Tribunal encuentra una actuación tanto singular como aislada, ya que de lo contrario impugnáramos el ejercicio del gobierno a las autoridades controladas, cayendo en un proceder inconstitucional. Ello, toda vez que si bien se encuentra explicada la necesidad y acompañada las tomas fotográficas correspondientes, no escapa al conocimiento de los suscriptos que, en definitiva la decisión de reemplazar las aberturas se relaciona, en última instancia, con la facultad de gestionar que posee el Ejecutivo Provincial.

Que sobre el control de gestión este Plenario distingue la doctrina de SESIN que postula: *"La diversidad no sólo está en que el control de legitimidad concierne a los actos individuales, sino que el control de gestión recae sobre la actividad considerada en el conjunto de sus efectos operativos y sociales; sobre todo, en la estructura misma de la función de control. En efecto, en el marco del control de gestión, el Tribunal de Cuentas debe, operante a posteriori, hacerle una confrontación entre los resultados efectivamente logrados, en la realidad y lo planificado normativamente a priori."*

La Corte Constitucional Italiana... sostuvo que el control posterior sobre la gestión no puede ser asimilado a un mero control de derecho objetiva con exclusión de cualquier apreciación que no sea estrictamente jurídica. El control de gestión, por sus objetivos, por sus efectos y por su modalidad de ejercicio, configura esencialmente un control de carácter empírico. Más que en parámetros normativos, se inspira en cánones o estándares de común experiencia que encuentran su racionalización en los conocimientos técnico-científicos, propios de las varias disciplinas utilizadas a los fines de la evaluación de los resultados de la actividad administrativa" (SESIV, Domingo Juan, op. cit. Pág. 329/330).

Que en función a la doctrina citada, este Tribunal tiene dicho en cuanto al control de "gestión" de la autoridad administrativa, que debe ser realizado a posteriori, haciendo una confrontación entre los resultados efectivamente logrados en la realidad y lo planificado normativamente a priori, a fin de no persuadir a la administración a tomar decisiones que, constitucionalmente, quedan reservada a su propia esfera de competencia; ello, sin perjuicio de la responsabilidad que en el caso particular pueda sobrevenir a los responsables de esa "gestión" como consecuencia directa de una eventual actividad perjudicial para el Estado (conf. Res. Plen. N° 479/11).

Que por lo precedentemente expuesto corresponde levantar la presente observación.

Que ingresando al análisis de la observación 3 se aprecia que la Auditora interviniente en su Informe Contable N° 548/11 aconseja su levantamiento como consecuencia del agregado de la Resolución MOySP N° 757/11 a fs. 362 por la cual el Ministro de Obras y Servicios Públicos ratifica el acto observado.

Que en función a la abstracción del tema animado, corresponde su levantamiento.

Que ingresando al estudio de la observación 5, en la misma se repara en que no se halla inserto el sello fechador en el sobre de oferta de fs. 132, lo que incumple con el artículo 35° de la Ley Provincial N° 141.

Que al efecto el artículo 35 aludido establece: *"Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso o reclamación debe presentarse en Mesa de Entradas o Receptoría del organismo competente. Podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores se presentarán o remitirán a la oficina donde se encuentre el expediente. La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fue presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador"*.

Que sin perjuicio de lo establecido en la norma que precede, la misma ley en su artículo 37 que *"En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciativa en el escrito, y en su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término"*.

Que con el sentido indicado, la Auditora deberá tener presente la fecha inserta en el escrito de presentación (fs. 146), esto es 28 de febrero de 2011, y si ello aun le genera dudas, deberá tener presente que la presentación se hizo en término.

Que no obstante lo explicado precedentemente, el plazo de presentación de las ofertas era hasta la fecha de apertura de los sobres conforme las invitaciones cursadas (fs. 130), y, conforme el Acta de Apertura (fs. 249), el sobre en análisis ya se encontraba en el curso del procedimiento licitatorio, con lo cual, la observación carece de sustrato jurídico y debe ser levantada.

Que ingresando al análisis de la observación 8, en la misma se repara en la falta de plan de trabajos; y la penalidad establecida en el inciso e) del punto 4.19 por incumplimiento del plan de trabajos.

Que al efecto, la autoridad responsable (fs. 323) indica que no resulta necesario un plan de trabajos dado que se trata de una obra de corto plazo y que la certificación será una vez finalizados éstos. Agregan (fs. 360) en cuanto a la aplicación del apartado 4.19. Multas y penalidades que para ello podrá instruirse al Inspector de la Obra a que solicite el mencionado plan.

Que analizados por nuestra parte estos antecedentes, concluimos en que el plan de trabajos "en principio" no afectaría el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del escaso tiempo comprometido para ello y el tipo de tarea a desarrollar, todo lo cual, será abonado con una única certificación que se hará al final de la realización de la obra, o mejor dicho, con el cumplimiento total del contrato.

Que sin perjuicio de ello, el inciso e) del punto 4.19 prevé la multa por el incumplimiento del plan de trabajos, con lo cual, si éste se encuentra previsto a esos fines, nada obsta a que la administración con el objeto allí previsto le exija la presentación de plan al contratista. A tal efecto, debemos indicar que resulta aconsejable la posición asumida por la autoridad administrativa a fs. 360 en cuanto a instruir al Inspector de Obras a que solicite el mencionado plan; ello, a los fines del apartado 6 del contrato y la eventual aplicación del Decreto Provincial N° 73/03 allí previsto.

Que en consideración a lo expuesto, corresponde levantar la presente observación.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial N° 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27° del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U M E N:

ARTICULO 1°.- Levantar las observaciones 1, 2, 3, 5 y 8 del Acta de Constatación N° 95/11 (mantenidas por Disposición Secretaría Contable N° 164/2011, por los motivos expuestos en los considerandos del presente).

ARTICULO 2°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario, notificar al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con copia certificada de la presente y con remisión del expediente del registro de la Gobernación N° 21992 MOYU, cancelado: "S/ REMPLAZO DE CARPINTERÍAS ESCUELA N° 14 RIO GRANDE"; y en el Tribunal, al Secretario Legal, a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable y a la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROJÓN.

ARTICULO 3°.- Registrar, Comunicar, Publicar, cumplido ello archivar.-

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 006

05-01-12

VISTO: La Resolución MS N° 669/2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se designó como personal de planta política, en el cargo de Director Provincial para el Fortalecimiento Administrativo, al agente de este Organismo C.P. Eduardo AST DNI 29.696.836, ello a partir del 21 de diciembre de 2011.

Que el citado agente, integra la planta de personal permanente de este organismo, cumpliendo hasta la fecha de su designación funciones de Revisor de Cuentas.

Que con fecha 01 de diciembre de 2011, el profesional nombrado presentó la Nota Interna N° 2108/2011, a fin de poner en conocimiento a las autoridades del Tribunal de Cuentas, el ofrecimiento formulado por Nota N° 2096/2011 Letra M.S.

Que analizada la presentación, resultó procedente otorgar al agente de mencionada la Licencia Extraordinaria sin Goce de haberes denominada: Ejercicio transitorio de Otros Cargos, prevista en el Artículo 13°, Apartado II, Punto a) del Decreto Nacional N° 3413/79, ello a partir del día 21 de diciembre de 2011.

Que la norma citada en el párrafo precedente establece: *II. Sin Goce de haberes: a) Ejercicio transitorio de otros cargos. El agente que fuera designado o afectado para desempeñar funciones superiores de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes, que se acordará por el término en que ejerza esas funciones.*

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por el Artículo 26 inc c) y 27° de la Ley Provincial N° 50.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Otorgar la licencia prevista en el Artículo 13°, Apartado II, Punto a) del Decreto Nacional N° 3413/79, al agente C.P. Eduardo AST, DNI 29.696.836 -Leg N° 119-, para desempeñarse en el cargo de Director Provincial para el Fortalecimiento Administrativo, a partir del día 21 de diciembre de 2011. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°: Notificar al interesado con copia certificada de la presente y al Sr. Ministro de Salud, a los efectos de dar intervención al área de liquidaciones de haberes.

ARTICULO 3°: Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

**LONGHITANO
CABALLERO**

RESOL. N° 007

10-01-12

VISTO: El Expediente Letra T.C.P. PR N° 324/11 caratulado "S/ REGlamentación ARTÍCULO 12 LEY PROVINCIAL N° 50" y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 de la Ley provincial N° 50, modificada por el artículo 133 de la Ley N° 495, establece: *"En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el vocal que le sigue en turno, de conformidad con el sorteo para el ejercicio de la Presidencia. Si el ausente o impedido fuera un vocal, será sustituido por un conjuce integrante de la lista que anualmente elaborará el cuerpo entre las profesionales de la matrícula que reúnan los requisitos establecidos para la designación de los titulares".*

Que corresponde reglamentar la citada norma, en cuanto al procedimiento a observar para la elaboración de la lista de conjuces que anualmente debe elaborar el cuerpo Plenario.

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Tribunal, elevando el proyecto de acto cuyo dictado estima pertinente.

Que se comparte el proyecto propiciado, resultando procedente aprobar el procedimiento que se incorpora como Anexo I de la presente.

Que en virtud de la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- corresponde asimismo su habilitación a los efectos de la emisión de este acto administrativo, atento a la importancia y premura de contar con los instrumentos necesarios para la toma de decisiones institucionales, en caso de ausencia o impedimento de los Miembros titulares.

Que este Organismo de Control se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido por los artículos 26°, inc. b) y 27 de la Ley Provincial 50 y lo dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 373/2010.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Par ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Habilitar la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- para la emisión del presente acto administrativo, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°: Aprobar el procedimiento establecido en el Anexo I de la presente Resolución, para la integración de los listados de Conjuces que será utilizado para su oportuna desinscripción, con los abogados y contadores inscriptos en las respectivas matrículas profesionales, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Constitución Provincial.

ARTICULO 3°: Disponer la reserva de las actuaciones del visto en Secretaría Privada de Cuerpo Plenario.

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar, publicar, cumplido, archivar.

**LONGHITANO
CABALLERO**

RESOL. N° 008

11-01-12

VISTO:

El Expediente del registro de la Gobernación N° 6400 MO/11, caratulado: "S/ CERTIFICADO Y ACTA DE MEDICIÓN N° 8 PARA LA OBRA: CENTRO DE SALUD B° EL SOLAR DE LA LAGUNA RIO GRANDE. QUE EJECUTA LA EMPRESA COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A."; y,

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones fueron intervenidas por la Auditora Fiscal C.P.N Claudia CHAVEZ, quien emite el Acta de Constatación N° 80/11 (fs. 205), formulando 7 observaciones; y por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable quien emite la Disposición Secretaría Contable N° 141/2011 (fs. 251) por la que levanta las observaciones 4 y 5 de la referida Acta, manteniendo las observaciones 1, 2, 3, 6 y 7.

Que en orden a lo expuesto precedentemente, las observaciones mantenidas se encuentran redactadas en los siguientes términos:

"1. Deberá darse respuesta a las observaciones efectuadas en el Informe Técnico N° 242/11, Letra: SG- GEOP-AT, obrante a fojas 198/201.

2. No se acredita el cumplimiento del Art. 36, de la Ley 13.064, referido al pago de las obligaciones laborales del contratista, en cuanto al importe en concepto de Seguro de Riesgos del Trabajo. Téngase presente que según el formulario 931 el importe por ese concepto asciende a la suma de \$ 47.947,17. Por otra parte se comparte la indicación por el Auditor General Adjunto, CP Adulberto SANTOS, en Informe N° 3168/11, Letra: AUD. INT. de fecha 09/06/11 en cuanto al comprobante por el cual se efectúan los pagos, esto es Formulario AFIP 817. No obstante lo ya expresado, se advierte que la copia simple del Recibo N° 69455 (fs. 132) con fecha poco legible del 07/05/2011, perteneciente a Consolidar ART S.A. Refiere a importes y al concepto "Abona ctas 01-02-03/11", los cuales no guardan relación con los formularios 931 tenidos a la vista.

3. Sin perjuicio del repara precedente, ésta área de control entiende que no se acredita el cumplimiento del Art. 36 de la Ley 13.064 con la suscripción de planes de facilidades de pago por conceptos de seguridad social, toda vez que, hasta ahora no se cancelan la totalidad de las cuotas por los períodos incluidos en esta

inmediación de pago, no es posible de garantizar la obligación que las normativas laborales y la Ley 13064 en particular impone. Téngase presente que las fechas de vencimiento de los diferentes cuotas trasciende el plazo de ejecución de la obra en cuestión, situación que escapa al control de la Administración y de este Tribunal de Cuentas, advirtiéndose que la falta de pago de algunas de las cuotas del plan de facilidades por obligaciones de la seguridad social, determina la caducidad del mismo, retrotrayendo el incumplimiento al momento inicial.

6. Teniendo en cuenta la cláusula cuarta del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscrito con la Subsecretaría de Obras Públicas (P.E.N.) y registrado bajo el N° 13964, la cual determina que "... los restantes desembolsos se efectuarán en etapas contra la presentación por parte de la "PROVINCIA", en el transcurso de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y medición de la "OBRA"..." (la resolución no es del original), se constata el incumplimiento en virtud de la Nota N° 1476/2011, letra: MOySP, de fecha 05/05/2011, obrante a fs. 124. Ello es requerido teniendo en cuenta las advertencias plasmadas en la cláusula sexta y décima primera del referido convenio, las cuales determinan la suspensión de la financiación ante determinadas falencias del procedimiento de rendición de cuentas. Conforme el tenor de la observación efectuada, la misma adquiere carácter de insalvable, efectuando expresa reserva de las consecuencias en que pudieran derivar, la extemporaneidad de su presentación.

7. No se da cumplimiento al punto 1.1.14 del Anexo I del Dto. Territorial N° 4144/86, por cuanto no se incluyen en los presentes los antecedentes básicos de la contratación, a saber: decreto de adjudicación, contrato de obra pública, convenio de financiación, con sus ratificaciones respectivas por los distintos poderes y resolución de aprobación de plan de trabajo vigente".

Que a fs. 389 toma intervención el Servicio Jurídico de este Tribunal, emitiendo el Informe Legal N° 392/11.

Que ingresando al estudio de las observaciones formuladas, por la primera de ellas la Auditora Fiscal actuante C.P. Claudia CHAVEZ (fs. 244) repara en la indicación del Ministro de Obras y Servicios Públicos efectuada a fs. 223, referida a dejar en suspenso la multa. Sostiene que "...no resulta una facultad propia del Sr. Ministro modificar condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, en este caso referidas al Régimen de Multas" (sic). Agrega que "...verificado el expediente referido al CO N° 7 (4893-MO-11) en el SIGA, el mismo fue abonado con fecha 30/05/2011 en su totalidad, es decir sin deducir suma alguna en concepto de multa". En función de lo expuesto, considera la Auditora que no debe levantarse la observación, pese a que el Ing. Alejandro MORA en el Informe Técnico N° 319/11 (fs. 241) propone su levantamiento sosteniendo que "habiéndose regularizado la obra en el certificado N°8 (licencia régimen de multas) se levanta la observación 2".

Que por su parte, a fs. 382 toma intervención el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos quien manifiesta que es facultad discrecional de su parte la aplicación de multas.

Que en virtud a la disidencia puesta de manifiesto entre los distintos actores sobre la interpretación que hacen del instituto de la multa en la obra pública, y en particular, como se posicionan frente a ello en los presentes acordados, corresponde efectuar una serie de aclaraciones a fin de fijar la postura de este Tribunal y resolver sobre el asunto.

Que la observación en análisis, sintéticamente, se formula por el hecho de "no" hacerse efectiva una multa contra el contratista por incumplimiento a sus obligaciones (atraso en la inversión prevista), acontecimiento que se produce al autizarse el Certificado de Obra N° 7; y que conforme el área técnica de este Tribunal, se subsana al analizar el presente certificado (fs. 242).

Que sobre este postulado debemos indicar que asiste razón al Ingeniero MORAN (fs. 242) por cuanto si él constató que se regularizó la obra; el contrato expresamente prevé para este supuesto la dispensa del contratista. Así, el Pliego de Bases y Condiciones establece en el punto e) del Régimen de Multas que: "Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del plan de trabajos, será íntegramente devuelta al Contratista". Con ello, devolviendo redundante y dispendioso la aplicación de una multa y su consecuente descuento, para luego, una vez regularizada la obra, tener que dejar sin efecto esa multa y devolver los montos retenidos por ella.

Que esto no resulta una posición análoga, sino que surge de la letra misma del contrato, y como es sabido, éste es ley para las partes. Así lo ha entendido el más alto Tribunal Federal al sostener que: "Una de los principios rectores en materia licitatoria, consiste en considerar al pliego de condiciones como la ley de la licitación o ley del contrato, pues es en él donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del

adjudicatario, con las notas de aclaración que correspondan". (S.C.J.N., Resolución N° 267/04, 27/02/2004, T 232, P 277).

Que del mismo modo tampoco resulta afínada la exégesis de la Auditora actuante al sostener que el CO N° 7 (4893-MO-11) en el SIGA figura abonado en su totalidad con fecha 30/05/2011, sin deducción de suma alguna en concepto de multa. Al pensar, por ésta expresión interpreta que la imposición de una multa y su cobro deben ser concurrentes, a por lo menos inmediato, lo que a nuestro modo de ver no resulta concebible por la doctrina y la jurisprudencia en la materia.

Que sobre ello, autores como Ricardo Tomás Druetta y Ana Patricia Gaglielminetti sostienen que "...Salvo pacto expreso en contrario, es posible interpretar, a partir del carácter facultativo en materia de descuento de multas que surge del artículo en comentario, que el comitente no tiene la obligación de efectivizar la multa sobre el primer certificado a emitirse con posterioridad a la imposición de la sanción pecuniaria

Con referencia a esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "...la ausencia de cobro inmediato de la multa no genera -salvo situación de excepción- ningún perjuicio ni para la administración comitente si hoy todavía obra por ejecutar y, por ende, certificados que emitir o pagar, o certificados ya emitidos e impagos, ni para la contratista, ya que ella se aleja de una posible insolvencia futura (Corte Sup., 21/12/1999, "Teca S.A. Y SEGBA SA S/ Contrato de Obra Pública" (Consid. 14).

Devengada la multa, la norma en comentario es susceptible de dos interpretaciones: i) que el comitente pueda optar, a su elección, por descontar el importe de la multa, ya sea de los certificados pendientes de pago, del fondo de reposo o de la fianza y ii) que la LOP establece un orden de prelación obligatorio.

Se entiende que es la interpretación indicada en el i) la que debe primar, por cuanto permite al comitente optar, dentro de un marco discrecional, entre cualesquiera de las alternativas previstas en la norma. En el ejercicio de tal opción se tendrán en cuenta, por un lado, las consecuencias sobre la continuidad del contrato que podría traer aparejada la afectación inmediata de los certificados de obra y, por otro, la necesidad de mantenimiento incólumes los derechos de la Administración garantizados con los fondos de reposo y fianza.

Para dicha valoración habrá de ponderarse, entre otras circunstancias, el importe de la multa; su incidencia en la certificación pendiente; la relación entre el monto de la multa y el monto de la fianza y el fondo de reposos y cualquier otra circunstancia que pudiera calar al comitente ante la posibilidad de que se dificulte o torne imposible la percepción administrativa del importe correspondiente a la multa...". ("Ley 13.064 de Obras Públicas" de Ricardo Tomás Druetta y Ana Patricia Gaglielminetti, pag. 276).

Que por lo expuesto, aun en el hipotético caso en que efectivamente se hubiera aplicado la multa, su descuento podrá hacerse en cualquier momento a criterio de la autoridad comitente, en tanto existan fondos pendientes y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Por tal motivo, el criterio de "inmediatez" concebido por la Auditora en cuanto a descuentos de multas no resulta acertado, sin perjuicio de indicar de nuestra parte que tampoco existen motivos para la imposición de ésta, con la cual la observación así mantenida por la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable debe ser levantada.

Que continuando con el estudio de las observaciones, hemos de indicar que las signadas con los números 2 y 3 se tratarán en forma conjunta en cuanto a la similitud de análisis.

Que por éstas se repara en el incumplimiento de las disposiciones del artículo 36 de la Ley Nacional N° 13.064, al entender la Auditora que el contratista no cumple con las obligaciones laborales como consecuencia de poseer deuda por Seguro de Riesgo de Trabajo, lo cual se refleja en el Formulario 931 (AFIP), y por tener la empresa un plan de facilidades de pago en concepto de aportes a la Seguridad Social, entendiéndose que hasta tanto dicho plan no sea totalmente cancelado, el incumplimiento a la Ley de Obras Públicas subsiste. Señala además la Auditora que las cuotas a abonar por éste plan de pagos trascienden el plazo de la obra y si se deja de abonar algunas cuotas, se determina su caducidad retrotrayendo el incumplimiento al momento inicial.

Que ingresando al estudio de esta cuestión, deviene relevante aclarar el alcance del artículo 36 de la Ley Nacional N° 13.064 para determinar la procedencia de los punos observados.

Que en ese marco, la norma al referirse a las "disposiciones sobre legislación del trabajo" lo hace en función a los emolumentos que en forma directa percibe el trabajador, y no a otras beneficios que le corresponden indirectamente como por ejemplo, las previsionales.

Que así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo señalan Ricardo DRUETTA y Ana GUGLIELMINETTI al sostener que: "La PTN entendió que los pagos al personal a que refiere el art. 36 "...son aquellos que se deben efectuar directamente a los empleados y obreros que trabajan en las obras y no a aquellas otras erogaciones a cargo del contratista que sólo indirectamente los puede llegar a beneficiar o que tienen un destino distinto (v.gr. impuesto de aprendizaje, aportes jubilatorios, contribuciones sindicales, etc.)." (documentos 95:140". (Ley de Obras Públicas comentada y anotada, pag. 277).

Que por su parte Fernando MÓ al analizar el artículo 36 de la Ley Nacional N° 13.064 señala bajo el título "Alcance de la disposición, legislación del trabajo y Previsión Social": que: "Debemos precisar dos conceptos; nos referimos a la diferencia existente entre 'legislación del trabajo o derecho del trabajo' y 'Previsión Social'.

Advertimos que esta última no atañe, exclusivamente, al derecho del trabajo, sino que tiende a la protección individual en los más diversos sectores. En consecuencia, el alcance de la previsión social es más amplia que el derecho del trabajo, que solo rige la actividad de los trabajadores bajo dependencia, inclusive antes y se desarrolla con posterioridad a este último.

Al respecto se ha expresado: "En el sentido más amplio, la previsión social coincide con la seguridad social que, sin duda, es una de las instituciones más poderosas que influyen en la evolución de la sociedad moderna. Pero la seguridad social o previsión social no es derecho del trabajo. Éste se limita a los trabajadores dependientes en cuanto tales, mientras la previsión social tiene un ámbito personal mucho más vasto.

Otro autor expresa: "Por el hecho de que la mayoría de las normas de previsión social se aplican a los trabajadores, no resulta posible concluir que éstas tengan carácter de normas de derecho laboral; pues para éste lo importante reside en la condición del trabajador, subordinado al patrono por un contrato de trabajo; mientras, para la previsión social, interesa más la situación de invalidez en que se encuentra el sujeto de la norma jurídica".

Ahora bien; resulta fácil observar que el art. 36 que comentamos se refiere, exclusivamente, a la legislación del trabajo, como lo expresa, a sea, el derecho del trabajo.

En consecuencia, según los comentarios formulados precedentemente, consideramos que la ley de obras públicas no se refiere a la "previsión social", restringiendo su ámbito a la órbita de la "legislación o derecho del trabajo".

Por tanto, debe entenderse que la "negligencia grave" a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista, y la paralización del "trámite y pago de los certificados de obra", solo puede imputarse cuando el empresario incurre en el incumplimiento de normas atinentes a "la legislación o del derecho del trabajo", es decir, falta de pago de jornales, omisión de vacaciones, falta de licencias de vacaciones, etc.

En cambio, entendemos que no existe "negligencia grave" para la Ley 13.064, ni podrá disponerse la paralización del trámite y pago de los certificados, en los casos en que la acción u omisión del contratista viole principios, exclusivamente, de previsión social: aporte jubilatorio, aporte al Instituto de Remuneraciones, turismo social, etc.

Lo expuesto con anterioridad se refiere al análisis estricto del texto de la ley de obras públicas que estudiamos, pero nada obsta para que las piezas contractuales se disponga que el empresario debe cargar con obligaciones que, a pesar de no surgir del art. 36". (los destacados no son del original) (Fernando MÓ, Régimen Legal de las Obras Públicas, Depalma, pag.252/3).

Que la claridad con la que el autor citado expone el tema, no merece mayor análisis, por lo que debemos concluir que la observación efectuada en cuanto al incumplimiento del contratista a las disposiciones del art. 36 de la Ley Nacional N° 13.064 por cuestiones relacionadas a la Seguridad Social, no resiste el encuadre legal propiciado en ella, lo que deberá ser tenido presente por la Secretaría Contable en casos futuros.

Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el punto 7.1 de las Disposiciones Generales prevé que "cuando lo requiera el comitente", el contratista deberá presentar los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones referidas a los aportes. Sobre esta cuestión y ante la documentación presentada, la Auditora cuestiona los planes de facilidades de pago al sostener que hasta que no se pague la última cuota no se garantizan las obligaciones laborales, con la posibilidad de que si no se pagan algunas de esas cuotas puede caducar el plan.

Que sobre este punto la Auditora actuante debe tener presente que la suscripción de planes de facilidades de pago, aun en casos en que el de la seguridad

social, no posee el alcance que ella enuncia. En efecto, el doctrinario Mario Rejtman FARAH, bajo el interrogante "¿Qué sucede si el oferente se hubiera acogido a una moratoria para el pago de deudas de tal naturaleza?", plantea que: "No existe en tal caso impedimento para ofertar o llegar a ser contratado, pues el objetivo perseguido es que no se lo haga con los incumplidores de obligaciones impositivas o previsionales, si éstas son exigibles. Por tanto, si la deuda es futura, por haber sido diferida la obligación de pago y ella ha sido aceptada por el Estado, no media obstáculo alguno para presentar una propuesta válida". (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Aheleda Perrot, pag. 216).

Que en función a estos parámetros, un plan de pagos convenido con el Estado en modo alguno puede merecer reproche, toda vez que la deuda pasa a ser futura por consentimiento del propio Estado recaudador; circunstancia ésta que la Secretaría Contable deberá tener presente para casos futuros.

Que continuando con el análisis de estos puntos, corresponde efectuar la pertinente aclaración sobre la observación relacionada al Seguro de Riesgo del Trabajo y la falta de cobertura allí señalada.

Que volviendo a la doctrina Fernando MÓ, éste indica en el caso de los seguros que: "Como es dable apreciar, el art. 36 en estudio, custodia el cumplimiento de la legislación del trabajo por parte del contratista, estableciendo sanciones que pueden llevarlo a la rescisión contractual. Tal vez por ello, y porque la disposición citada no penetra en el extenso campo de la previsión social, como lo hemos aclarado en el párrafo anterior, es que la ley nada dice respecto de la contratación de seguros destinados a cubrir riesgos de obreros.

Sin embargo, los pliegos de condiciones, sin excepción, establecen la obligatoriedad del seguro para todos los obreros a cargo del contratista". (Fernando MÓ, Régimen Legal de las Obras Públicas, Depalma, pag.257).

Que por consiguiente, la idea que postula este doctrinario es que la custodia sobre el cumplimiento de la obligación del contratista de cubrir riesgos del trabajo "no" surge del art. 36 de la ley en estudio, sino que normalmente, ese control tiene origen contractual. Esta expresión del jurista en cita resulta atinada pues, así se encuentra prevista en el artículo 37 C. E. Punto b) del Pliego de Bases y Condiciones, por el que se estipula la obligación del contratista de cumplir con la ley de riesgo de trabajo para todo el personal afectado a la obra, quedando así comprendido de este modo el control del Estado contratante referido a verificar el cumplimiento de ésta formalidad.

Que partiendo de estos conceptos, el contratista posee, además de la obligación que la ley le impone de contratar una ART, la obligación contractual de asegurar -por los riesgos del trabajo- a todo el personal afectado a la obra, y en éste sentido, demostrar al Estado comitente la pertinente vigencia de la cobertura por todo el plazo de la contratación, independientemente de la forma en que éste efectúe los pagos, ya que lo que aquí interesa es que mantenga la vigencia de esa cobertura durante todo el contrato con el objeto de que se cubra cualquier siniestro.

Que a tal efecto, el contratista mediante nota de fs. 311 dice acompañar certificado de libre deuda de la ART, cuyo comprobante luce agregado a fs. 313, leyéndose en él, entre otras cosas, que al 31/03/2011 la empresa no "tiene deuda alguna con esta entidad". Sobre éste comprobante, la Prosecretaría Contable *s/c* de la Secretaría Contable indica a fs. 386 que el número del contrato no se corresponde con el de fs. 9/14, además de no corresponderse éste con el período en cuestión. No obstante, a fs. 416 se agrega otro comprobante en el cual el número del contrato coincide con el de fs. 9/14, y el período se corresponde con el observado, sin que ello fuera analizado a fs. 580 *via*.

Que a más de lo dicho, a fs. 235 la autoridad administrativa responsable insiste en la cancelación de las obligaciones observadas, sustentando sus dichos en la copia fiel de la documental agregada a fs. 132 por la que la empresa aseguradora recibe los pagos, y que los excedentes en los importes abonados probablemente se deban al concepto de intereses por mora. Agrega además que los pagos se pueden realizar en forma directa a la aseguradora como ocurre en el presente caso.

Que sin perjuicio de la cuestión así planteada, de la cual las autoridades involucradas son responsables personalmente por cualquier acontecimiento dañoso al Estado fundado en la falta de seguro de riesgo de trabajo para la obra, ya que ello compete a su obligación de vigilar el cumplimiento del contrato, lo cierto es que las expresiones formuladas en la observación revisten el carácter de subjetivas toda vez que a lo largo del Acta de Constatación y de los informes producidos no se demuestra un hecho concreto que pruebe en forma fehaciente la falta de cobertura. De hecho a fs. 313 y 416 se agregan las constancias de la aseguradora de las cuales se extrae la falta de deuda con ésta al 31/03/11 y 30/04/11 respectivamente, sin que allí se lea interrupción alguna al contrato de seguro, por lo que corresponde el

levantamiento de la presente observación atento la falta de elementos que la sustenten.

Que por la observación 6 se repara en la extemporaneidad para el cumplimiento de la cláusula cuarta del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscrito con la Subsecretaría de Obras Públicas (P.E.N.) y registrado bajo el N° 13964.

Que sobre esta observación el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia indica a fs. 382 que ha informado a la administración que tenga presente el cumplimiento en tiempo y forma de lo convenido; ello, en concordancia con lo que la Auditora Fiscal sugiere a fs. 249. Agrega además la auditora que este reparo reviste la calidad de insalvable, difiriendo su análisis para el control posterior a fin de determinar sus consecuencias y las posibles responsabilidades de agentes y funcionarios.

Que en función de lo aquí analizada, y como consecuencia del carácter insalvable que posee la observación conforme lo apuntado precedentemente, corresponde instruir a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable que haga el seguimiento del reparo así formulado y verifique los extremos allí previstos en el marco del control posterior.

Que con respecto a la observación 7, la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable sugiere su levantamiento (fs. 387) como consecuencia de la documentación agregada a fs. 276/310.

Que con el sentido indicado, propiciamos su levantamiento.

Que por último merece una especial consideración la manifestación que la Auditora actuante efectúa a fs. 258 en cuanto dice que: "...resulta importante destacar el carácter temerario de los términos expresados por el Contador Público Carlos BUSTAMANTE, que ante un desconocimiento casi absoluto de la normativa vigente en la actualidad..." (el destacado no es del original).

Que sobre el particular debemos indicar que en el futuro deberá abstenerse de la utilización de expresiones con este tenor, dirigidas a agentes o funcionarios sobre quienes realizamos la actividad de control externo, y quienes, en definitiva, ejercen su derecho de defensa.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial N° 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27° del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Levantar las observaciones 1, 2, 3, 6 y 7 de Acta de Constatación N° 80/11 mantenidas por la Disposición Secretaría Contable N° 141/2011, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 2°.- Indicar a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable que deberá hacer el seguimiento de las presentes actuaciones en el marco del control posterior respecto del cumplimiento de la cláusula cuarta del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscrito con la Subsecretaría de Obras Públicas (P.E.N.) y registrado bajo el N° 13964.

ARTICULO 3°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con copia certificada de la presente y con remisión del Expediente del registro de la Gobernación N° 6400 MO/11, caratulado: "S/ CERTIFICADO Y ACTA DE MEDICIÓN N° 8 PARA LA OBRA: CENTRO DE SALUD B° EL SOLAR DE LA LAGUNA RIO GRANDE, QUE EJECUTA LA EMPRESA COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A."; y en el Tribunal, al Secretario Legal, a la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable y a la Auditora Fiscal C.P. Claudia CHAVEZ.

ARTICULO 3°.- Registrar, Comunicar, Publicar, cumplido ello archivar.-

LONGHITANO
CABALLERO

VISTO: Los Expedientes Letra T.C.P. - PR. N° 237/2011 y T.C.P. - PR. N° 238/2011 del registro de este Tribunal de Cuentas caratulados: *S/ RECURSO INTERPUESTO POR LA SRA. ESTELA MARIS VANDONI* y *"S/ RECURSO INTERPUESTO POR EL SR. VICTOR HUGO MARTINEZ (APODERADO DR. EDELDO LUIS AUGSBURGER)"* y

CONSIDERANDO

Que los señores Estela Maris VANDONI y Víctor Hugo MARTINEZ dedujeron recursos de reconsideración contra la Resolución Plenaria N° 379/2011.

Que en coincidencia con el criterio vertido en el Informe Legal N° 382/2011 Letra T.C.P.-S.L., y nuevamente en atención a la identidad de los planteos esgrimidos, resulta pertinente darles tratamiento de manera aunada, a efectos de evitar mayores dispendios administrativos.

Que a través de ambos expedientes, tramitaron sendos reclamos administrativos en relación a la forma en que se lleva a cabo el cálculo y percepción de los haberes de los Vocales de este Tribunal de Cuentas, así como también la forma en la que éstos influirían en sus respectivos emolumentos jubilatorios, por tratarse en el caso en concreto de vocales jubilados.

Que la Secretaría Legal de este tribunal se expidió en esa oportunidad, siendo plasmado el mismo criterio en la Resolución Plenaria N° 379/2011, que declaró inadmisibles los reclamos administrativos articulados por los Sres. Estela Maris VANDONI y Víctor Hugo MARTINEZ, por carecer este Tribunal de Cuentas de competencia legal para determinar la metodología de liquidación de haberes jubilatorios, lo cual es atribución del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social.

Que las presentaciones incoadas fueron tramitadas y resueltas como reclamos administrativos, de conformidad con lo previsto por el artículo 148 de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo, lo cual surge tanto del Informe Legal N° 382/2011 Letra T.C.P.-S.L., como de los considerandos de la Resolución Plenaria N° 379/2011, la que les fuera notificada a ambos interesados el 02 de noviembre de 2011, contra la que interpusieron la presentación en tratamiento, el 09 de noviembre de 2011.

Que en el contexto reseñado resulta necesario determinar si procede admitir el recurso de reconsideración interpuesto por los reclamantes VANDONI y MARTINEZ.

Que ha tomado intervención la Secretaría Legal, mediante Informe Legal N° 1/2012 cuyas conclusiones se comparten.

Que el trámite y resolución del asunto en cuestión, fue encaadrada como reclamo administrativo en los términos del artículo 148 y siguientes de la Ley provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo.

Que en tal sentido, el recurso interpuesto por ambos interesados resulta inadmisibles ya que, habiéndose resuelto el reclamo mediante la resolución atacada, la instancia administrativa se vio agotada y ha quedado expedita la judicial, por ser este uno de sus efectos procesales propios.

Que tiene dicho al respecto la Doctrina: *"...El reclama se exige como presupuesto procesal. Antes de inicar el correspondiente proceso debe el interesado deducir la reclamación previa y sólo cuando la autoridad decida el reclamo o se presume denegado mediante el silencio queda expedita la vía judicial..."* (HUTCHINSON, Tomás, "Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo Comentada - 1997", página 342).

Que en función de tales consideraciones, más allá de que ninguna de las presentaciones incorpora elementos novedosos que aconsejen modificar el criterio fijado mediante la Resolución atacada, en cuanto a la falta de competencia legal de este Tribunal para decidir sobre su pretensión, corresponde declararlas inadmisibles en esta oportunidad, debido a que una vez deducida la reclamación previa y resuelta ésta por parte de este Tribunal, ha quedado expedita la vía judicial y no procede entonces dar tratamiento a cualquier otro reclamo o recurso al respecto.

Que en virtud de que se encuentra vigente la FERIA ADMINISTRATIVA dispuesta mediante la Resolución Plenaria N° 310/2011 hasta el 31 de enero de 2012, resulta pertinente su habilitación a los efectos de la emisión del presente acto administrativo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad con lo establecido por los Artículos 1º, 26 y 27 de la Ley Provincial Nº 50 y la Resolución Plenaria Nº 373/2010,

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Habilitar la Feria Administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria Nº 310/2011 a los efectos de la emisión del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º: Declarar inadmisibles los recursos de reconsideración interpuestos por los señores Estela Maris VANDONI y Víctor Hugo MARTINEZ, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º: Notificar por cédula, con adjunción de copia certificada del presente acto administrativo, a la Sra. Estela Maris VANDONI y el Sr. Víctor Hugo MARTINEZ, a los domicilios constituidos en sendas presentaciones.

ARTÍCULO 4º: Notificar a la Secretaría Legal en la sede de este Tribunal.

ARTÍCULO 5º: Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 010

12-01-12

VISTO:

El Expediente del registro de la Gobernación Nº 13149 MO/11, caratulado: "S/ REDETERMINACIÓN Nº 1 A 4 OBRA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 6 - USHUAIA"; y,

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones fueron intervenidas en el control previo, ordenándose el Acta de Constatación Nº 118/11 – AUDITORIA OBRAS PUBLICAS-, anulándose CUATRO observaciones:

1. Según se desprende de los índices publicados obrantes en la planilla de fs. 96/98, la categoría de la obra verificó un incremento superior al 5% en los meses de Jul/09, Nov/09, Mar/10, May/10 y Oct/10, los cuales no se corresponden con los tramos de la redeterminación presentada, a Sept/09, Feb/10, May/10 y Nov/10. Deberá justificarse la selección de dichos meses, incorporando las planillas de cálculo respectivos. Esta observación ya ha sido realizada en anteriores intervenciones, por ejemplo exptes. 3939/MO/11, 15906/MO/10, por lo que se recomienda tenerla en cuenta al momento de conformar los expedientes de aprobación de redeterminaciones de precios.

2. Sin perjuicio de la observación plasmada en el punto precedente, corresponde observar que se ha detectado una irregularidad en el cálculo del cuarto tramo de redeterminación (Nov/2010), ya que, a fin de determinar el saldo físico de obra, se ha destruido el importe correspondiente a los trabajos efectuados en el mes de Octubre/10 por \$158.208,05, cuando la certificación indica \$146.365,26. Téngase presente que el propio pliego de bases y condiciones establece que "...Por obra faltante se entenderá el saldo físico al último día del mes anterior."

3. Analizando los antecedentes vinculados a la justificación y origen del presente gasto, se verifica la existencia de un atraso significativo en el comienzo de los trabajos contratados, el cual se produjo en fecha 01/10/10 según acta adjunta a fs. 100, considerando las fechas de apertura de ofertas (07/04/2009), adjudicación mediante Decreto Nº 1077/10 (29/04/2010) y firma del contrato (20/05/2010). De las actuaciones no surgen las causas del atraso. Las demoras verificadas en el desarrollo de la contratación generan consecuencias negativas de distintos órdenes, como por ejemplo:

-Demora en la satisfacción de necesidades de orden colectivo

-Incremento en el valor de la obra, como consecuencia de las redeterminaciones de precios. Ello determina que, a noviembre de 2010, la obra registre un avance de obra de 18,09% y, paralelamente un incremento de su valor monetario básico de aproximadamente el 23,63%.

Es decir, el valor que debe reconocer la Provincia a la contratista en carácter de redeterminación supera al valor monetario de la contraprestación recibida.

-Erogaciones de fondos con cargo al Poder Ejecutivo Provincial, financiándose el monto básico con fondos provenientes del P.E.N (Convenio Único de Colaboración y Transferencia Nº 13692, ratificado por Decreto Provincial Nº 523/09). Téngase presente que, el financiamiento otorgado por el Estado Nacional tiene un límite máximo (precio tope), razón por la cual el mayor valor generado por las redeterminaciones de precios debe ser soportado por la Provincia. En este caso, se afectarían los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario.

-Posibilidad de pérdida de la fuente de financiamiento, considerando el tiempo transcurrido desde la firma del convenio respectivo con el Poder Ejecutivo Nacional.

En virtud de lo dicho, además de brindarse los descargos que se crean pertinentes, se deberá informar respecto de las posibles responsabilidades de los funcionarios y/o agentes intervinientes, toda vez que las circunstancias descriptas ponen de manifiesto deficiencias en el diligenciamiento de la contratación que tendrán como consecuencia futura, una salida de fondos con cargo al Poder Ejecutivo Provincial. Téngase presente que, la cuantía del gasto aquí tratado tiene relación directa con el inicio de los trabajos y el avance físico producido, tomando como punto de partida para el reconocimiento de la actualización de valores contractuales, la fecha de apertura, por lo cual de no producirse la demora constatada en las presentes respecto del inicio de trabajos, este gasto no tendría la significatividad señalada. /]

4. A fs. 33/43 se agrega copia certificada de la planilla de cómputo y presupuesto, la cual expone un valor total ofertado que no se corresponde con el valor adjudicado utilizado como base del cálculo de redeterminación.

Que en virtud de los descargos incorporados, a fs. 224 se emite el Informe Técnico Nº 434/11, Letra: SC-GEOP-AT, suscripto por el Ing. Alejandro MORA el que se encuentra redactado en los siguientes términos: "1. Viene el Expte en esta instancia con los descargos a las Observaciones formuladas por Acta de Constatación TCP 118/2011 – Auditoría Obras Públicas. (fs. 146/153) 2. A fs. 144/145 se agrega Informe Técnico Nº 383/11 Letra: SC-GEOP-AT sin Observaciones de índole Técnica. En la segunda conclusión del mismo se hace referencia a la falta de incorporación de la Tabla de Referencia para el cálculo de las redeterminaciones correspondientes. Dicha tabla fue agregada a fs. 164."

Que a fs. 225 se emite el Acta de Constatación Nº 126/11 – AUDITORIA OBRAS PUBLICAS-, por la cual se procede a levantar los reparos 1º, 2º y 4º; y se mantiene el 3º).

Que a fs. 256 luce la Disposición Secretaría Contable Nº 210/11, por la que se mantiene la Observación 3 del Acta de Constatación Nº 118/11, sostenida por su similar Nº 126/11.

Que ingresando al estudio de la observación traída a debate plenario, apreciamos que el Ministro de Obras y Servicios Públicos manifiesta en su descargo de fs. 260 que respecto a la cuestión planteada, esto es, el atraso en los comienzos de los trabajos contratados, se aplique el criterio sustentado en el Acuerdo Plenario Nº 2245 por el cual se dijo que el control ejercido por el Tribunal de Cuentas sobre contratos ya suscriptos y con principio de ejecución lo es en el ámbito del control posterior, con lo cual, no corresponde en ésta instancia efectuar reparos del control previo.

Que efectivamente asiste razón al Sr. Ministro ya que una cuestión similar fue resuelta en el Acuerdo Plenario Nº 2245, en el cual se sostuvo:

"En esa instancia es que llegan las actuaciones al cuerpo plenario como consecuencia de la apelación formulada por el cuentadante al sostenimiento de la observación Nº 3.

Por mi parte y analizado el expediente, se observa que la observación Nº 3 que es motivo apelación, tiene como fundamento esencialmente en "...la existencia de un atraso significativo en el comienzo de los trabajos contratados, el cual se

produjo en fecha 23/11/10 según acta adjunta a fs. 40, considerando las fechas de apertura de ofertas (19/03/2009), adjudicación mediante Decreto Nº 2570/09 (09/11/2009) y firma del contrato (21/07/2010). De las actuaciones no surgen las causales del caso...".

Como se puede ver, el expediente es remitido a instancia de control previo con motivo de las redeterminación de precios, siendo por ello que corresponde diferenciar el control del gasto, que en el presente caso lo es en marco del control preventivo, al tomar intervención el Tribunal de Cuentas antes del pago conforme la Resolución Plenaria Nº 01/01, y el control del contrato y los requisitos exigidos normativamente antes de su perfeccionamiento, o bien, como en el caso los motivos en el atrazo para su perfeccionamiento, tal el fundamento de la observación formulada, y que si no haberse determinado ningún presunto perjuicio fiscal con motivo de ello, corresponde se levante la misma.

En consecuencia al encontrarse suscripto el contrato y con principio de ejecución, el control que ejerce este organismo lo es en el ámbito del control posterior, y por lo tanto no corresponde en esta instancia formular reparos en el ámbito del control previo en relación al contrato, por lo que corresponde levantar la observación Nº 3 formulada...".

Que con sustento en el precedente administrativo transcrito corresponde el levantamiento de la observación 3 del Acta de Constatación Nº 118/11, sostenida por su similar Nº 126/11, y mantenida por la Disposición de Secretaría Contable Nº 210/11.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo previsto en la Ley Provincial Nº 50, y conforme a la estipulaciones del artículo 27º del citado cuerpo normativo.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Levantar la observación 3, del Acta de Constatación Nº 118/11, sostenida por su similar Nº 126/11, y mantenida por la Disposición de Secretaría Contable Nº 210/11; por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTICULO 2º.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notificar al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con copia certificada de la presente y con remisión del Expediente del registro de la Constatación Nº 13149 MO/11, caratulado: "S/ REDETERMINACIÓN Nº 1 A 4 OBRA AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 6 - USHUAIA"; y en el Tribunal, a la Prosecretaría Contable y a la Secretaría Contable y a la Auditora Fiscal C.P. Valeria ROLON.

ARTICULO 3º.- Registrar, Comunicar, Publicar, cumplido el fin archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. Nº 011

13-01-12

VISTO:

El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Letra SL Nº 372, año 2011, caratulado "S/REQUERIMIENTO DE INTERVENCION EN EXPTE. 19701-MO-2010 S/FIDEICOMISO AUSTRAL" y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones *ut supra* citadas fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas en consulta, en el marco de la competencia legalmente atribuida por el artículo 2º, inciso j) de la Ley provincial Nº 50.

Que el trámite se orienta a la implementación del contrato de Fideicomiso entre el Estado provincial y Nación Fideicomisos S.A., en el marco del "Acuerdo puro Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego", Convenio Registrado bajo el número 14396, aprobado en todos sus términos la Ley provincial Nº 827.

Que la Secretaría Legal de este Órgano de Control, tomó intervención mediante el Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L. que se adjunta y forma parte de la presente.

Que los Miembros de este Tribunal de Cuentas compartimos en su totalidad el criterio volcado en el citado Informe, por lo que corresponde su aprobación y, en virtud de razones de brevedad, hacemos propios sus términos y nos

remitimos a sus respectivas conclusiones.

Que corresponde instruir a la Secretaría Contable y, por su intermedio a los señores Auditores Fiscales del Organismo, a que se incluya en el Informe de la Cuenta de Inversión que debe elaborarse de manera anual, un acápite especial dedicado a control que se efectúe respecto del denominado "Fideicomiso Austral".

Que resulta pertinente también, hacer saber al señor Contador General de la provincia, que deberá tomar los recaudos necesarios para intervenir en el control de los aportes a ingresar en el denominado "Fideicomiso Austral", en orden a las atribuciones, competencias y responsabilidades establecidas por la Ley provincial Nº 495.

Que deviene oportuno también, poner el presente acto administrativo y el Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L., en conocimiento del señor Fiscal de Estado de la provincia.

Que en virtud de la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria Nº 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- procede su habilitación a los efectos de la emisión de este acto administrativo, atento a la importancia de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.

Que este Cuerpo Plenario resulta competente para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto por los artículos 1º; 2 inciso j); 4 inciso g); 26 y 27 de la Ley provincial Nº 50 y Resolución Plenaria Nº 373/2010.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Habilitar la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria Nº 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- para la emisión del presente acto administrativo, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º: Determinar que el control de los aportes efectuados en relación al denominado "Fideicomiso Austral", corresponde a la esfera de competencia legal de este Tribunal de Cuentas, bajo las metodologías de Rendición de Cuentas y Control de Gestión, ambas conceptualmente relativas al Control Posterior, conforme el análisis efectuado en el Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L., el cual se comparte plenamente y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3º: Comunicar al señor Contador General de la provincia, que tome los recaudos pertinentes a los efectos de intervenir en el control de los aportes a ingresar en el denominado "Fideicomiso Austral", en orden a las atribuciones, competencias y responsabilidades establecidas por la Ley provincial Nº 495.

ARTÍCULO 4º: Notificar a la señora Gobernadora de la Provincia, María Fabiana RÍOS, mediante la remisión de copia certificada del presente acto administrativo y del Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L.

ARTÍCULO 5º: Notificar a la Comisión de Seguimiento creada mediante el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, registrado bajo el número 14396 y aprobado por la Ley provincial Nº 827, mediante la remisión de copia certificada del presente acto administrativo y del Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L.

ARTÍCULO 6º: Notificar al señor Fiscal de Estado de la provincia, mediante la remisión de copia certificada del presente acto administrativo y del Informe Legal Nº 2/2012, Letra T.C.P. - S.L.

ARTÍCULO 7º: Poner en conocimiento de la Secretaría Contable y, por su intermedio, a los Auditores Fiscales del Organismo, dejando constancia de que el Informe de la Cuenta de Inversión que debe realizar anualmente este Tribunal, deberá incluir un acápite especial dedicado al control que se efectúe respecto del denominado "Fideicomiso Austral".

ARTÍCULO 8º: Notificar en la sede de este Órgano de Control a la Secretaría Legal y por su intermedio a todos los abogados del Cuerpo.

ARTÍCULO 9º: Comunicar y publicar. Cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 012

13-01-12

VISTO: La Resolución Plenaria N° 273/2010 y lo establecido en el artículo 4 de Ley Provincial N° 861 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° del acto administrativo citado en el visto, se determinó: "Congelar, a partir de la liquidación de haberes del mes de septiembre de 2010, la remuneración bruta que por todo concepto perciben los suscriptos en carácter de Miembros del Tribunal de Cuentas, en la suma que resulta de la liquidación correspondiente al mes de Agosto de 2010 - "Expediente Letra TCP -DA N° 171/2010 caratulada "S/LIQUIDACIÓN DE HABERES AGOSTO 2010", CONFORME EL Escalafón previsto por Resolución Plenaria N° 215/10, dejando constancia que dicha suma sólo podrá ser incrementada, cuando la misma sea superada por el límite impuesto por el artículo 73 inc 4 de la Constitución Provincial, de acuerdo a la reglamentación prevista en el artículo 20 de la Ley 805 y a la limitación dispuesta en el artículo 7° de la Ley Provincial 50. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos".

Asimismo, por el artículo 2° de la mencionada Resolución Plenaria, se decidió: "Disponer, que el factor correctivo prevista por Anexo I de la Resolución Plenaria N° 215/10 en relación a los suscriptos, será absorbida por futuros aumentos".

Que para un mayor entendimiento de lo dispuesto en la aludida Resolución Plenaria N° 273/2010 y lo que debe resolverse en esta instancia, corresponde memorar lo expuesto en sus considerandos, en atención a lo dictaminado a través del "Acta Sala Acusadora Nro. 005/2010" del 8 de septiembre de 2010, labrada en el Juicio Político que se instara contra los miembros de este Tribunal de Cuentas provincial, señalada en el visto.

Que en los considerandos de la citada Resolución Plenaria, en referencia al Acta Sala Acusadora Nro. 005/2010, se dijo:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Que mediante la misma se resolvió en su Artículo 4° desestimar dicho Juicio Político en relación al Sr. Vocal Contador CPN Luis Alberto CABALLERO y al Sr. Vocal Abogado Dr. Miguel LONGHITANO.

Que la citada acta fue notificada en fecha 08 de septiembre de 2010.

Que en virtud de los antecedentes que integran el Acta del Visto, resulta que los haberes percibidos por los suscriptos se encuentran alcanzados por el principio de la incorporación o del derecho adquirida.

Que el artículo 165 de la Constitución Provincial establece que los integrantes del Tribunal de cuentas "tendrán los mismos incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas que los magistrados del Poder Judicial", entre las que se encuentra el derecho a percibir retribuciones que no podrán ser disminuidas mientras permanezcan en sus funciones (artículo 144 C.P.T.D.F.).

Que en orden a lo prescripta en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Provincial 805, resulta que la remuneración de los suscriptos, en consideración a la garantía citada en el párrafo precedente, no será afectada, pero no podrá resultar incrementada por causa o motivo alguno hasta tanto encuadre en el límite impuesto en el primer párrafo del citado artículo".

Como puede advertirse de los fundamentos normativos de la Resolución Plenaria N° 273/2010, sustancialmente tuvieron que ver con lo dispuesto en el artículo 73 inciso 4 de la Constitución Provincial, de conformidad con la reglamentación prevista en el artículo 20 de la Ley provincial N° 805 y la limitación dispuesta en ese momento por el artículo 7° de la Ley provincial N° 50.

Que concatenado con la normativa señalada en el considerando anterior (específicamente artículos 20 de la Ley provincial N° 805 y 7° de la Ley provincial N° 50), corresponde merituar en esta instancia lo siguiente:

Que respecto del artículo 20 de la Ley provincial N° 805, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia se ha pronunciado en autos caratulados: "Fiscal de Estado de la Provincia de T.D.F. c/Provincia de Tierra del Fuego acción declarativa de certeza - medida de no innovar" (Expte. N° 2289/10), en que centralmente determinó: "Hacer lugar a la acción de certeza presentada por el actor y, por tanto declarar que es extensiva al Fiscal de Estado y a su Fiscal Adjunto, la intangibilidad de sus emolumentos consagrados en el art. 144 de la Constitución de

la Provincia de Tierra del Fuego; consecuentemente no le resultan aplicables las disposiciones del art. 20 de la ley 805".

Que en fecha 23 de diciembre de 2011, se sancionó la ley Provincial 861 (promulgada por Decreto Provincial N° 3156 del 23/12/11, Publicada en el Boletín Oficial Año XX N° 2960 con fecha 30/12/11 y vigente a partir del 31/12/11, conforme lo previsto en el artículo 112 de la Constitución Provincial), que en su artículo 4° establece: "Incorpórase el artículo 25 a la Ley provincial 841, con el siguiente texto: Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 7 de la Ley Provincial 50 por el siguiente texto: Artículo 7°.- La remuneración a percibir por los miembros del Tribunal será equivalente al noventa por ciento (90%) de lo de dieta del gobernador".

Que en atención a lo anteriormente expuesto, razonablemente puede interpretarse que lo establecido en el nuevo artículo 7° de la Ley provincial N° 50, resulta ser un mero parámetro referencial, en cuanto al básico de la remuneración que correspondería percibir los miembros de este Tribunal de Cuentas de la Provincia, respecto de quienes correspondería considerar excluidos de la limitación relativa a los adicionales particulares por título y antigüedad, para la aplicación del tope establecida en el artículo 73, inciso 4 de la Constitución Provincial; su reglamentación a cualquier otra normativa que imponga dicha limitación.

Que respecto de dichas adicionales particulares, corresponde destacar que fueron percibidos por los actuales Miembros desde su ingreso a este Tribunal de Cuentas, las que atenta al principio de la incorporación o del derecho adquirida, no fueron eliminados pese al congelamiento dispuesto por Resolución Plenaria N° 273/2010.

Que asimismo se entiende que dichos adicionales particulares, en relación a la imposibilidad de su percepción alcanzaría únicamente a los funcionarios públicos electos o designados y no respecto de los miembros de este Tribunal de Cuentas, en virtud de las previsiones relativas a su designación, establecidas por el artículo 163 de la Constitución Provincial.

Que no obstante dicha interpretación, y atento el estado de incertidumbre en la relación jurídica laboral de los Miembros del Tribunal de Cuentas, respecto de los alcances y modalidad dispuesta en el artículo 20 de la Ley provincial N° 805 y la actual redacción del artículo 7° de la Ley provincial N° 50, resulta prudente la interposición de una acción declarativa de certeza a fin de que un tercero imparcial, específicamente el Superior Tribunal de Justicia, dirima dicha cuestión, máxime que en la actualidad se suman factores agravantes de esa incertidumbre, con la referenciación de la remuneración del Gobernador de la Provincia, al sueldo de los Intendentes municipales de Ushuaia y Río Grande, sin que la normativa especifique los pormenores de acuerdo con los que deberá practicarse la pertinente liquidación.

Que concretamente la acción debe tender a que se esclarezca en forma definitiva, si los Miembros del Tribunal de Cuentas -al igual que el Fiscal de Estado- se encuentran excluidos de la aplicación del artículo 20 de la Ley provincial N° 805 o cualquier otra normativa que prohíba la percepción de los aludidos adicionales particulares y, si razonablemente la actualmente fijada por el art. 7° de la Ley provincial N° 50, resulta ser un parámetro referencial al básico, excluidos los aumentos adicionales por título y antigüedad, conforme las previsiones de los artículos 144, 163 y concordantes de la Constitución Provincial.

Que sin perjuicio de la interposición de la pertinente acción declarativa de certeza y hasta su resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia, corresponde instruir a la Dirección de Administración de este Organismo de Control, que momentáneamente continúe efectuando la liquidación de las remuneraciones de los Miembros, sin que se exceda el límite del 90 % de la actual remuneración del Gobernador, dejando constancia de que, si bien dichos adicionales particulares no serán percibidos, esa área deberá arbitrar las medidas necesarias para que no sean eliminados de los pertinentes recibos de haberes.

Que no obstante el interés particular que la resolución judicial del asunto posee para los actuales Vocales, la cuestión reviste una mayor relevancia a nivel institucional, pues tiende a dejar definitivamente establecida la modalidad de liquidación de las remuneraciones de los Miembros del Tribunal de Cuentas.

Que en virtud de la feria administrativa dispuesta mediante la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- resulta pertinente su habilitación, a los efectos de la emisión del presente acto administrativo, atento a la relevancia institucional expresada en el considerando precedente y sobre lo cual las dilaciones temporales operarían negativamente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que la presente se suscribe con el quórum que resulta del artículo 2° de la Ley provincial N° 50, en razón de los motivos invocados en Resolución Plenaria N° 373/10.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1°: Habilitar la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 para la emisión del presente acto administrativo, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°: Encomendar a la Secretaría Legal del Tribunal de Cuentas, a través del Secretario Legal, la promoción de una acción declarativa de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, con el objeto y alcances establecidos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3°: Instruir a la Dirección de Administración de este Organismo de Control, que hasta la resolución definitiva de la cuestión por parte del Superior Tribunal de Justicia provincial, la cual se le comunicará oportunamente, deberá continuar liquidando las remuneraciones de los Miembros de este Tribunal de Cuentas, sin que se excedan el límite del noventa por ciento (90 %) de la remuneración del Gobernador, conforme las previsiones del artículo 4° de la Ley provincial N° 861 y tomando los recaudos pertinentes a fin de que los adiciones particulares por título y antigüedad que, si bien no serán percibidos por los suscriptos, no deberán ser eliminados de los pertinentes recibos de haberes.

ARTICULO 4°: Notificar a la Secretaría Legal en la sede del Organismo, con copia certificada del presente acto administrativo.

ARTICULO 5°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 013

13-01-12

VISTO: Los Expedientes del Registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia Letra TCP PR N° 324/2011 caratulada "S/REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 12 LEY PROVINCIAL N° 50" y Letra TCP SL N° 10/2012 caratulada "S/CONJUECES TCP 2012"; el artículo 12 de la Ley Provincial 50, la Resolución Plenaria N° 07/2012 y lo dispuesto mediante Resolución Plenaria N° 001/2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 de la Ley Provincial 50 establece que: "En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el vocal que le sigue en turno, de conformidad con el sorteo para el ejercicio de la presidencia. Si el ausente o impedido fuera un vocal, será sustituido por un conjuer integrante de lo listo que anualmente elaborará el cuerpo entre los profesionales de la matrícula que reúnan los requisitos establecidos para la designación de los titulares".

Que a través de Resolución Plenaria N° 07/2012, se aprobó el Procedimiento establecido en su Anexo I para la Integración de los Listados de Conjuer que será utilizado para su oportuna desinsaculación.

Que el artículo 3° del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 07/2012, establece "La integración del listado se efectuará por sorteo ante el Cuerpo Plenaria de Miembros, con intervención del secretario Legal, quién labrará acta de todo lo actuado".

Que en fecha 11 de enero de 2012, se labró "Acta de Sorteo de Conjuer" que detalla los profesionales abogados y contadores que integran el listado de conjuer que durante el año 2012, podrán ser convocados para la integración del Plenario, en caso de ausencia o impedimento de alguno de los Miembros titulares.

Que por otra parte, conforme lo actuado por la Sala Juzgadora del Poder Legislativo Provincial, mediante Resolución Sala Juzgadora N° 006/10 de fecha 17 de Noviembre de 2010 y lo dispuesto por Resolución Plenaria N° 373/2010, el Cuerpo Plenario de este Tribunal se encuentra actualmente conformado sólo por dos Vocales titulares.

Que mediante Resolución Plenaria N° 001/2012, se comunicó que el Vocal de Auditoría C.P.N. Luis Alberdi CABALLERO hará usufructo de 21 días

correspondientes a su Licencia Anual del año 2010, ausentándose desde el 16 de enero al 05 de febrero de 2012.

Que atento todo lo expuesto y a los fines de asegurar el procedimiento de control preventivo previsto en el Punto 4 inc f) del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 01/01, en los supuestos de apelación ante el Cuerpo Plenario por parte del cuentadante en razón de observaciones formuladas por Auditor Fiscal y mantenidas por Disposición de Secretaría Contable, corresponde la desinsaculación establecida en el artículo 2° de la Resolución Plenaria N° 07/2012, a fin de contar con la actuación de un profesional Contador en carácter de Conjuer, que reemplace al Vocal Contador Luis Alberto CABALLERO, durante el período comprendido entre el 16 de enero y el 05 de febrero de 2012, en los supuestos que se requiera la emisión de actos para decidir sobre las apelaciones presentadas en tal marco procedimental.

Que, por otra parte, en función de la feria administrativa establecida por la Resolución Plenaria N° 310/2011, procederá la convocatoria del ciudadano profesional, para los casos en que ésta fuera especialmente habilitada.

Que cumplida la instancia de confección de los listados resultó desinsaculado el C.P. Juan Manuel CABALLERO, quien deberá ser convocado, haciéndole saber que sus tareas serán compensadas conforme el régimen previsto por el artículo 41 del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009.

Que por todo lo expuesto, resulta pertinente hacer saber al ciudadano profesional, que en caso de requerir su actuación como Conjuer en reemplazo del Sr. Vocal Contador Luis Alberto CABALLERO durante el período comprendido entre el 16 de enero y el 05 de febrero de 2012, será oportunamente convocado por la Presidencia del Organismo, a los efectos de la tramitación del procedimiento previsto en el Punto 4 inc f) del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 01/2001, modificada por su posterior N° 89/2002.

Que en virtud de la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- corresponde su habilitación a efectos de la emisión de este acto administrativo.

Que la presente se suscribe con el quórum que resulta del artículo 2° de la Ley Provincial 50, en razón de los motivos invocados en Resolución Plenaria N° 373/10.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido por los artículos 12° y 27° de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1°.- Habilitar la feria administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 -vigente hasta el 31 de enero de 2012- para la emisión del presente acto administrativo, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Hacer saber al C.P. Juan Manuel CABALLERO, que en caso de resultar necesaria su actuación en carácter de Conjuer a efectos de reemplazar al Sr. Vocal Contador Luis Alberto CABALLERO en el período comprendido entre el día 16 de enero y hasta el 05 de febrero de 2012, será oportunamente convocado por Presidencia del organismo, ello a los fines de resolver las apelaciones, que en el marco del procedimiento de Control Preventivo previsto en la Resolución Plenaria N° 01/01, sean presentadas por el cuentadante. Todo ello en razón de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Notificar al profesional de mención, con copia certificada de la presente, en el domicilio constituido de calle Gobernador Deloqui N° 555-Piso 2° de la Ciudad de Ushuaia, haciéndole saber que sus tareas serán compensadas, en caso de corresponder, conforme el régimen previsto por el artículo 41 del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009, como así también, que en caso de ausentarse de la Provincia, deberá comunicar al Tribunal esta circunstancia, en forma anticipada.

ARTICULO 4°.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 014

13-01-12

VISTO: El expediente Letra TCP - PR, Nro. 295/2011, caratulado: "S, FERIA ANUAL 2011" y la Nota Letra: TCP IPV. N° 72/12; y

CONSIDERANDO:

Que el agente Diego Luis VERNET, Legajo N° 103, ha usufructuado la primera fracción de la Licencia Anual Ordinaria Año 2012 entre el 12/12/11 y el 25/12/11, ambas fechas inclusive.

Que mediante la Nota Letra: TCP IPV. N° 72/12, el agente Diego Luis VERNET, Legajo N° 103, solicita modificar la segunda fracción de la Licencia Anual Ordinaria ha ser usufructuada desde el 30/01/12 al 19/02/12 ambas fechas inclusive, y la excepción a lo establecido en el Art. 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009 a fin de fraccionar la licencia en dos oportunidades, fundando su solicitud en razón del adelantamiento del ciclo lectivo de sus hijas, las cuales residen en la ciudad de Córdoba y la necesidad de realizar gestiones en dicha ciudad en el mes de Abril del corriente año.

Que ha los fines de no resentir el servicio solicita el corte de la Licencia Anual Ordinaria del Auditor David BEHRENS, Legajo N° 117, el cual ha prestado su conformidad a lo solicitado.

Que han tomado intervención, la Sra. Prosecretaría Contable A/C de la Secretaría Contable, sin indicar objeciones.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la presente, de conformidad a lo establecido en el artículo 26° y 27° de la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias, artículo 39° del Reglamento Interno aprobado por Resolución Plenaria N° 152/2009 y lo establecido por medio de la Resolución Plenaria N° 310/2011.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Autorizar excepcionalmente y por única vez el fraccionamiento en dos veces de la Licencia Anual Ordinaria del Año 2011 al agente Diego Luis VERNET, Legajo N° 103 y la modificación de la segunda fracción del período de Licencia Anual 2011, a ser usufructuada entre el 30/01/2012 y 19/02/2012 ambas fechas inclusive, quedando pendiente de usufructo la cantidad de CINCO (5) días, los cuales deberán gozarse dentro del período de usufructo establecida en el Art. 38° de la Resolución Plenaria N° 152/2009, ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Contar por razones de servicio la Licencia Anual Ordinaria Año 2011 del agente David BEHRENS, Legajo N° 117, a partir del día 30/01/2012, quedando pendiente de usufructo la cantidad de CINCO (5) días.

ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a los agentes, dar intervención a la Dirección de Administración, comunicar, cumplido, Archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 015

13-01-12

VISTO:

El Expediente N° 4133 ED/10 caratulado: "S/ CANCELACIÓN DE FACTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL. CDTE. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009", y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acuerdo Plenario N° 2235 se dispuso: "Artículo 1°.- Mantener las observaciones N° 1, 2, 3 y 4 obradas mediante "Acta de Constatación TCP N° 430/10 - Adm. Central" de fecha 24 de agosto de 2010, mantenidas por Disposición Secretario Contable 16/2011, ello de conformidad a los fundamentos expuestos. Artículo 2°.- Hacer saber a la Sra. Ministra de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología Lic. Sandra Isabel MOLINA, que en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley 50 podrá, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, insistir en el cumplimiento del acto observado. Artículo 3°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenaria de Miembros, notificar a la Sra. Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Lic. Sandra Isabel MOLINA, con remisión del Expediente del Registro de la Gobernación de la Provincia, N° 004133, Letra ED, año 2010, caratulado "S/ CANCELACIÓN DE FACTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL. CDTE. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009", a la Auditora Fiscal interviniente y a la Secretaría Contable de este Tribunal".

Que dicho acto administrativo fue notificado a la Sra. Ministro de Educación, mediante cédula de notificación de fs. 142, en fecha 25/11/11.

Que mediante Nota N° 18838/11 (fs. 141) la Sra. Ministro de Educación solicita en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley 50, insistir en el cumplimiento del acto observado, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello.

Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la Constitución Provincial y los artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Habilitar la Feria Administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 a los efectos de la emisión del presente acto administrativo.-

ARTICULO 2°.- Ratificar en todos sus términos los reparos efectuados a través del Acuerdo Plenario N° 2235.

ARTICULO 3°.- Remitir en insistencia a la Legislatura Provincial copia certificada del Expediente N° 4133 ED/10 caratulado: "S/ CANCELACIÓN DE FACTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL. CDTE. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009", en cumplimiento de lo establecido por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la Constitución Provincial y los artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

ARTICULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se deberá efectuar la remisión establecida en el artículo 2° del presente, quedando en su resguardo el expediente original a los efectos de efectuar su seguimiento; y notificará con copia certificada del presente acto administrativo, al Ministerio de Educación; a la Prosecretaría Contable a/c Secretaría Contable, y a la Auditora Fiscal interviniente, en el organismo.

ARTICULO 5°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 016

13-01-12

VISTO:

El Expediente N° 3012 IPV/10 caratulado: "S/ 72 VIVIENDAS B° MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE", y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución Plenaria N° 481/2011 se dispuso: "ARTICULO 1°: Mantener la observación N° 1 del Acto de Constatación T.C.P. - I.P.V. (Control Previa) N° 364/11, mantenida por la Disposición Secretaría Contable N° 180/11, ella de conformidad a los fundamentos expuestos. ARTICULO 2°: Hacer saber al Sr. Presidente del Instituto Provincial de Viviendas que en el marco de lo establecido por la Resolución Plennria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley 50 podrá

en el plazo perentorio de cinco (5) días de notificado, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, insistir en el cumplimiento del acto observado. **ARTICULO 1°:** Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, notifican al Presidente del Instituto Provincial de Vivienda, con remisión de expediente del Registro del Instituto Provincial de Vivienda, N° 3012/10, caratulado "OBRAS DE VIVIENDAS B° MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE", y en el Organismo a la Auditora Fiscal interviniente, a la Secretaría Contable y a la Secretaría Legal. "

Que dicho acto administrativo fue notificado al Sr. Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante cédula de notificación de fs. 564, en fecha 30/12/11.

Que mediante Nota N° 25/12 (fs. 587) el Sr. Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda que se hacen las actuaciones a la Legislatura Provincial en INSISTENCIA en el marco de lo establecido en la Resolución Plenaria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la Constitución Provincial y los artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Habilitar la FERIA Administrativa dispuesta por la Resolución Plenaria N° 310/2011 a los efectos de la emisión del presente acto administrativo. **ARTICULO 2°:** Ratificar en todos sus términos el reparo efectuado a través de la Resolución Plenaria N° 25/2012.

ARTICULO 3°: Remitir en insistencia a la Legislatura Provincial copia certificada del Expediente N° 3012 IPV/10 caratulado: "S/ 72 VIVIENDAS B° MALVINAS ARGENTINAS - RIO GRANDE", en cumplimiento de lo establecido por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la Constitución Provincial y los artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

ARTICULO 4°: Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros se deberá efectuar la remisión establecida en el artículo 2° del presente, quedando en su resguardo el expediente original a los efectos de efectuar su seguimiento; y notificará con copia certificada del presente acto administrativo, al Instituto Provincial de la Vivienda; a la Prosecretaría Contable a/c Secretaría Contable, al Secretario Legal, y a la Auditora Fiscal interviniente, en el organismo.

ARTICULO 5°: Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y publicará la presente Resolución Plenaria en el Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar.

LONGHITANO
CABALLERO

RESOL. N° 017

27-01-12

VISTO:

EL Expediente del registro de la Gobernación N° 17110 EC/2011, caratulado: "S/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CON LA FIRMA NÓMADE SOFT S.R.L."; y.

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones fueron intervenidas en el marco del control posterior por la Auditora Fiscal C.P. LUCENA RETAMAR, quien emite el Acta de Constatación N° 218/11 (fs. 81) en la que formula 10 observaciones.

Que a fs. 96 toma nueva intervención como consecuencia de los descargos formulados, emitiendo el Informe Contable N° 568/11 en el que levanta los reparos 6, 9 y 10 y mantiene el resto.

Que a fs. 107 toma intervención la Prosecretaría Contable a/c de la Secretaría Contable, quien emite el Informe Contable N° 17/12, en el que expresa lo que textualmente a continuación se transcribe: "Del análisis practicado por la suscripta al Informe N° 568/11, indico a continuación las siguientes consideraciones en torno a determinadas observaciones:

Observación N° 4: La misma refiere a la falta de indicación en el ítem b), Punto 2 del Anexo I del Contrato de Mantenimiento suscripto bajo el N° 15266, del momento de presentación de la factura, incumpliendo lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11, Título "Facturas y Pago" y el Punto 5), inciso f) del Anexo I de

la Resolución de la Contaduría General N° 20/11.

Del análisis efectuado a la observación y dado el descargo presentado por el contratador, es de enmienda de la suscripta que, si bien la misma se remite a la Auditora Fiscal, en cuanto a la falta de indicación expresa en el anexo del contrato del momento de presentación de la factura, conforme lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11, Artículo 14, Apartado 34, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION y la Resolución de Contaduría General N° 20/11. Punto 5, ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y PAGO, apartado f) Recepción del bien o servicio, en caso de no presentarse el proveedor la factura en el momento allí indicado, en cada trámite de pago, se incumplirán, recién en esa instancia, las normas señaladas por la Auditora Fiscal actuante.

Asimismo, es opinión de la suscripta que, al no previr en el contrato el momento de presentación de la factura, no obstante establecer en el mismo que, una vez finalizado el circuito de pago, la administración tiene veinte (20) días de plazo para cancelar la misma, en caso que, su presentación, se realice con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, le corresponde computar el plazo antes citado desde la fecha de su presentación, en virtud de lo prescripto en el Decreto Provincial N° 674/11, en el apartado mencionado en el párrafo que precede.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde aclarar que, de la lectura de la Cláusula Tercera del contrato, **PRECIO A PAGAR**, que establece que, el contrato de mantenimiento será pagadero en cuotas mensuales y consecutivas a ser abonadas del 01 al 10 de cada mes, dicho lapso de tiempo podría no coincidir con la fecha de finalización del plazo fijado en el circuito de pago previsto en el Anexo I, razón por la cual, en mi opinión, la citada cláusula podría contraponerse con el anexo.

Observación N° 5: La observación refiere a que, el inciso c) del Punto 2 del Anexo I del contrato, que prevé la suspensión del servicio de mantenimiento por parte de la firma Nomade Soft S.R.L., en caso de retraso en el pago de una cuota, vulnera el Artículo 99°, inciso c) de la Ley N° 141, en atención a lo dispuesto en el Artículo 100° de la misma norma legal.

Al respecto, en mi opinión, solo correspondería, salvo mejor criterio, recomendar a la administración que reconsidere incorporar en los contratos una cláusula como la indicada, en atención a que, la cesación de un servicio como el contratado, resendiría el funcionamiento de la administración.

Observación N° 7: Refiere a la falta de acreditación en los actuados de la exclusividad de la firma en razón del cuadro en que se ampara la contratación, esta Artículo es 26°, inciso c) y d) de la Ley N° 6.

Previo a emitir mi opinión respecto de la presente observación, debo indicar que, en la observación expuesta en el Acta de Constatación N° 218/11, en donde la Auditora Fiscal indicó como norma incumplida al Decreto N° 1505/02, quiso decir Decreto N° 674/11.

Verificado el análisis efectuado por la misma, debo indicar que comparto la opinión allí vertida en cuanto a la falta de documentación respaldatoria que justifique la presente adquisición en la excepción de exclusividad, dado que no se ha adjuntado el informe técnico pertinente que justifique la necesidad de encuadrarla en dicha apartado de la ley de contrataciones. Al respecto se transcribe, en su parte pertinente, lo expresado en la Resolución Plenaria N° 008/11: "...Deben encontrarse reunidos y acreditados ambos recaudos: la capacidad especial exclusiva de un proveedor y la imposibilidad de alcanzar el resultado o la finalidad prevista a través de otro contratista cuyos trabajos, bienes o servicios ofrecidos no reúnan ciertas condiciones. Si no se dan tales presupuestos, la contratación será inválida..."

No obstante lo expresado y si bien es cierto que la Auditora Fiscal tuvo intervención en el Expediente N° 3830/SG/2011, la justificación de la excepción, mediante el informe técnico correspondiente, debe obrar igualmente en las presentes actuaciones, sin perjuicio de aclarar que, en el expediente antes citado, la contratación tiene además un objeto diferente al analizado por la presente, es decir, mantenimiento y transferencia tecnológica. En este sentido, entiendo que, de obrar conforme la manifiesta el Sr. Ministro de Economía, se incumple el Artículo 27° de la Ley N° 141.

Observación N° 8: Refiere a que, la Cláusula Décima del contrato, si no encontrarse definida, vulnera el Artículo 99, inciso c) de la Ley N° 141.

Verificado el análisis efectuado por la Auditora Fiscal, debo indicar que comparto la opinión allí vertida, toda vez que, al quedar supeditado a reglamentación futura parte del objeto del contrato, el mismo, o su firma, era incierto, indicando el Sr. Ministro de Economía, que, a la fecha del descargo (22/12/11), se está aun trabajando en el plan integral de capacitaciones.